¡Proletarios de todos los países, uníos!



El marxismo-leninismo y nuestra época

# LOS 1000 DIAS DE REVOLUCION

## Dirigentes del PC de Chile analizan las enseñanzas de la experiencia chilena

LOKK
$10.000

EL MARXISMO-LENINISMO
Y NUESTRA EPOCA

# LOS 1000 DIAS DE REVOLUCION

## Dirigentes del PC de Chile analizan las enseñanzas de la experiencia chilena

Editorial Internacional
PAZ Y SOCIALISMO
Praga—1978.

Bajo la supervisión de K. Zaródov
Redactores-compiladores: A. Vólkov y S. Yarmoliuk

# SUMARIO

# A LOS LECTORES

Han pasado siete años desde aquel día en que en Chile, como resultado de una creciente movilización de masas, accedió a la dirección del poder ejecutivo la Unidad Popular, encabezada por Salvador Allende, dando inicio a un profundo proceso de transformaciones revolucionarias. Y han transcurrido 4 años desde el momento en que un golpe contrarrevolucionario, organizado por la reacción internacional e interior, detuvo el proceso revolucionario chileno. Pero la experiencia y las enseñanzas de los acontecimientos de Chile siguen atrayendo la atención del movimiento comunista y obrero, de las fuerzas de liberación nacional, de la opinión pública y de los investigadores de las distintas esferas de las ciencias sociales.

La experiencia del desarrollo de un proceso revolucionario por vía pacífica y, a la vez, las enseñanzas que este período entrega acerca de la necesidad de defender las conquistas revolucionarias, encontrando las formas y los medios de oponerse y derrotar a las fuerzas de la reacción internacional e interior, son objeto de la particular atención de los comunistas y de otras fuerzas progresistas. También nuestros adversarios ideológicos –entre los que estos últimos años, como fenómeno característico, han aparecido no pocos «consejeros» y «personas bienintencionadas»– interpretan a su modo los acontecimientos, desvirtúan lo ocurrido en Chile e inducen a conclusiones erróneas.

El libro que ofrecemos a los lectores proporciona un nuevo y rico material analítico y fáctico sobre los acontecimientos de Chile. En él se incluye artículos escritos para REVISTA INTERNACIONAL por dirigentes del Partido Comunista de Chile, los cuales prosiguen y profundizan el

análisis de un período culminante en la historia de la lucha revolucionaria en su país. Entregando nuevos antecedentes y sintetizando el proceso de investigación y análisis que continúa efectuando su Partido sobre este período, los autores dan respuesta a una serie de problemas fundamentales, algunos de ellos insuficientemente esclarecidos hasta ahora, y refutan interpretaciones que tergiversan los acontecimientos. El análisis emprendido tiene gran importancia desde el ángulo de la teoría marxista-leninista y de la práctica actual del movimiento comunista y la lucha revolucionaria de los trabajadores. Entre los problemas de palpitante actualidad examinados en el libro figuran la relación entre las etapas democrática y socialista de la revolución chilena; los problemas de la conquista del poder y la experiencia del desarrollo pacífico del proceso revolucionario en esta fase; el rol de la clase obrera en la revolución chilena, el papel del Partido Comunista y la política de alianzas; el problema de la conservación y el ejercicio del poder; las causas de la derrota temporal de la revolución; las nuevas formas de resistencia de la reacción, la «guerra sicológica» como arma del imperialismo; la incidencia de los factores externos, el carácter internacional de la acción de las fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias. Cierra el libro un artículo del camarada Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista de Chile, quien sintetiza los resultados del análisis y muestra las perspectivas del desarrollo del proceso revolucionario en su país.

En opinión de los editores, el libro despertará el interés de los teóricos y militantes revolucionarios de diferentes países, de los especialistas que investigan los problemas examinados y de un amplio círculo de lectores que se sienten atraídos por las cuestiones del movimiento comunista y la lucha revolucionaria de la clase obrera y las fuerzas populares.

El libro aparece en ruso, español, inglés, francés y alemán. Se ruega que los juicios sobre el mismo se hagan llegar a la siguiente dirección: Editorial Internacional Paz y Socialismo, Thákurova 3, 166 16 Praga 6, Checoslovaquia.

# PRIMERAS CONCLUSIONES*

**René CASTILLO,**
miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Chile

1.

EL GOLPE MILITAR fascista que derrocó el 11 de septiembre de 1973 al Gobierno Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende conmovió profundamente a la humanidad progresista. Surgió una poderosa campaña de solidaridad internacional con el pueblo de Chile agredido, comparable a las más altas expresiones de internacionalismo que hayan tenido lugar en toda la historia del movimiento obrero.

Uno de los factores que explican estas manifestaciones es, sin duda, la brutal ferocidad de la represión desatada por los fascistas. Decenas de miles de muertos, decenas de miles de prisioneros, centenares de miles de proscritos, que es el resultado de esa represión, no podían sino herir intensamente la conciencia de la humanidad. Esta se ha expresado aunando las voces de condena de todos los demócratas. Pero la magnitud de la ola solidaria se vincula también a la honda repercusión que había alcanzado en el mundo la experiencia chilena, el esfuerzo inicialmente exitoso del movimiento obrero y popular que, al conquistar el Gobierno en la elección de 1970, se abría paso al poder sin recurrir al enfrentamiento armado generalizado.

El éxito del proceso revolucionario chileno interesaba profundamente a la clase obrera internacional, y, más allá de ella, a millones de hombres. La experiencia chilena no era mirada, ni debía serlo ciertamente, como un modelo. No obstante, este proceso mostraba que, en las condiciones de nuestra época, la clase obrera y el pueblo pueden abrirse

* Este artículo fue escrito poco después del golpe de Estado contrarrevolucionario y constituye uno de los primeros análisis de los comunistas chilenos acerca de los logros y las causas de la derrota transitoria de la revolución. Los materiales posteriores, que se publican en el presente libro, han sido preparados en 1977 y muestran la continuación de este proceso de análisis.

camino al poder en los marcos del sistema estatal burgués cuando la fuerza del movimiento revolucionario y su capacidad de alianzas con distintos sectores sociales logran desarrollar y garantizar el democratismo en la vida política aún bajo el poder reaccionario y crear una correlación de fuerzas capaz de impedir el desencadenamiento de la violencia armada reaccionaria para oponerse a su victoria.

Precisamente por la considerable repercusión del proceso revolucionario chileno en las filas revolucionarias y democráticas en el mundo entero y, en particular en América Latina, el imperialismo se esforzó por frustrarlo y liquidarlo. En la intensificación de su agresión general en América Latina para asegurar su dominio en lo que los monopolios yanquis consideran su «patio trasero», Chile recibió una embestida particularmente brutal. Ya en 1970, se constituyó un «grupo de trabajo» en el Consejo Nacional de Seguridad en Washington para planear en todos sus detalles la agresión contra nuestro pueblo.

El apoyo decisivo a la preparación del golpe (mejor dicho, de las sucesivas intentonas golpistas que hubo de enfrentar el Gobierno de la UP) por parte del imperialismo adquiere su significado cuando se analiza la intensa campaña de prensa posterior al derrocamiento del Gobierno Popular. El vocero del imperialismo y los grandes monopolios, el diario *El Mercurio* insiste reiteradamente en la significación internacional de la derrota popular reflejando el pensamiento íntimo de los reaccionarios en términos como los siguientes: «Los hechos que aquí sucedieron tienen resonancia universal, pues en Chile se logró dar vuelta al proceso revolucionario marxista, que es fundamentalmente irreversible. El comunismo ha fracasado... ha sido derrotado en su segunda estrategia: la vía legal, que sufrió un colapso en Chile el 11 de septiembre». ¡Curioso argumento! Los sedicentes defensores de la «legalidad y el orden» se vanaglorian de haber destrozado la institucionalidad. Se entusiasman con el baño de sangre que han provocado. De un drama luctuoso sacan cuentas alegres.

Lo ocurrido en Chile ha sido en verdad una derrota dura, aunque transitoria, que plantea, como es natural, una serie de interrogantes que imponen una respuesta de los revolucionarios. ¿Qué hizo el pueblo y la dirección revolucionaria para impedir el golpe de Estado? ¿Por qué la dictadura

fascista se consolidó en pocos días y no adquirió más fuerza la resistencia armada, plenamente necesaria y justificada en esa hora? ¿La derrota de la UP significa que se invalida la tesis de la posibilidad de la conquista del poder por vía no armada, en general? ¿Al menos tal ocurre para Chile? Son algunas interrogantes. La respuesta a ellas no importa sólo la decisión de asumir responsabilidades por lo pasado, obligación ineludible de los revolucionarios ante nuestro pueblo y el movimiento obrero internacional. Significa sobre todo obtener de este análisis las orientaciones para cumplir la tarea ineludible de esta hora: terminar con la dictadura fascista y crear las condiciones para erradicar para siempre el fascismo de nuestro país.

Por otra parte, el examen crítico no quedará agotado de una vez y para siempre. En muchos aspectos el tiempo aportará nuevos antecedentes y puntos de vista. No pretendemos por tanto cerrar con este análisis un debate que tiene gran trascendencia para el movimiento revolucionario.

LA VICTORIA POPULAR EN CHILE EN 1970 fue la culminación de un intenso proceso de combates de masas que abarcó todos los frentes de la lucha social. Fue posible porque el movimiento popular consiguió unirse en torno a una línea política correcta que definió acertadamente el carácter de la revolución chilena. Señaló con precisión los enemigos fundamentales: el imperialismo y la oligarquía monopolista y terrateniente y apuntó en esa dirección el golpe principal. La clase obrera construyó un frente político y social –la Unidad Popular– que fue capaz, gracias a esa política general correcta (que permitió contar en momentos decisivos con la colaboración de otros sectores sociales, que actuaron de consuno con la UP para oponerse a los designios reaccionarios), de conquistar el Gobierno del país y con ello una parte del poder político, la más dinámica y significativa. Contando con esa posición privilegiada, el movimiento popular abrió un proceso de transformaciones revolucionarias de la sociedad chilena en medio de una aguda disputa por el poder con las viejas clases dominantes.

Las transformaciones impulsadas por la clase obrera y el pueblo habían sido definidas en el Programa de la Unidad Popular de acuerdo con el carácter de la etapa revolucio-

naria: se trataba de superar el atraso y la miseria poniendo fin a la dominación extranjera y de la oligarquía. El cumplimiento de tales tareas exigía la unidad más amplia del pueblo y, a la vez, abría camino a la colaboración con fuerzas que no estaban en la Unidad Popular para llevarlas adelante. A fines de 1970 Luis Corvalán, Secretario General del Partido, definía esta perspectiva en los términos siguientes: «En virtud del carácter mismo de la revolución chilena, de los intereses de clases y capas populares, de la necesidad de aislar a los reaccionarios, de derrotar sus maniobras sediciosas, de impedir la intervención extranjera, de enfrentar las presiones del imperialismo, de darle, en fin, un respaldo nacional al Gobierno, en virtud de todo esto puede y debe desarrollarse todavía más la unidad del pueblo y convertirse éste en una fuerza realmente invencible. ¡Tal es la cuestión principal que hay que resolver en los días que corren!»[1]

Las tareas acometidas, la nacionalización de la Gran Minería del Cobre; la creación del Area de Propiedad Social sobre la base de la nacionalización de grandes monopolios; la estatización de la banca; el impulso a la Reforma Agraria; la redistribución del ingreso en favor de los trabajadores; los avances en la solución de los problemas de la vivienda, la salud y la educación; el establecimiento de una política exterior independiente y, de manera especial, el gigantesco desarrollo de la participación del pueblo en la conducción de los destinos del país a través del fortalecimiento de los sindicatos y de la Central Unica de Trabajadores, de los organismos de participación en las empresas, de las Juntas de Abastecimientos y Precios, etc.; son todos hechos que subrayan el carácter profundamente nacional, popular y revolucionario del Gobierno que encabezaba Salvador Allende. Más allá de la derrota transitoria estos logros constituyen una herencia inapreciable para el pueblo de Chile que, aunque sean borrados temporalmente por la dictadura, subsistirán como ejemplos que impulsarán a la clase obrera y los más vastos sectores del pueblo al combate.

Sin embargo, este proceso que recogía objetivamente las aspiraciones y defendía los intereses de la mayoría del país ha sido derrotado. ¿Por qué? En primer lugar, porque un proceso de esta naturaleza, que significa destruir para

siempre en Chile el poder y la riqueza del capital extranjero y la oligarquía nativa, que habían detentado privilegios por más de 150 años, no podía ser tolerado por ellos y lo combatieron con saña para hacerlo fracasar.

El proceso chileno confirma crudamente la validez de la concepción marxista acerca de que las viejas clases no abandonan voluntariamente el poder. Al revés, lo defienden con dientes y uñas. La conquista de posiciones de poder político por la clase obrera y el pueblo a través de una vía no armada no invalida en absoluto esa realidad. Más aún, obliga a tener muy en cuenta la apreciación de Lenin sobre el comportamiento de los reaccionarios cuando son derrotados. Sus palabras, escritas poco después de la Revolución de Octubre, se confirmaron también en nuestro país: »Durante mucho tiempo —escribió Lenin—... los explotadores siguen conservando de hecho, inevitablemente, tremendas ventajas: conservan el dinero..., algunos que otros bienes muebles, con frecuencia valiosos; conservan las relaciones, los hábitos de organización y administración, el conocimiento de todos los «secretos» (costumbres, procedimientos, medios, posibilidades) de la administración;... conservan (y esto es muy importante) una experiencia infinitamente superior en lo que respecta al arte militar... sus relaciones internacionales son poderosas... Después de la primera derrota seria, los explotadores derrocados, que no esperaban su derrocamiento ni creían en él, que no aceptaban ni siquiera la idea de que pudiera producirse, se lanzan con energía decuplicada, con pasión furiosa y odio centuplicado a la lucha por la restitución del «paraíso» que les ha sido arrebatado...»[2] Esto era válido para nosotros con el agravante que los reaccionarios tenían además fuertes posiciones en el aparato estatal, en el Parlamento, en el sistema judicial, en los medios de comunicación de masas.

Usando todos esos recursos, la reacción declaró la guerra a muerte al Gobierno Popular y recurrió a formas que son lecciones que ha aprendido nuestro pueblo y que confiamos servirán a otros pueblos del mundo. Algunas son las siguientes.

La lucha de la reacción contra las fuerzas populares, contra comunistas y socialistas en especial, se hace en nombre de la libertad y la democracia. Pero a medida que

la lucha de clases se agudiza, los reaccionarios echan por la borda toda forma democrática en cuanto entran en contradicción con sus intereses. Si esas formas democráticas permiten al pueblo tomar en sus manos la conducción del país, o una parte del poder, son atacadas implacablemente por sus sedicentes defensores. En momentos tales la burguesía no vacila en recurrir al terror y al crimen como métodos de política, los que, mientras está en el poder, condena «por principio».

La experiencia chilena muestra fehacientemente que las formas democráticas sólo pueden ser mantenidas y desarrolladas por la clase obrera y el pueblo. En nuestra época, sólo los procesos revolucionarios, la marcha al socialismo, son garantía real de democratismo político. La lucha por la democracia se funde íntimamente con la lucha por el desarrollo socialista.

De otro lado, cuando el proceso de lucha por la conquista del poder se desarrolla por la vía no armada, la «legalidad», que en manos de las clases dominantes les da una fuerza considerable en su lucha contra la revolución, legitima ahora el poder revolucionario ante capas importantes de la sociedad y se transforma, parcialmente, en un factor que ayuda a la transformación revolucionaria y a la acumulación de fuerzas. Pero, desde que esta forma de tránsito implica la subsistencia temporal de estructuras del viejo Estado, el movimiento revolucionario no puede perder de vista que el contenido de las formas democráticas heredadas del viejo régimen está marcado por su carácter de clase y que el desarrollo del democratismo incluye necesariamente la lucha por cambiar el carácter de clase del Estado, garantia indispensable del desarrollo revolucionario. El enemigo trata de sacar provecho de esa circunstancia y fuerza la utilización de las formas estatales en que mantiene influencia para avanzar a la liquidación de la institucionalidad ahora inservible a su dominación de clase. En este sentido nuestro Gobierno cometió errores que permitieron el aprovechamiento abusivo de las formas democráticas por parte de los reaccionarios, lo que les permitió crear las condiciones para liquidar todo democratismo a través del golpe de Estado fascista. Influyeron negativamente concepciones idealistas de la libertad, que abordaban los problemas al margen de la lucha de clases en

curso, las que se tradujeron en tolerancia frente a los desbordes fascistas y permitieron su desarrollo.

En las condiciones de lucha generalizada por la conquista de una parte del poder político en los marcos de un régimen estatal burgués la lucha ideológica adquiere una especial relevancia. En las masas pesa todavía fuertemente, peor aún, por un tiempo predomina, la ideología de las viejas clases. Si a eso se agrega el predominio reaccionario de los medios de comunicación que generan esa ideología (prensa, radio, televisión, cine, escuela) todo ello se transforma en una poderosa arma en los intentos de restauración burguesa. Para tener éxito, las fuerzas populares deben ser capaces de batir al enemigo en este campo. Sin embargo, fuimos incapaces de equilibrar siquiera la desproporción entre los medios de comunicación social, que se encontraban en manos de los reaccionarios y los que poseían las fuerzas progresistas y también de usar organizadamente aquéllos de que disponíamos. El enemigo, en cambio, desató desde ellos una ofensiva virulenta y deformadora que contribuyó a engañar a vastos sectores del pueblo.

Desde que la clase obrera y el movimiento popular asumen responsabilidades de Gobierno, sus obligaciones en el campo de la economía nacional se convierten en decisivas para el éxito de su política, para la consolidación y el desarrollo de sus posiciones en la lucha por el poder.

Al perder el ejercicio del poder político, la reacción actúa sin clemencia para arruinar el país. En el caso de Chile los monopolistas y terratenientes no vacilaron, por ejemplo, en desatar el sabotaje económico sin importarles el daño que causaban al país ni inclusive a sus propios intereses individuales (que para ellos son, evidentemente, más importantes que los de la Patria) con tal de crear dificultades al Gobierno.

Los problemas económicos heredados (pesada deuda externa, atraso agropecuario, pobre infraestructura, en el caso de Chile) se ven agravados por tales maniobras. Además la demanda social se incrementa por el propio efecto del avance revolucionario y deja de ser determinada por las viejas relaciones capitalistas y su distribución de rentas para pasar a ser determinada en alto grado por las necesidades sociales reales sobre todo de artículos indispensables.

Las tareas conducentes a la generación real de mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador, el aumento de la producción y la productividad, la disciplina consciente en el trabajo de la clase obrera liberada de la explotación, son logros indispensables que la dirección revolucionaria debe alcanzar. Sólo su cumplimiento permite contrarrestar el daño del boicot, el sabotaje, la especulación, el mercado negro, etc. consustanciales a la resistencia reaccionaria y, lo que es decisivo, mejorar las condiciones de vida de las masas.

Estos problemas, que se presentan de modo mucho más agudo en un país económicamente atrasado como Chile, no pudimos resolverlos adecuadamente. La reacción interna y externa logró éxito en provocar el caos y una aguda crisis económica que se agravó con nuestros errores y debilidades y esto tuvo una fuerte incidencia en nuestra derrota.

En resumen, la reacción usó todos los recursos de poder que permanecieron en sus manos para desarrollar una oposición frenética al Gobierno Popular. Se delinearon claramente dos centros de poder contrapuestos en todos los frentes de la lucha de clases, en combate enconado por el predominio.

La solución de esta disputa en favor del pueblo exigía elevar la actividad revolucionaria de la clase obrera y, a la vez, desarrollar ampliamente su capacidad de alianzas. La conquista de una sólida mayoría, capaz de aislar a los enemigos principales, es tarea decisiva que debe ser resuelta victoriosamente en cada coyuntura política. La experiencia que surgió del proceso mismo, de cada victoria alcanzada, lo confirma.

La victoria de 1970 no puede entenderse ni explicarse exclusivamente como una victoria electoral. En los hechos, la Unidad Popular obtuvo un 36,3 % de los votos en la elección de Septiembre que aunque representativo, sin duda, de una fuerza social mayor, si consideramos las restricciones inherentes a la democracia burguesa que reducen las posibilidades de expresión política de la clase obrera y el pueblo, representaba una mayoría relativa.

La consolidación de la victoria electoral, la instalación de Salvador Allende, triunfador con la primera mayoría, en la Presidencia de la República, se alcanzó en nuevos y ásperos combates de masas en septiembre-octubre de 1970,

en los que las fuerzas del pueblo, apoyándose en las tradiciones democráticas del país y haciendo pie en las contradicciones que separaban a distintas fracciones burguesas, generaron la unidad de acción de la Unidad Popular con otros sectores democráticos, particularmente del seno de la Democracia Cristiana. El movimiento popular creó en esas batallas una correlación de fuerzas favorable a la causa revolucionaria, unió a la mayoría del país contra los designios de los enemigos principales. Se frustró así el intento de golpe de Estado del 22 de octubre de ese año que terminó con el asesinato del General Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, a manos de los conspiradores reaccionarios.

La victoria de 1970 fue entonces una victoria de la mayoría no sólo porque el movimiento popular representa y defiende los intereses de ella, condición que cumple todo movimiento obrero y popular en general, sino porque esa mayoría identificó como propios los objetivos políticos que el movimiento popular representaba en esa coyuntura política para impulsarlos a la victoria. Sin esa premisa no hubiera habido posibilidades de triunfo.

La conquista de la mayoría para asegurar el éxito de la revolución chilena imponía e impone la necesidad de unir en torno a la clase obrera a una gama muy vasta de sectores sociales. Como en todo proceso revolucionario tenía y tiene un papel decisivo la unidad obrero-campesina y aún cuando el desarrollo acelerado de la Reforma Agraria promovió avances significativos en este campo, su nivel, tradicionalmente débil en la historia de las luchas de clases en Chile, siguió siendo insuficiente frente a las exigencias planteadas por la disputa por el poder.

En nuestras condiciones, la unidad en torno a la clase obrera requería incluir también a vastos sectores de capas medias y alcanzar de uno u otro modo a sectores de la burguesía no monopolista, particularmente mediana y pequeña. Cada vez que fuimos capaces de galvanizar la unidad de esos sectores, o la mayoría de ellos, en torno a consignas y acciones concretas se abrieron paso decisivas conquistas revolucionarias. La primera, precisamente, fue la instalación del Gobierno Popular.

NO OBSTANTE, YA ENTONCES se expresaron en el seno del movimiento popular diferencias de apreciación que difi-

cultarían la correcta dirección del movimiento popular y resultarían a la postre un factor decisivo en la derrota del 11 de septiembre.

En el movimiento popular se reconoce unánimemente por los partidos y movimientos integrantes de la UP que una de las claves de nuestra derrota fue la falta de una dirección única del proceso revolucionario capaz de llevar adelante una política de principios que sorteara los riesgos de las deformaciones oportunistas de «izquierda» y de derecha. El asunto decisivo en este terreno era y es el de una sólida unidad socialista-comunista que asegurara la unidad férrea de la clase obrera y junto con ello la unidad del frente político en su conjunto.

La unidad socialista-comunista tiene en Chile una antigüedad de casi 20 años y una vigencia plena y hoy todavía mayor. Pero obviamente no estaba exenta de dificultades y aún cuando esa unidad ha progresado incesantemente (también en los 3 años de Gobierno Popular) las brechas existentes, que en el período anterior al Gobierno eran superadas sin que dañaran gravemente al movimiento, producían en el fragor del combate de clases desencadenado después de la victoria popular, un efecto mayor, porque habían crecido nuestras obligaciones y porque el enemigo explotaba intensamente nuestras diferencias.

Las responsabilidades por las insuficiencias de nuestra unidad son mutuas. Nosotros, comunistas, no escabullimos las propias como la existencia de resabios de sectarismo en nuestras filas, en mayor medida a nivel de base, que dificultaba la discusión fraternal en la búsqueda de los acuerdos posibles en cada circunstancia, más aún cuando el carácter de clase de nuestro Partido y nuestra mayor capacidad orgánica nos obliga a asumir mayores responsabilidades al detectar las expresiones sectarias de la otra parte.

El Partido Comunista de Chile es el partido de la clase obrera, pero nuestra labor de dirección del proletariado y el pueblo en general, la forma en que desempeñamos nuestro papel de vanguardia, va vinculada a la colaboración con el Partido Socialista, que tiene también fuertes posiciones entre los trabajadores. Esa orientación general correcta, que materializaba en lo esencial la unidad de las fuerzas revolucionarias del proletariado y la pequeña burguesía, que se había probado justa en los hechos, no

debía excluir la expresión más o menos abierta, según las necesidades, de la política de principios de la clase obrera. Llevamos adelante la discusión y esclarecimiento de nuestras posiciones de clase en los niveles dirigentes, pero sin desarrollar suficientemente la discusión en la base, en el seno del pueblo, para impedir la proliferación del revolucionarismo pequeñoburgués que dañaba la unidad socialista-comunista y con ello el proceso.

Precisamente, uno de los factores que agudizó los problemas de dirección única fue la permanente labor de zapa contra la unidad socialista-comunista y de la Unidad Popular realizada por la ultraizquierda, interesada sobre todo en la creación de un «polo revolucionario» con clara definición anticomunista, que se proponía desarrollar como centro de dirección que reemplazara a la «dirección reformista» supuestamente impuesta por nuestro Partido. Estas posiciones encontraron cierto eco en el seno del PS.

Algunos sectores revolucionaristas pequeñoburgueses propugnaban una concepción dogmática, que transformaba a todos los que no eran proletarios o semiproletarios en adversarios. Englobábase a toda la burguesía sin excepción en el concepto genérico de «clase dominante», ignorando el hecho real de que la gran burguesía monopolista y agraria, aliada del imperialismo, ejercía el rol dominante en la sociedad chilena, imponiendo también una pesada carga sobre otras fracciones burguesas y vastos sectores de capas medias de la ciudad y el campo y no sólo sobre el proletariado. Tal concepción desestimaba y desestima el carácter dependiente del capitalismo chileno, así como el fenómeno de concentración capitalista, características ambas de la época del capital imperialista y que generan contradicciones sociales específicas que el movimiento obrero tiene que tomar en cuenta obligatoriamente para definir su línea política y el campo de alianzas necesarias y posibles. Estas concepciones ultraizquierdistas dañaron seriamente al movimiento popular.

En correspondencia con tales criterios, los elementos izquierdizantes forzaron durante nuestro gobierno una política primitiva de enfrentamientos por doquier con empresarios pequeños y medianos, de tomas de fábricas y predios sin atender a su tamaño o significación económica, de tratamiento sectario de sectores de capas intermedias, que

condujo gradualmente al aislamiento de la clase obrera y transformó a esos sectores sociales desplazados por tal política en aliados de los enemigos principales, desmejorando la correlación de fuerzas en contra del Gobierno Popular en la lucha por el poder.

En el terreno político, los criterios ultraizquierdistas se expresaban en la condena de cualquier compromiso o alianza. Típica de tales concepciones era una visión deformada del Partido Demócrata Cristiano, partido de masas, que recogió en 1973 cerca del 30 % de la votación en una población electoral que abarcó el 85 % de la población activa del país. El PDC es un partido pluriclasista, cuya influencia abarca desde sectores del proletariado y el campesinado a capas de la burguesía monopolista, con una fuerte influencia en los sectores medios. No obstante, era enfrentado como si fuera una sola masa reaccionaria. Tal política facilitó extremadamente la labor del sector burgués reaccionario, encabezado por el ex presidente Frei, para unir a ese partido en torno a él y alinearlo en una actitud de oposición ciega al Gobierno Popular, lo que facilitó la labor de los golpistas a los que el Sr. Frei y su grupo prestaron abierta colaboración en la esperanza de volver a ejercer una parte del poder.

Estas concepciones sectarias se expresaron también en la oposición permanente de los ultraizquierdistas a la alianza del movimiento popular con el sector constitucionalista y patriota de las Fuerzas Armadas, lo que redundó en el debilitamiento de las posiciones de éste en sus instituciones y permitió la labor del fascismo para agrupar a la mayoría de la oficialidad en sus rangos, y a la postre, bloquear toda resistencia interna al golpe.

En el campo ideológico, los criterios dogmáticos se traducían en un desprecio casi completo de la significación de lo conquistado por el movimiento popular. El Gobierno Popular era enfrentado como supuestamente reformista y se trataba de desplegar luchas de masas contra él, luchas a las que se arrastraba a sectores atrasados de los trabajadores en base a una mezcla abigarrada de economicismo chato y fraseología revolucionaria.

Al mismo tiempo, se planteaban erróneamente asuntos como los relativos a la educación, que entorpecieron las relaciones del Gobierno con la Iglesia, cuyos personeros

más responsables mantenían una actitud abierta a los cambios sociales impulsados por el Gobierno Popular y sostuvieron una actitud de prescindencia partidista, hecho de la mayor significación histórica.

Como ha ocurrido históricamente, estos criterios y actitudes de los ultraizquierdistas se convirtieron en el caldo de cultivo para la fascistización relativa de la pequeña burguesía y otras capas medias, para la exacerbación de sus ánimos oposicionistas. La experiencia chilena comprueba una vez más que el imperialismo y la reacción sacan inmenso provecho del ultraizquierdismo y que lo promueven y lo alientan sistemáticamente y de diversos modos para derrotar a los pueblos. En Chile también ha quedado al desnudo, incluso para el revolucionarismo pequeñoburgués, el carácter oportunista del «izquierdismo pequinista». Han terminado dándose la mano con los usurpadores fascistas.

Ahora bien, las insuficiencias de dirección anotadas dejaban espacio no sólo al ultraizquierdismo, sino también a las expresiones del oportunismo de derecha, y muchas veces tales deformaciones partían del mismo centro social y político.

Uno de los rasgos más acusados de las desviaciones de derecha fue el economicismo que se logró introducir en algunos sectores atrasados políticamente de los trabajadores. Nuestro Partido había planteado a través de nuestro Secretario General, que en las condiciones del Gobierno Popular los intereses de los trabajadores ya no dependen tan sólo ni tanto del éxito de tales o cuales luchas reivindicativas, sino de la suerte que corra el Gobierno de la Unidad Popular, del cumplimiento de los objetivos programados.

Con el afán de erosionar la base popular del Gobierno, los partidos burgueses impulsaban un reivindicacionismo desenfrenado, pero lo más grave es que también actuaron en esa dirección representantes del ultraizquierdismo y sectores de la Unidad Popular influenciados, barnizando el reivindicacionismo con frases revolucionarias, buscando fortalecer posiciones partidistas sin parar mientes en contraponer sectores de trabajadores al Gobierno y hacer con ello el juego al golpismo.

La necesidad de subordinar la lucha reivindicativa a la lucha por el poder fue rechazada por esos sectores. Como se puede prever, tales manifestaciones de inmadurez pren-

dían de preferencia en los sectores obreros con menor tradición de lucha. Era el caso de los sectores de trabajadores de empresas pequeñas y medianas, con lo que estas formas economicistas contribuían también a separar a estas capas intermedias del Gobierno Popular.

Reflejo de esas mismas tendencias fue el comportamiento de estos sectores frente a la lucha por la producción y la productividad, batalla que el Gobierno Popular debía ganar para consolidar sus posiciones y resolver en su favor la cuestión del poder. Ante ella, los dirigentes ultraizquierdistas proclamaron que «los problemas de la economía y la producción no están colocados por encima de la lucha de clases», para concluir que «es responsabilidad de los grandes capitalistas el aumento de la producción» (sic). En medio del boicot y el sabotaje declarados proponían a las masas desligarse de responsabilidades en la esfera decisiva y, en último término, determinante del desarrollo social. Halagando a las masas, ignorando las tareas para ganar una fácil adhesión, la ultraizquierda y el oportunismo de derecha se entrelazaban estrechamente.

EL PROCESO REVOLUCIONARIO CHILENO se vio afectado también por manifestaciones de burocratismo, reflejo de una concepción no clasista del aparato estatal y de desconfianza en las masas populares. En aquella parte del Estado que puso en nuestras manos la victoria de 1970 se hicieron sentir algunas tendencias a «asimilarlo», a usar de él sin modificaciones, en contraposición a los esfuerzos por transformarlo por la vía, esencialmente, de la participación creciente de las masas populares en el ejercicio de funciones de poder.

Ciertamente, ningún gobierno dio nunca mayores posibilidades a la clase obrera y al pueblo de asumir responsabilidades en el control y la planificación de la vida social que el Gobierno Popular. Cuando anotamos la deficiencia estamos hablando del grado en que tal tarea se cumplió en relación con las necesidades del proceso revolucionario, con el ritmo del cambio del contenido de clase de las instituciones estatales.

El poder estatal (en puridad) de la burguesía empieza y termina en la burocracia. Los revolucionarios, en cambio, disponemos de aquello que Lenin llamaba «un recurso maravilloso» para decuplicar nuestras fuerzas y nuestra

eficiencia. Esta es la incorporación de los trabajadores a las distintas tareas de dirección del Estado, a la formación de esa «red extraordinariamente compleja y delicada de nuevas relaciones de organización, que abarquen la producción y distribución planificadas de los productos necesarios para la existencia de decenas de millones de seres».[3]

El cumplimiento a cabalidad de estas tareas exigía una actitud de plena confianza en las masas y de firmeza de clase. Para combatir el burocratismo, los comunistas nos esforzábamos por despojar al ejercicio de los cargos del Estado de privilegios, fijando a nuestros funcionarios salarios modestos y reintegrando el resto a las arcas fiscales. Presionábamos en el mismo sentido estableciendo rigurosas normas para evitar cualquier forma de corrupción o siquiera de ventajismo personal en su ejercicio. Promovimos a centenares de obreros a funciones dirigentes y luchábamos tesoneramente por la participación obrera y popular.

Sin embargo, los resultados no fueron suficientes y cometimos errores. Ejemplo de ello fue la generación de un sistema de participación en las empresas estatales paralelo a la organización sindical, que era generado por la misma masa de trabajadores, pero como dos funciones distintas y, en cierto grado, hasta contradictorias. Esta forma demoró la integración real de los trabajadores a la dirección de las empresas y generó una tendencia nociva en la vida del sindicato, puesto que constriñó a éste a ser vehículo del puro reivindicacionismo sin que asumiera orgánicamente responsabilidades en la dirección de la producción. La corrección de este error se inició cuando ya había producido daño.

En definitiva, todas las formas de oportunismo, de «izquierda» o de derecha, pesaron contra el movimiento popular, aunque algunas de ellas contribuyeron en forma decisiva a debilitar las posiciones de poder conquistadas.

Como lo expresamos en nuestro primer manifiesto luego del golpe fascista: «El Partido Comunista está absolutamente convencido que su posición de defensa irrestricta del Gobierno Popular, sus empeños dirigidos a buscar el entendimiento con otros sectores democráticos, principalmente en la base, sus esfuerzos tendientes a dar seguridad a los sectores medios de la población, su lucha permanente contra el peligro de guerra civil, su acción enfilada a con-

centrar los fuegos contra los enemigos principales —el imperialismo y la ultrarreacción—, su perseverancia en afianzar la unidad socialista-comunista, la unidad de la clase obrera y el entendimiento entre todos los partidos de la Unidad Popular, su afán por lograr un aumento de la producción y la productividad y el financiamiento propio de las empresas del área social y la máxima disciplina en el trabajo, conforman una política general enteramente justa.»[4] No obstante, no desaloja debilidades ni errores en nuestra acción.

Sin embargo, aunque esa política ganó gran audiencia en las masas y vastos sectores de la clase obrera y el pueblo se empeñaron con sacrificio en el cumplimiento de las tareas de la revolución, no logramos aunar firmemente en torno a ellas a todo el movimiento popular.

A la postre, la Unidad Popular no logró evitar el aislamiento de la clase obrera ni atraer a la mayoría de la población, cuyos intereses profundos estaban indisolublemente ligados al exitoso desarrollo del programa del Gobierno Popular. Esto determinó el desenlace. Nuestra derrota fue la expresión del aislamiento de la clase obrera. Eso decidió la victoria de la contrarrevolución en la disputa por el poder. Esto significa que más que una derrota militar, fuimos vencidos políticamente. (Nuestra derrota militar fue posible sobre todo porque fuimos vencidos políticamente.)

Nuestro Partido, actuando en estrecha relación con el Presidente Allende y empeñándose consecuentemente por alcanzar una unidad de criterio con el conjunto de la UP, se esforzaba por resolver el problema del poder en nuestro país sin recurrir a la lucha armada. Partíamos del hecho que cualquier vía de acceso al poder presupone la activa movilización de masas. Sin lucha es inconcebible el éxito del proceso revolucionario. La fuerza de las masas es indispensable para vencer la fuerza de la coerción reaccionaria que se opone inevitablemente al avance del pueblo hacia sus objetivos y para impedir el desencadenamiento de la violencia del sistema de poder reaccionario, siempre presente, real o potencialmente. La posibilidad de éxito de la vía no armada (llamada a veces pacífica, de un modo que resulta impreciso) se afirma en la capacidad de las masas para amarrar las manos de los que quieren desencadenar la violencia reaccionaria con las armas. Esta posibilidad se abre paso, en condiciones históricas dadas, en la misma

medida que la correlación de fuerzas favorece al pueblo y aísla a los reaccionarios.

Trabajando con esta línea obtuvimos importantes victorias. Como se sabe, desde que el Presidente Allende triunfó en las elecciones, el imperialismo y la oligarquía se propusieron primero impedir que asumiera la presidencia y luego que fracasaron en ese empeño se trazaron como objetivo derribar su Gobierno. En el curso de tres años, el pueblo de Chile enfrentó y derrotó sucesivamente el complot CIA-ITT (octubre 1970), la conspiración del Mayor Marshall (marzo 1971), la conjura del general Canales, el paro del transporte terrestre, comercio privado y sectores de profesionales (octubre 1972), el golpe del coronel Souper (junio 1973). En cada caso, la victoria del pueblo sobre los golpistas fue posible porque la correlación de fuerzas sociales creada por la acción del Gobierno, de los partidos y de las masas populares fue favorable al Gobierno Popular.

En cambio, el éxito del golpe del 11 de septiembre fue posible porque el imperialismo y la reacción interna lograron crear un amplio frente contra el Gobierno Popular. *Desde el punto de vista de clase*, dicho frente incluyó, además de la burguesía monopolista y la oligarquía agraria que conforman el centro reaccionario, a la gran mayoría de la burguesía mediana y pequeña, a la mayoría de los sectores medios y a sectores atrasados de otras capas del pueblo. *Desde el punto de vista político*, además de los partidos caracterizadamente reaccionarios, los golpistas comprometieron a su lado a la mayoría de la DC encabezada por el Sr. Frei y a sectores de la derecha desprendidos del PR. *Desde el punto de vista militar*, el enemigo logró arrastrar al golpe a la abrumadora mayoría de las Fuerzas Armadas y Carabineros e impedir prácticamente toda adhesión a la defensa del régimen democrático.

Esta situación se evidenció a pocas horas de iniciado el golpe. En muchos lugares se organizó la resistencia del pueblo en las primeras horas. Muchos de nuestros militantes y de la UP cayeron combatiendo heroicamente con todo lo que tenían a mano. Pero, la clase obrera y el pueblo, las direcciones de los partidos revolucionarios y el Presidente Allende comprendimos que no era el caso de lanzar todas las fuerzas y reservas a una lucha desigual.

El Presidente se dirigió al pueblo exponiendo sus decisio-

nes y criterios: «Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallar. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no puede dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Superarán otros hombres este momento gris y amargo. Tengo la certeza que mi sacrificio no será en vano...»

No es necesario subrayar la dignidad de estos conceptos y la entrega revolucionaria que fluye de ellos. Importa comprender también la apreciación de la coyuntura política del compañero Presidente, como duramente desfavorable para las fuerzas populares.

En este sentido es que definimos nuestra derrota como una derrota política antes que militar. El aislamiento de la clase obrera permitió el desencadenamiento de la violencia reaccionaria y, a la vez, *inhabilitó* la capacidad de respuesta armada de la clase obrera y el pueblo, cuya necesidad había sido proclamada públicamente por nosotros, ya que la transformaba en un holocausto.

El desenlace doloroso de esta etapa de la revolución chilena exige un análisis del problema de las Fuerzas Armadas y de nuestra actitud respecto de ella. Con el golpe del 11 de septiembre las FF. AA. chilenas fueron arrastradas a romper una tradición de largos años de prescindencia política, de profesionalismo y respeto a las instituciones democráticas.

El movimiento popular se apoyó en tales tradiciones para construir su vía revolucionaria. Ya en el Gobierno Popular, persistimos en tal orientación buscando desarrollar esas tradiciones democráticas y afirmar el carácter institucionalista de las Fuerzas Armadas para cerrar el paso a los intentos fascistas de transformarlas en cancerberos de la reacción.

Desarrollamos una política que, haciendo pie en el espíritu profesional y el respeto al Gobierno establecido, diera a las FF. AA. posibilidades de participar en las tareas de construcción económica sin perjuicio de su preparación para la defensa del país. En momentos de crisis, sobre la base de estos principios, establecimos una alianza con el sector constitucionalista, leal y patriota de esas instituciones que fue decisiva para derrotar la ofensiva sediciosa de oc-

tubre de 1972. Esta alianza pudo desarrollarse más de no haber sido entorpecida por las concepciones ultraizquierdistas.

Sin embargo, los golpistas llevaron adelante la conspiración desplazando a los mandos patriotas y leales al Gobierno Popular, apoderándose paulatinamente y a traición de los puestos claves. Su éxito tuvo bases objetivas: lograron imponer sus designios haciendo pie en la formación ideológica reaccionaria impuesta a las Fuerzas Armadas sobre todo por la penetración imperialista y aprovechando también la composición de clase de su oficialidad, cuestión que pesaba tanto más cuanto mayor era el aislamiento de la clase obrera. Un trabajo de zapa de mucho tiempo y un plan operativo iniciado ya en 1972, según confesión de Pinochet, culminaron con el golpe fascista.

Nosotros, por nuestra parte, no supimos apoyarnos suficientemente en la suboficialidad y la tropa, cuyo origen de clase los predisponía favorablemente al Gobierno Popular. De algún modo, nuestro esfuerzo por mantener el carácter profesionalista de las Fuerzas Armadas se apreció como contradictorio con el trabajo de esclarecimiento del significado del Gobierno Popular entre los soldados.

Hubo un cierto grado de ilusión acerca del peso objetivo del profesionalismo y espíritu constitucionalista en el seno de las FF. AA. Uno de nuestros errores más serios como Partido es haber sobrestimado en varios aspectos las capacidades democráticas del sistema estatal en Chile y no haber actuado a tiempo para transformarlo. Ocurrió así en relación con las FF. AA., también con relación a otros asuntos.

Tales son algunas lecciones de los acontecimientos trágicos en nuestro país.

## 2.

EL GOLPE MILITAR instauró en nuestro país la dictadura fascista. Es el gobierno de la ultraderecha, es la vuelta al pasado, el dominio del imperialismo y la oligarquía monopolista y terrateniente, no limitado por la Constitución ni las leyes, sino provisto de un poder absoluto y brutal basado en las armas e inspirado por un ánimo revanchista. La política aplicada por la Junta es la fiel expresión de su carácter de clase y de su ideología fascista.

La junta militar usurpó el poder contando con una situación política en la que la correlación de fuerzas era desfavorable al movimiento popular, cuando una mayoría no estaba dispuesta a defender el Gobierno legítimo. Ese bloque social agrupado en una u otra medida en torno a los enemigos fundamentales del pueblo chileno ha sido ya roto en sólo 6 meses por la política de la junta. Sus medidas repugnan a la mayoría de los chilenos, hieren sus intereses y frustran sus aspiraciones.

En el campo político estas orientaciones se expresan en la liquidación de todo democratismo. La utilización más extrema de la represión, la violación sistemática y cruel de los derechos humanos elementales, la anulación de todo derecho democrático es su primera característica. Chile ha sido sembrado de campos de concentración, de centros de tortura. Encubierto en el «estado de guerra interna», el fascismo ha hecho del asesinato una norma diaria y supone que por esa vía podrá liquidar la revolución, matando a los líderes más destacados. La vida de muchos patriotas, en primer término de Luis Corvalán, está en grave peligro.

La represión brutal no es un accidente, ni está determinada por las «necesídades» circunstanciales del cambio violento de Gobierno y la resistencia popular consiguiente, sino que está en la esencia misma del régimen que la reacción chilena e internacional han instalado y pretenden que permanezca en Chile. El propio Canciller Contraalmirante Huerta, yéndose de lengua, lo ha definido como fascista.

Los golpistas han terminado con el Estado de derecho e impuesto un Estado policial. Nuestro Partido ha expresado que el golpe militar ha arrasado con la institucionalidad, dejando sólo en pie el vetusto poder judicial y el títere que oficia de Contralor General de la República. Unos y otros han aceptado los *ukases* que los transforman en meros elementos decorativos. Los jueces refrendan lo resuelto por los tribunales de guerra, el Contralor acepta los bandos militares como leyes.

En el terreno cultural e ideológico se pretende suprimir el marxismo y además «todas aquellas doctrinas que lo encubren o le hacen el juego». Tarea semejante se proponían ya otros y se conoce el lugar que les ha correspondido en la historia.

Pero las tradiciones democráticas, fruto esencialmente de

largos años de lucha de la clase obrera y el pueblo, no las puede borrar el fascismo de una plumada. No pueden matar el amor a la libertad, ni los usos democráticos convertidos en parte integrante del carácter nacional. El pueblo en general, la extensa, combativa y organizada clase obrera sobre todo, están acostumbrados a ejercer sus derechos. Chile tiene una fuerte tradición de organización y expresión de las masas por canales diversos, particularmente una fuerte vida sindical y una tradición enraizada de partidos políticos. Estas tradiciones pesan en el presente como un factor de unidad de millones en pos de la renovación democrática.

Es de la más alta significación, y reveladora por sí misma, la actitud de la Iglesia ante lo inhumano de la represión. Muchos prelados y sacerdotes han tomado en sus manos la defensa de los perseguidos y han creado comités ad hoc,[5] con amplia ramificación nacional para prestar su ayuda, alentando a participar en ella a miles de fieles.

La política económica archirreaccionaria de la junta impuesta hasta ahora golpea a la mayoría inmensa de los chilenos. Descarga sobre los hombros de los trabajadores y otras capas del pueblo la crisis económica provocada esencialmente por el boicot y el sabotaje del período anterior al golpe y agravada por la crisis del capitalismo mundial.

Ha provocado una violenta ola de alzas que llevó el ritmo de inflación a 700 % anual (760 % según estimaciones de círculos universitarios), acompañado de una dramática reducción del poder adquisitivo de sueldos a salarios (superior al 40 %). La cesantía desatada por razones políticas y agudizada por la crisis económica golpea también a vastos sectores de capas medias, profesionales y pequeña burguesía con diferencia sólo de grado.

Es una política que propicia la acentuación de la concentración monopolista, que se propone acelerar la acumulación capitalista a costa de la superexplotación del trabajo asalariado, de la miseria de las masas, lo que se traduce en una violenta contracción del mercado interno. A la vez propicia la desaparición de la llamada «empresa ineficiente», tomando como patrón de referencia el nivel de productividad de los países capitalistas desarrollados. Para forzar ese proceso liquida los sistemas de protección aran-

celaria y, paralelamente, provoca una violenta contracción del crédito, de modo de hacer operar la «libre competencia», sin trabas, lo que equivale a decir que deja a la nación entera a merced del capital monopolista nacional y extranjero.

Una política tal golpea duramente a la clase obrera. Consustancial con ella es la represión a sangre y fuego que se ejerce sobre el movimiento sindical, la liquidación del derecho de petición y de huelga, los intentos por liquidar el movimiento unitario de los trabajadores, etc. Constituye una agresión también contra el campesinado, porque tal política se traduce en el campo en el despojo de la tierra conquistada a miles de campesinos y en la miseria del asalariado agrícola. Golpea a las capas medias, porque bajan sus ingresos y aumentan los impuestos para un Estado que opera ahora para financiar adicionalmente la expansión monopolista. Agudiza, en fin, las contradicciones entre la burguesía no monopolista y la monopolista en grado extremo. La «libre competencia» arruina a la mayoría de los propietarios medianos y pequeños. Los stocks no deseados han aumentado inmensamente en pocos meses. Una política como la que se aplica en Chile no deja espacio al reformismo burgués: los monopolios se apropian de todo y no hay excedente que sirva de base económica a una política populista. Todo ello se agrava por la corrupción imperante tipificada por el escándalo que constituye la rescindencia del contrato de aprovisionamiento de petróleo impuesto por el Gobierno Popular a la Esso Standard y cuya liquidación ha significado una pérdida de 300 millones de dólares para Chile.

De otro lado, la autoproclamada posición «nacionalista» de la junta definida mediante una campaña contra los extranjeros (emigrados políticos, intelectuales, obreros), típicamente fascista, no logra ocultar la sumisión antipatriótica a los dictados del imperialismo norteamericano, que es lo que marca la política internacional de la dictadura y su política de desnacionalización de nuestras riquezas. El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a imponer su dominio en el manejo de la economía chilena: sus inspectores ordenan y los «nacionalistas» acatan.

EN LA COYUNTURA POLITICA generada por el golpe fascista, la contradicción principal sigue siendo la que

opone al pueblo de Chile a la dominación del imperialismo y la oligarquía monopolista y terrateniente. Los enemigos fundamentales no han cambiado. Sí, ha cambiado la forma en que ejercen su dominio. La determinación de recuperar a cualquier precio los privilegios y posiciones perdidos en los 3 años de Gobierno Popular los han conducido al fascismo como la única forma de ejercer su dominación de clase, de restaurar su poder. En las nuevas condiciones, la forma del frente antiimperialista y antioligárquico es el frente antifascista, y las fuerzas que lo compongan llegarán a él por la defensa acendrada de los valores democráticos que son patrimonio de la nación chilena y que el fascismo pretende aventar, como también porque sus intereses sociales económicos están en abierta contradicción con la política que en este terreno impone el fascismo. Razones históricas concretas funden la lucha democrática con la lucha por las transformaciones revolucionarias.

La línea política del movimiento revolucionario en las duras condiciones de lucha del presente es importante asimilar rigurosamente la experiencia de nuestros éxitos y también de nuestros errores del pasado. En la línea política del movimiento popular no pueden tener cabida los errores sectarios que redujeron la capacidad de alianza de la clase obrera en el pasado inmediato. Aún más, toda concepción sectaria del camino a seguir, significa una ayuda a los fascistas.

Nuestro Partido ha expresado que la situación actual reafirma la vigencia de la unidad socialista-comunista, como expresión esencial de la unidad de la clase obrera, y de la Unidad Popular, en cuanto expresión unitaria de los sectores más conscientes del pueblo.

«*Pero al mismo tiempo, impone ir más allá a la acción común y la unidad con sectores del pueblo que no estuvieron con el Gobierno Popular. La línea divisoria entre el pueblo y sus enemigos no ha de trazarse mirando al pasado sino vista al futuro. La línea divisoria esencial no es la que dividía a los partidarios del Gobierno o de la oposición antes del golpe sino que es aquélla que separa a los fascistas y usurpadores del Gobierno de los que sufren las consecuencias de su política reaccionaria, de los que están por la renovación democrática, por los cambios sociales progresistas, por la independencia nacional.*»[6]

Es evidente que la Unidad Popular requiere, para cumplir su papel, resolver sobre la base del diálogo fraternal y las posiciones de principios un nuevo nivel de entendimiento que garantice una línea estratégica y táctica y una dirección conjunta única de los destacamentos revolucionarios superando las deficiencias del pasado. Esto es clave. En la UP se manifiesta una tendencia a reforzar el entendimiento sobre la base de una política de principios. Las manifestaciones de opinión que cada partido ha hecho independientemente, muestran un amplio rango de coincidencia en la necesidad de centrar los esfuerzos en la organización, la unidad y la lucha de las masas como la única base sólida para el desarrollo del proceso.

Otro de los asuntos claves en el terreno político es la participación más activa de la Democracia Cristiana en el Frente Antifascista. En su seno se debaten dos posiciones encontradas: de una parte hay quienes critican ocasionalmente la política actual de la junta pero sólo buscan un cambio de esa política respecto de ellos, que les permita un alero y la participación en la dominación burguesa. Es la posición del grupo que encabeza el Sr. Frei. De otra parte, los sectores democráticos y populares tienden a un entendimiento con la izquierda de acuerdo con sus principios libertarios y favorables a los cambios sociales. Esta pugna deberán resolverla los propios demócrata-cristianos.

El problema interno planteado en la Democracia Cristiana no es de nuestra incumbencia directa, pero debemos evitar el sectarismo que ayude al juego del sector reaccionario y, al revés, hacer evidente nuestra decisión unitaria para que la DC se integre plenamente y en un pie de igualdad en el Frente Antifascista. La unidad puede lograrse, cuenta con una base objetiva creciente en virtud de la actitud de los enemigos comunes.

El receso, verdadera ilegalización indefinida, ordenado por los fascistas contra el PDC y la liquidación de su diario por la vía de la asfixia económica y la censura, es, ante todo, consecuencia de la reacción de vastos sectores de ese Partido contra la junta, que ésta trata de ahogar con represión.

En el Frente Antifascista pueden también participar las organizaciones de izquierda que no formaron parte de la

UP sobre la base de un acuerdo sobre el programa y los métodos de lucha y de una relación respetuosa y fraternal en el trabajo común.

LA RENOVACION DEMOCRATICA no sobrevendrá sin combate. La resistencia activa, entendida por tal la actividad de las masas populares y sus organizaciones contra la dictadura, ha comenzado ya. Se expresa en la reorganización del movimiento obrero y popular, en combates de sectores de la clase obrera por sus derechos, todavía débiles y esporádicos ciertamente, pero altamente significativos si se tienen en cuenta las circunstancias de profundo reflujo provocadas por el golpe. Se expresa también en la solidaridad con los perseguidos como en los nuevos lazos unitarios que va tejiendo el pueblo.

La construcción del Frente no es una tarea fácil. En torno a él surge la necesidad de precisar un pensamiento común y encontrar soluciones prácticas a los problemas. En la medida que se desarrolle, el Frente Antifascista elaborará un programa de Gobierno de todas las fuerzas del pueblo. El objetivo final del Frente Antifascista que impulsamos las fuerzas populares es la derrota de la dictadura, la destrucción del Estado totalitario y policial que ésta ha establecido y la construcción de un nuevo Estado de derecho, democrático, antifascista, nacional, popular, pluralista que garantice la renovación democrática, la erradicación total del fascismo, el impulso de los cambios revolucionarios y la independencia nacional.

En el documento emitido por nuestro Partido poco después del golpe se precisa: «El pueblo volverá a ser Gobierno y no estará obligado por cierto a restablecer la institucionalidad que había hasta ayer. Dictará democráticamente una nueva Constitución, nuevos códigos, nuevas leyes, creará nuevas instituciones de poder, un Estado de derecho superior al que echó a pique el golpe militar. Bajo tal Estado de derecho se respetarán todas las creencias religiosas, existirá pluralismo ideológico, el humanismo, pero no habrá amparo para el fascismo, el delito económico o las actividades sediciosas.»[7]

No en vano el país pasara por la dolorosa experiencia que está viviendo. Han ido a parar al tarro de la basura falsos valores en los cuales mucha gente creía con sinceri-

dad. ¿Quién podrá defender mañana un poder judicial como el actual o un tipo de parlamento que feneció por su propia inacción ante el golpe militar?

La renovación democrática antifascista no significa, entonces, el mero retorno a la situación existente antes del 11 de septiembre sino un amplio desarrollo democrático. Las instituciones del nuevo Estado deberán asegurar realmente el ejercicio del poder por la mayoría y garantizar la eliminación del fascismo tanto civil como militar a la vez que crear instrumentos para aplastarlo si osa levantar cabeza.

Tanto por sus tareas como por su composición, el Estado que surja de la lucha del frente asegurará el pluripartidismo político y garantizará derechos para el normal funcionamiento de los partidos democráticos. En cuanto al Gobierno, nos pronunciamos por un Gobierno Popular pluripartidista, más amplio que el de la UP, fuerte, revolucionario, que garantice al país la estabilidad democrática y el acelerado progreso social.

OTRO ASUNTO CAPITAL que deberá resolver el Frente Antifascista es asegurar una profunda transformación en las FF. AA. y Carabineros. La instauración y permanencia del Estado democrático al que aspiramos no estaría garantizado sin resolver ese problema.

Las FF. AA. han sido colocadas al servicio de la restauración imperialista y oligárquica. Han impuesto el retorno al pasado a sangre y fuego. Los mandos fascistas las han cubierto de oprobio. Los generales y oficiales que se prestaron para arrastrar a sus instituciones a participar en la conspiración contra Chile y su pueblo han asumido una tremenda responsabilidad ante la historia y por la vida y la sangre derramadas. Serán condenados por ello. Han pisoteado el prestigio y la solvencia de las FF.AA. ante el pueblo y ante el mundo y terminarán destruyéndolas completamente si perseveran en la orientación actual. Los responsables de esta orientación, al quebrar y atropellar las mejores tradiciones de Chile y convertir a las FF.AA. en verdugos de su pueblo, se han hecho reos de un crimen de lesa patria.

No obstante, ni antes ni ahora concebimos la lucha social como un combate entre civiles y uniformados. De hecho, hay quienes visten el uniforme pensando en sus deberes

patrióticos y se han visto impedidos de evitar el terror desatado contra el pueblo pese a sus sentimientos democráticos. Más aún, muchos hombres de armas han levantado su voz contra el golpe y la represión fascista y han sufrido duramente por ello. Muchos de ellos han sido ejecutados en juicios sumarios o simplemente sin juicio. Cuando redactamos este artículo encaran proceso decenas de soldados, suboficiales y oficiales, para los que los fiscales solicitan desde varios años de presidio hasta penas de muerte. El desarrollo de una campaña solidaria para salvar sus vidas ha sido tomado en manos del Movimiento Popular.

Pero, lo que Chile requiere y exige son FF. AA. que nunca más, bajo ninguna circunstancia, se contrapongan a los intereses del pueblo y se conviertan, como instituciones, en cancerberos de los intereses de la oligarquía y el imperialismo. El documento de nuestro Partido al que hemos hecho referencia expresa: «Después de lo ocurrido, el pueblo tiene derecho a plantearse también como objetivo la creación de unas Fuerzas Armadas y policiales de nuevo tipo, o, al menos, a eliminar de las instituciones militares, carabineros e investigaciones a los elementos reaccionarios a fin de asegurarle a Chile que nunca más se repetirá lo que acaba de suceder.»[8]

El logro de estos objetivos no es sólo una responsabilidad del movimiento popular, sino también de los soldados y oficiales profesionales y democráticos.

Por otra parte, el desarrollo político que sigan las FF. AA. y Carabineros es un factor que determinará muy decisivamente tanto el carácter como la forma que asuma la resistencia antifascista. Los golpistas han impuesto en los altos mandos una orientación decididamente fascista y se empeñan en fascistizar todos los cuerpos armados. Pero las tradiciones democráticas y patrióticas rotas por el golpe no han muerto y este proceso encuentra oposición en sectores crecientes de la tropa, de suboficialidad y oficialidad. Influyen también en ellos el descontento general que produce la política de la Junta y la incertidumbre por el futuro.

El movimiento popular ha expresado su decisión de trabajar con la máxima amplitud para retomar las tradiciones democráticas y patrióticas a la vez que combatir enérgicamente y desenmascarar la política de la Junta. Los fascistas tratan desesperadamente de fortalecer sus posiciones apli-

cando un burdo ventajismo salarial para la oficialidad (sus salarios han sido dejados fuera de los cánones impuestos al resto de los trabajadores y el arbitrario «estado de guerra interno» les reporta un 15 % adicional) y provocando un aumento desmesurado de los hombres en filas, con la carga consiguiente de impuestos sobre las espaldas de los trabajadores, pero estamos seguros que no prevalecerán contra el pueblo.

LA LUCHA POR EL DEMOCRATISMO más amplio se funde, hemos dicho, con la conquista de las transformaciones revolucionarias. Entre ambos objetivos no hay ni habrá discontinuidad si se conquista la hegemonía de la clase obrera en el Frente Antifascista.

La conquista de la hegemonía por parte de la clase obrera puede resolverse sobre bases unitarias. Aunque todo proceso de frente único es un proceso de unidad y lucha, la victoria de la revolución sólo puede ser asegurada si la clase obrera lleva adelante, en general, su política independiente sobre bases de acuerdo con otros sectores sociales, no por la vía de la imposición. Las contradicciones en el seno del Frente son una ley de la vida social, pero no lo es el que tales contradicciones adquieran carácter antagónico. El rol hegemónico de la clase obrera sólo puede ejercerse prácticamente si conquista la mayoría de la sociedad y ello presupone la alianza con vastos sectores sociales y por tanto el funcionamiento del frente sobre bases de acuerdo. Las posibilidades de acuerdo son tanto mejores cuanto más fuerte es la clase obrera y mayor su actividad revolucionaria.

Lo revolucionario es agudizar las contradicciones sociales pero no en abstracto, sino en función de la agudización de la contradicción principal. Actuando así se asegura la fusión de la lucha por el democratismo y las transformaciones revolucionarias, la necesaria amplitud de las alianzas y el rol de la clase obrera de centro de la unidad y motor de los cambios revolucionarios que garantiza la profundidad del proceso.

El éxito de la clase obrera depende decisivamente también de la capacidad de empeñarse en la resistencia antifascista con formas de lucha y consignas adecuadas a la necesidad de unir a todas las fuerzas democráticas y sor-

tear también aquí, en base a una sólida política de principios, los riesgos del oportunismo de derecha o «izquierda».

El movimiento de masas capaz de hacer cristalizar una situación revolucionaria es el que se construye partiendo de los problemas concretos que enfrenta el pueblo. Las formas de lucha surgen del proceso mismo. La dirección revolucionaria organiza, generaliza y hace conscientes las formas de lucha que aparecen, teniendo en cuenta en cada momento el nivel de conciencia alcanzado por las masas populares y considerando la correlación real de fuerzas existentes y, obligatoriamente, la necesidad de que cada acción mejore esa correlación en favor del pueblo.

Las consignas importa concordarlas con los objetivos tácticos de cada etapa del proceso de recuperación revolucionaria, distinguiendo entre las consignas de carácter estratégico y táctico, las consignas de agitación y las de acción, comprendiendo su interrelación y haciéndola presente a las masas, pero evitando confundirlas.

Esto significa que la senda del terror individual, del aventurerismo o del putsch debe ser cancelada por el movimiento popular. La experiencia de estos meses de dictadura ha mostrado que los fascistas ansían que el pueblo se deslice a este tipo de acciones para justificar el terror que es la base de su poder. En el pasado, el terrorismo y la provocación prestaron considerable ayuda a los enemigos del pueblo. Ahora, dado el tipo de opresión, el resultado sería peor. Sobre estos asuntos han expresado su opinión coincidente las fuerzas más significativas del movimiento popular, en particular comunistas y socialistas.

Por otra parte, nuestro Partido estima que no debemos imponer desde ya cartabones o esquemas al desarrollo de etapas futuras de la lucha contra el fascismo y por la instalación de un nuevo Gobierno. Sostenemos que pretender resolver hoy este problema no ayudaría ni mucho menos al éxito del proceso revolucionario. Sin perjuicio de ello, son útiles ciertas precisiones.

En primer lugar, creemos indispensable afirmar que la experiencia de las luchas de clases en nuestro país, incluyendo nuestra dura derrota transitoria, no desmienten la teoría de la revolución elaborada por el movimiento obrero internacional. La posibilidad de la conquista del poder por la vía no armada en determinados países y en ciertas situa-

ciones históricas no ha sido cancelada por el golpe fascista en Chile como lo sostienen interesadamente los reaccionarios a parejas con el revolucionarismo pequeñoburgués, del mismo modo que el revés temporal de un movimiento nacional que se ha empeñado en una insurrección o en otra forma de lucha armada, no significa que la revolución no se hará en ese país, por una u otra vía.

Parece claro que en el caso particular de Chile se han estrechado considerablemente las posibilidades de un tránsito no armado del pueblo al poder político si se las compara con las existentes antes de 1970. Por de pronto el uso de las elecciones como un instrumento de lucha por el poder político ha sido cerrado por los golpistas por un período indefinido.

Por otra parte, el predominio fascista aumenta las posibilidades de que la reacción, enfrentada a la repulsa mayoritaria de los chilenos, persista en sus planes de aherrojar al pueblo de Chile al precio de una guerra civil y la desate contra el movimiento ascendente de las masas que exigen su desplazamiento del poder. La actuación de los golpistas en el presente, la extrema crueldad de que dan pruebas, avala esa impresión. En tales circunstancias la respuesta armada del pueblo sería obligatoria. En cuanto a sus formas, que pueden ser diversas, estarían determinadas esencialmente por el peso que la clase obrera tiene en la sociedad chilena, que hace mucho más probable una insurrección con combates generalizados a lo largo del pais que, por ejemplo, formas de lucha guerrillera.

No obstante, la amplitud del campo de alianzas que abre ante la clase obrera la misma existencia del fascismo, augura la posibilidad de acumular en nuestro favor una proporción tal de fuerzas que la reacción sea incapaz de recurrir a las armas para resistir la embestida del pueblo.

Cancelado el democratismo en la vida política, la guerra civil no es, en todos los casos, la única forma de abrir paso al pueblo. Una huelga general política, apoyada en la mayoría inmensa del país, puede amarrar las manos de los que quieren desencadenar la violencia reaccionaria armada. Así ocurrió ya en nuestro país y por tales medios se zafó el pueblo de Chile de la dictadura militar en 1931.

En resumen, nuestro Partido se esfuerza por evitar que una apreciación dogmática dañe la recuperación revolu-

cionaria y renovación democrática y se impongan formulaciones esquemáticas del revolucionarismo pequeñoburgués como «el poder nace del fusil». El poder nace de la fuerza de las masas, aunque es claro que los fusiles juegan un papel, como lo comprueba nuestra experiencia. Pero de ella también se desprende que los fusiles enmudecen o truenan según sea la fuerza del pueblo. Y que si truenan ante un pueblo fuerte, unido y movilizado éste encuentra cómo acallarlos, lo prueban otras experiencias revolucionarias.

En lo que debe insistirse es en que cualquiera sean las vías de la revolución lo básico es la más amplia y vigorosa movilización de las masas, aprovechando toda posibilidad de lucha, combatiendo en múltiples terrenos y uniendo más y más fuerzas alrededor de la clase obrera, lo que se facilita si las fuerzas revolucionarias refuerzan la vinculación entre los objetivos democráticos y las perspectivas socialistas de la revolución chilena. Así se consigue también acentuar el aislamiento del fascismo en todos los planos.

Lo esencial es el trabajo concreto, diario, paciente con miles y miles de trabajadores, pobladores, mujeres y jóvenes, clave del éxito de toda lucha.

Sin fuerza de masas no puede triunfar ningún proceso revolucionario. En este sentido, la violencia es consustancial a cualquier vía de acceso al poder de la clase obrera y las fuerzas populares. Esta violencia puede expresarse con armas o sin ellas. La forma necesaria depende del tipo de resistencia que oponga, o mejor dicho, que pueda oponer la reacción, lo que está en correspondencia con la actividad del proletariado, con el grado de aislamiento al que se pueda conducir a los enemigos, con los fenómenos que se dan en el interior de las FF. AA., con la situación internacional, etc. Como estas variables no pueden ser determinadas ahora, definir un esquema es un error y, con toda seguridad, el curso revolucionario lo haría trizas.

POCOS MOMENTOS ANTES DE SU MUERTE, cuando se dirigió por última vez al pueblo de Chile, el compañero Presidente Salvador Allende resumió en las siguientes palabras su fe inagotable, propia de un revolucionario consecuente, en las fuerzas de la clase obrera y el pueblo: «Tengo la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia digna de millones de chilenos no podrá ser se-

gada definitivamente... Sigan Uds. sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre digno para construir una sociedad mejor.»

Esa es nuestra convicción. No hay fuerza que pueda ahogar definitivamente el proceso revolucionario por duros que sean en ocasiones los reveses. Los comunistas chilenos tenemos plena conciencia de nuestra responsabilidad ante el movimiento obrero internacional y nos sentimos hoy más obligados que nunca, por la intensa campaña de solidaridad con nuestro pueblo llevada adelante por todos los demócratas, a desplegar todos nuestros esfuerzos en colaboración y unidad con los demás sectores revolucionarios para alcanzar la victoria sobre el fascismo.

Nuestro Partido está dispuesto a entregar toda su energía y su capacidad de combate, a hacer todos los sacrificios necesarios para contribuir a la lucha contra el fascismo.

La junta militar miente, calumnia y tergiversa los hechos en un vano esfuerzo por deformar la permanente actitud patriótica de los comunistas. Han puesto en práctica los métodos más brutales para doblegar a los prisioneros, militantes de nuestro Partido y de otros sectores populares, tratando de obligarlos a confesar crímenes o delitos inexistentes, con el objeto de hacer decaer enseguida la moral de combate de la clase obrera y del pueblo. No han conseguido minar su resistencia.

Los fascistas no han podido ocultar el hecho de que los condenados a muerte miembros de nuestro Partido, han llegado a enfrentar los fusiles de sus asesinos entonando himnos de combate, fieles a sus ideas, seguros de que aunque ellos mueran, su Patria y su Partido vivirán, convencidos de que la causa de la clase obrera y el pueblo es invencible.

Los reaccionarios más contumaces reconocen desesperados que no han logrado destruir al Partido Comunista. Exigen intensificar todavía más la represión para conseguir ese objetivo. Pero no lo lograrán. Como otros que lo intentaron en el pasado, fracasarán en su empeño. En su desvarío, han propalado la especie de que nuestro Partido estaría afectado por divisiones internas. Esta maniobra está igualmente destinada al fracaso. La unidad de los comu-

nistas es hoy más firme y acerada que nunca. Contra esa unidad se estrellan la delación, la infiltración y cada maniobra del fascismo. En estos días son miles los comunistas chilenos que trabajan afanosamente en el seno de las masas y para fortalecer al heroico Partido que se inspira en la doctrina inmortal del marxismo-leninismo y que Recabarren, Lafertte, Galo González, Fonseca, Neruda y tantos otros miles de luchadores forjaron hasta hacerlo indestructible.

Nuestro Partido combate con el espíritu puesto de manifiesto por su Secretario General, camarada Luis Corvalán, que desde las mazmorras de la dictadura ha proclamado la actitud comunista: «No temo por mí. Amo la vida, pero no temo a la muerte si fuera necesario caer por mi causa... ...Tengo la firme convicción que al final de este túnel oscuro, recuperaremos nuestra libertad y los trabajadores podrán finalmente ocupar en la historia el lugar que les corresponde.»

1 L. Corvalán. *Gobierno popular en Chile.* REVISTA INTERNACIONAL, n.º 12, 1970.

2 V. I. Lenin. *Obras Escogidas*, t. 3, págs. 90–91. Ed. Progreso, Moscú.

3 V. I. Lenin. *Obras Completas*, t. XXVII, pág. 237, Ed. Cartago.

4 *Declaración del PC de Chile*, octubre de 1973, *Boletin de Información*, n.º 1–2, 1974, Ed. Paz y Socialismo, Praga.

5 ad hoc (lat.) –creado a propósito– *N. de la Red.*

6 *Declaración del Partido Comunista de Chile*, diciembre de 1973.

7 *Al pueblo de Chile.* Declaración del Partido Comunista de Chile, Santiago, octubre de 1973.

8 *Ibidem.*

# OTRA VEZ SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE CHILE

**Volodia TEITELBOIM,**
miembro de la Comisión Política del CC del Partido Comunista de Chile

SI LENIN TOMO MUY EN CUENTA las enseñanzas de la Comuna de París y de la Revolución Rusa de 1905–1907, para sacar de esas experiencias de revoluciones armadas derrotadas las correcciones estratégicas y tácticas que condujeron a la Revolución de Octubre de 1917, para los chilenos es indispensable estudiar a fondo, extraer conclusiones teóricas y prácticas, aprender de lo sucedido en nuestro país durante los mil días de gobierno de la Unidad Popular, con toda su combinación de factores y rasgos típicos y atípicos. Encierran un material de análisis valiosísimo. Allí podremos apreciar a escala reducida, en un microcosmos social, dentro de un escenario localizado de un país de diez millones de habitantes, los caracteres de un drama político universal. Pueden observarse así, ante la realidad de la vida, méritos y fallas, aciertos y errores del movimiento popular. Es posible a la vez establecer los métodos y las técnicas, un verdadero manual de cómo la contrarrevolución contemporánea puede ahogar una revolución.

Por supuesto, estos manuales no tienen en política otro valor que señalar un caso específico sujeto a leyes generales, con todas las variaciones y adaptaciones singulares de tiempo y lugar que caracterizan a cada revolución y a cada contrarrevolución.

Podremos, pues, a la luz del examen objetivo intentar la crítica y la autocrítica de lo acontecido, proponer las enmiendas a nuestra actuación, saber cuál es la línea de acción abierta y encubierta del adversario; vale decir, permitirá indagar más claramente en la estrategia y las tácticas propias y en las del enemigo. Será un prólogo a las

rectificaciones necesarias para transformar la derrota del pueblo en victoria.

A NUESTRO ENTENDER, en última síntesis, los hechos de Chile demuestran que, en determinadas circunstancias, como consecuencia de una vasta y compleja evolución histórica, tras un laborioso proceso de acumulación de fuerzas y de unidad de sectores interesados en el cambio social, es posible alcanzar, a través de las urnas, algo que es mucho más que una mera y aún importante victoria electoral, pero que es a la vez mucho menos que el poder real. Los sucesos de Chile creemos que además prueban que el triunfo con el voto no constituye por sí solo una garantía definitiva de su consolidación. Puede éste convertirse en un significativo paso adelante por un camino generalmente largo, minado, pródigo en curvas peligrosas, que a menudo se desliza entre abismos y encrucijadas. Pero, si no se completa, si no es seguido por la acción desplegada, mayoritaria y a la ofensiva del pueblo para transformar esa victoria en los escrutinios en poder real, refrendado por la disposición y la capacidad de las masas para mantenerlo y defenderlo, contra viento y marea, contra todos los intentos de desconocerlo y destruirlo por parte del adversario de adentro y de afuera; si no lo consigue, es probable, o mejor dicho inevitable, su derrota.

En verdad, la victoria electoral habilita para ejercer sólo una parte del poder. Como comienzo de una nueva etapa y culminación de las anteriores, no nace de la noche a la mañana, de improviso, sino que es resultado del conjunto del proceso revolucionario, del desarrollo de la crisis de estructura en el país vinculada a la crisis general del capitalismo y a su agudización. Surge como corolario de la acumulación de factores previos que expresan la maduración de diversas formas de la lucha de clases.

Así se fue creando en Chile una situación prerrevolucionaria. El Partido Comunista concibió siempre el vehículo electoral como una forma de expresión en el combate por la transformación de la sociedad, para la cual había que contar con el respaldo de la mayoría.

*El* concepto de «*mayoría política*» es algo más sólido, más integral que una mayoría de votos, relativa o absoluta. *Más que una idea aritmética o una noción mecánica, debe res-*

*ponder a un bloque social representativo de la mayor parte de la población.* Sin embargo, debe tener además otra característica: *la de ser una mayoría activa*, vinculada no sólo a la acción continua, propia de un movimiento en desarrollo permanente, sino también animada por el concepto de la necesidad de defender dicho proceso por todos los medios posibles.

*Pero dentro del proceso revolucionario chileno constituyó, sin duda, un error haber elevado las formas de lucha a la categoría de esencia, absolutizando en los hechos la vigencia de una sola vía.* Esto contribuyó a atar las manos de las masas frente a los virajes previstos o impensados de la situación concreta. Si el desarrollo pacífico de la revolución correspondía a una posibilidad real y traducía la voluntad del movimiento popular chileno, debe contarse siempre con el ánimo adverso del enemigo, dispuesto a todo, a impedir por cualquier medio la revolución. La beligerancia y la agresividad del adversario no pueden ser una sorpresa. El enemigo opondrá la resistencia más enconada que le sea posible. Y tratará, si puede, de recurrir a las armas contra el pueblo.

A la luz de lo acontecido, pensamos que si en todo fenómeno hay una dialéctica de influencias y la verdad es siempre concreta, con aspectos fundamentales y secundarios, en el caso chileno, dentro de la viva interconexión entre lo político y lo militar, lo fundamental lo constituía, por cierto, lo primero, de lo cual lo segundo, como se sabe, no es sino una parte, pero una parte substancial. De allí el valor principalísimo de una política militar del movimiento popular. Esta no consiste sólo en plantear una conducta respecto de las fuerzas armadas ni redunda exclusivamente en obligación y necesidad de establecer una sólida alianza con su sector potencialmente democrático. Significa también desarrollar una fuerza que pueda actuar, en lo posible, conjuntamente con la parte leal del ejército.

A la luz de esta experiencia, es indispensable lograr que el apoyo al proceso de avance se exprese no sólo en un respaldo de masas sino también en un sostén adecuado de fuerzas militares. Por supuesto, premisa de ello es la política positiva y creadora del movimiento popular sobre la materia, sin excluir, claro está, una responsabilidad particular de los comunistas.

ES VITAL, por lo tanto, devolver a este proyecto de desarrollar la revolución su condición eminentemente dialéctica, concibiéndolo siempre como un proceso sujeto a cambios, dependiente del antagonismo de los contrarios, que puede evolucionar, a veces con celeridad vertiginosa —como sucedió en la Rusia de 1917—, a la necesidad de pasar a otra forma de lucha. O sea, la perspectiva de tal o cual vía no puede ser vista como generalidad ni como principio inamovible, inalterable, de aplicación definitiva e inmutable durante un largo período histórico. Es posible que en otros países la transición de las formas no se produzca con el ritmo veloz con que sucedió en Rusia durante los meses que precedieron a Octubre; pero no es acertado, según nuestra experiencia negativa, atribuir a las formas de lucha el carácter de *invariante*, de una *constante* que pueda desentenderse de los zigzags y virajes a menudo acelerados de la situación, sobre todo en épocas de crisis políticas y de ásperas contradicciones.

Por supuesto, el tránsito pacífico sólo merece este nombre en cuanto excluye la guerra civil; pero no escapa, por las muchas vicisitudes y peripecias de su trayectoria, a la ley de que «la violencia es la partera de la historia». Debimos haberlo tenido siempre presente, aunque el asunto mismo del cambio de vía presupone tomar otro caballo para avanzar por la historia, y el cambio de caballo cuando se atraviesa el río es siempre difícil, y mucho más difícil cuando no está preparada de antemano la cabalgadura de relevo. Independientemente de tener clara la necesidad de este cambio, deben existir la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Esto no es un asunto que se decide sólo en el momento del cambio sino que presupone un largo trabajo previo, una preparación inclusive de años, que, el movimiento popular chileno no realizó. Y para ello se requiere organizar, no verbalmente sino prácticamente, la disposición de la vanguardia revolucionaria, a la cabeza de las masas, de aplicar en respuesta los métodos más enérgicos, si la situación lo requiere.

En verdad, en el Chile de la Unidad Popular prepararse para una y otra vía muchos lo consideraron una incompatibilidad absoluta. Porque la Unidad Popular vivió, asimismo, en este aspecto una experiencia que no debe olvidarse: el título legal confiere legitimidad y, por lo tanto, agrega

fuerza y puede contribuir, en consecuencia, a impulsar el avance; pero a la vez puede facilitar, en ciertos casos, al enemigo su empresa de preparar la insurrección o el golpe, a la par que puede a veces, cuando se entiende mal, maniatar al pueblo con ligaduras de esa misma legalidad, haciéndole más difícil ejercitar su derecho a legítima defensa. El pueblo no tiene por qué sentirse maniatado, como Gulliver, por las ligaduras de la legalidad, ya que lo primordial es su derecho legítimo. La legalidad debe considerarla también como un arma útil en la defensa de su justa causa y nunca como un cepo o una mordaza.

En efecto, mientras la reacción y el fascismo montaban la máquina de la conspiración, tras el slogan monocorde y majadero de que «la UP se salía de la legalidad», modificaron, agravando, el dicho de Odilón Barrot[1] de la constatación de que: «La legalidad nos mata», pasaron a poner en práctica, como un corolario de ella, la consigna «Matemos la legalidad». La Ley de Control de Armas, para citar un caso, se convirtió efectivamente, según lo demostraron los acontecimientos, en una celada para desarmar al pueblo y poder masacrarlo inerme.

En íntima conexión con lo anterior, asumiendo el valor de posible respuesta o proyecto de solución al problema planteado, figura como exigencia básica la participación de las masas. Hemos visto que condición *sine qua non* de la viabilidad de la vía pacífica es que la idea de la revolución gane la conciencia de la mayoría del pueblo y la impulse a la acción. No existirán elementos propicios para el estallido ni menos para el éxito de un levantamiento reaccionario si se consigue forjar una abrumadora superioridad de fuerzas en apoyo al proceso de cambios. La idea de la mayoría, tan cara a Lenin («La mayoría del pueblo está con nosotros», decía a fines de septiembre de 1917)[2], resulta válida como presupuesto del triunfo en una u otra forma de lucha.

Por lo tanto, el problema de la correlación de fuerzas es, a nuestro parecer, decisivo. Siempre es importante preocuparse de que el frente del cambio sea más fuerte que el de sus adversarios. Y que lo aventaje del modo y en la proporción más contundente posible. Que lo derrote en la suma y en la organización de fuerzas, tanto en el campo político, ideológico, cultural, propagandístico, en todas las esferas de la vida. Este frente amplio no sólo vencerá por el número

sino también por la calidad de la unión y de la acción, por su espíritu de ofensiva. Su programa, a la vez, debe ser un común denominador de todos los factores, elementos y fuerzas integrantes, quienes, por lo mismo, se obligan a actuar en conformidad a él, ciñéndose a principios de unidad táctica y estratégica, golpeando todos a una y en igual dirección. Sólo así, actuando como una coalición real, evitando la formación de polos contrapuestos dentro del movimiento y la acción de francotiradores, desarrollando una sola línea programática, se puede derrotar al enemigo. Mantener, extender la amplitud y la fuerza del Frente, robustecer la mayoría, constituye un elemento que, como enseña la experiencia, permite asegurar el curso victorioso del proceso revolucionario.

Reiteramos: el adversario echará mano a la violencia a menos que sea incapaz de recurrir a ella. La revolución puede evitarse el costo de la sangre sólo si la mayoría está en situación de imponerlo y la minoría no está en situación de impedirlo. Este podría ser el período que se vivió en Chile durante los últimos meses de 1970 y parte de 1971. Pero, por todos los medios, el enemigo se esforzará por recuperarse. Por lo tanto, no se trata de un solo momento de peligro. El riesgo existe mientras subsista la reacción y se acrecienta si ésta consigue trocar la situación en su favor.

Por lo tanto, el problema de la correlación de fuerzas se caracteriza por su fluidez, por la posibilidad de mutación, porque no queda fijada de una vez para siempre, a menos que una revolución consolidada supere esta contradicción interna, elimine las clases antagónicas, para crear una sociedad sin clases.

De algún modo —que no puede equipararse, desde luego, con la situación de Rusia en 1917— en Chile subsistió durante todo el período de la Unidad Popular una dualidad de poderes: un gobierno legítimo, popular, por un lado, y un poder ilegítimo, reaccionario, apoyado por todos los sectores hasta entonces dominantes de la sociedad. Controlaba este último buena parte del Estado, además de palancas fundamentales de la economía y las finanzas, de los medios de comunicación de masas. También tuvo la habilidad de ganar para sus planes —aprovechando vacíos, incompetencias y las disparidades de líneas dentro de la Uni-

dad Popular– a una proporción apreciable de ese vasto mundo, a menudo ambiguo y enraizado en sus valores, de la pequeña burguesía, asustada por el miedo que secretaba a destajo la fábrica de terror psicológico del enemigo. Entendía éste claramente que no saldría con la suya si no conseguía atraer a su lado a los sectores intermedios, con lo cual influiría, además, dentro de las filas de una base social heterogénea, con distintos grados de conciencia política, que no era una masa ideológicamente compacta ni impermeable al clima de histeria ladinamente fomentado por cuenta de la CIA. Si se desplegó una estrategia de masas de la oligarquía, ésta pudo desarrollarla sólo porque contó con el apoyo de sectores extraños a ella, de los cuales no disponía por sí misma como clase. Y si lo consiguió fue porque del otro lado no hubo una respuesta adecuada, una política del movimiento popular que guardara coherencia con su programa e infundiera confianza a estas capas sociales intermedias de que había para ellas un destino en la nueva sociedad.

SIN DUDA, un factor decisivo para decidir el pleito en beneficio del pueblo estriba en que la dirección del movimiento popular sea acertada, justa, capaz de orientar, de mantener informadas a las masas, de conducirlas a la acción necesaria y precisa en una movilización que dé a esa mayoría política una conciencia madura de sus responsabilidades, convirténdola en un conjunto de fuerzas conscientes y unidas. Desde luego, el papel del Partido Comunista es insustituible. Como lo es el de los diversos partidos del espectro popular.

El movimiento popular chileno reúne méritos históricos indudables. Reiteró a lo largo de ese período su iniciativa creadora. Aunque en embrión, desarrolló formas de poder democrático que una historia del futuro deberá tener en cuenta como antecedentes útiles de una autoridad verdaderamente democrática, capaz de controlar todos los factores caóticos, cuya fuente generadora derive del pueblo mismo, deseosos de transformar la naturaleza de clase del Estado.

Pero la llegada a la presidencia de la república de Salvador Allende no podía cambiar por sí sola la naturaleza de clase del Estado ni el carácter de las fuerzas armadas, de

la policía, de la administración pública. Para ello, es menester insistir en que asunto capital en todo proceso por vía pacífica lo constituye la necesidad de garantizar también una correlación de fuerzas militares favorables al desarrollo de la revolución. Se trata de un asunto clave.

Se planteaba a la Unidad Popular la tarea urgente de introducir dichas modificaciones. Se debía al efecto colocar el aparato estatal bajo la presión organizada del pueblo, hasta lograr ponerlo crecientemente a su servicio. Aún más, había que desarrollar una democracia activa, participante, de masas, arrancando a los sectores reaccionarios trozos de su imperio, que fueran siendo transferidos a la conducción de los trabajadores, de los sectores progresistas de la sociedad, en su más ancha acepción.

No se puede decir que el apoyo popular no se movilizó intensamente durante dichos tres años; pero la confusión de objetivos —democráticos, socialistas y el injerto de otros ajenos al programa o inspirados algunos en la más pura utopía— no permitió orientar en todo momento con claridad la iniciativa de las masas, por el camino acertado ni asegurar en cada combate un respaldo mayoritario, que sí se tuvo, por ejemplo, para una medida tan patriótica y sentida como la nacionalización del cobre.

Recalquemos que el desenlace penoso de dicho capítulo no debe oscurecer un hecho históricamente diáfano: que el gobierno popular, en menos de tres años, realizó una obra enorme. Aunque luego sus logros hayan sido materialmente barridos por el fascismo, son conquistas válidas que, incorporadas a la memoria viva del pueblo, forman parte de un acervo político indestructible. Se transforma en herencia movilizadora que volverá a desempeñar un papel trascendente cuando el país supere la contingencia actual. No es justo mirar en menos esa experiencia adquirida. Debe examinarse de modo serio la inmensa contribución positiva, la riqueza de los aportes creadores del movimiento popular, tan patéticamente interrumpidos durante este lapso negro.

Pero a la vez consideramos que si las masas no viven a diario la escuela del esclarecimiento y de la acción política no pueden empinarse espontáneamente, por mero instinto, al nivel de conciencia necesario para derrotar al enemigo y participar con ojos abiertos en el proceso histórico. En este sentido, *el papel de la vanguardia política marxista-leni-*

nista, incluso en las dificilísimas condiciones del fascismo, tanto en el interior como desde el exterior del país, asume la *responsabilidad de dar en todo momento dirección científica a la clase obrera como al movimiento popular.* En el cumplimiento de su misión capital, al Partido Comunista, como un partido dirigente que, junto a otros partidos aliados, debe responder por el desarrollo del proceso, se le plantean los dos términos de una ecuación dialéctica: su *calidad unitaria* dentro de un movimiento no exento de contradicciones, que a veces pueden agravarse peligrosamente, y *su papel independiente*, como un partido que bajo ninguna circunstancia, ni menos en situaciones de confusión, puede renunciar a su obligación de exponer sus puntos de vista al pueblo y al país, teniendo *in mente* que no puede sino hacerlo con el objeto de fortalecer la unidad y no de debilitarla.

NO OBSTANTE la erosión gradual, sostenida y al final más pronunciada de las posiciones del campo popular —la cual contribuyó al éxito del golpe—; pese al deterioro de la política de alianzas de la clase obrera y a un desmejoramiento notablemente acentuado en los últimos meses de la correlación de fuerzas en el nivel político y militar, se ha dicho que la causa del epílogo negativo de dicho período de la Revolución Chilena no provino de una decisión del pueblo sino de un corte traumático, de una fractura sanguinaria producida por el «putsch» fascista.

Por una parte, se requiere que el proceso disponga de un apoyo mayoritario del pueblo, pero, aunque dicho elemento es indispensable, el curso de la revolución no está aún sólidamente resguardado, libre de ser atropellado, fulminado y desconocido, si el movimiento popular no se encuentra en condiciones de sumar a la razón de la mayoría los medios eficaces para protegerla.

En este orden no hablamos sólo de armas. Para producir efectos en el campo político el imperialismo y la reacción interna desplazaron, en primer término, su ofensiva al terreno en que eran más fuertes y les resultaba más propicio: el campo económico. La combinaron con el terrorismo individual —que hoy día en América Latina es práctica extendida y cotidiana de la regresión política—. Orquestaron todo un clima de fantástico desorden; un caos,

como alguien dijo, muy bien organizado. Lo dirigió la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, con la preparación artillera de una ofensiva propagandística sin límites ni escrúpulos. Tal vez nunca antes la contrarrevolución hizo un uso tan a fondo, tan masivo, tan perturbador y demoledor de los medios de comunicación de masas, lo cual constituye otra página digna de minucioso estudio por parte de los revolucionarios. Por cierto, tal plan fue favorecido por la falta de una respuesta única, congruente y orgánica del Gobierno. La conspiración se benefició con las dos líneas políticas paralelas que dimanaban del interior de la Unidad Popular. Por otra parte, aprovechó minuto a minuto el alarde verbal del revolucionarismo extremo, que se ufanaba de fuerzas armadas que no tenía.

Queremos con esto decir que esa guerra en que no truenan los cañones exige una política única, nítida, y la necesidad permanente de aclarar las cosas ante las masas. La respuesta eficaz sólo será posible si se logra superar el complot del adversario. Esto no involucra, por cierto, la mera lucha entre servicios de inteligencia o de contrainteligencia. Se trata de un combate político total, para desarticular las fuerzas centrales de la conspiración, a nivel de *infraestructura* y *superestructura*, en el orden económico, psicológico, en el dominio público y secreto, y desde luego, sobre todo, en el campo militar.

CON RESULTADOS una vez más trágicos para el pueblo, el enemigo puso de relieve y reactualizó, bajo una luz sangrienta, el papel de las fuerzas armadas. No es sólo la confirmación de una historia secular. Hoy el imperialismo y sus aliados locales tienden aún más que ayer a sacar al ejército de sus cuarteles. Dicha medida envuelve en el fondo un reconocimiento implícito de que el grado de desarrollo y la fuerza del movimiento popular les hace temer por el mantenimiento de su control de la sociedad y del Estado. Es sintomático que no se trate ya de los antiguos pronunciamientos castrenses, que se dieron por centenares durante un siglo y medio de historia republicana en América Latina. No se trata ya de la conspiración contra un conspirador encaramado, ni de un simple cambio de guardia o de mandón en el palacio de gobierno. Hoy, por lo general, es directamente una acción contra el movimiento popular, empren-

dida sobre todo cuando no tienen otro modo de impedir el triunfo de las fuerzas de avanzada o de anular una victoria ya obtenida por ellas.

Esto obliga a repensar el problema militar, a mirarlo con ojos contemporáneos. Una puesta al día no se concibe si se pierde de vista algo esencial: que se trata por el imperialismo de un ambicioso esfuerzo por insertar a los ejércitos locales latinoamericanos que consiga influir como piezas integradas en la estrategia global del Pentágono. Según la doctrina importada, hecha suya por varias cúspides castrenses criollas, ahora el enemigo principal no está fuera de las fronteras sino dentro; lo constituye la «subversión interna».

Si en un momento el complejo militar-industrial de los Estados Unidos acuño el principio táctico de la *vietnamización de la guerra* y propuso «que los asiáticos maten a los asiáticos», su lema actual de hecho dentro de nuestro país es «*que los chilenos maten chilenos*», que las fuerzas armadas declaren y hagan la guerra contra el pueblo. De este modo la seguridad de su dominación y saqueo de Chile le saldrá más barata. En tal sentido no deja de resultar descaradamente tragicómica la confesión de Pinochet en Uruguay de que actuó en beneficio del imperialismo: «Estados Unidos –dijo a la letra– para sacar el comunismo de Chile, no disparó un tiro. Esto no fue Vietnam. No tuvo un muerto.» En efecto, no hubo un muerto norteamericano; pero, sí muchos miles de muertos chilenos. Esos muertos chilenos Pinochet no los cuenta.

Varios de los estrategas políticos y militares del Pentágono han declarado que la mejor inversión que pueden hacer es preparar oficiales latinoamericanos en sus academias militares, inculcándoles su mentalidad. Así lo han hecho. William Proxmire, senador norteamericano, informaba en 1971 que Estados Unidos había gastado 175.000 millones de dólares en «adiestrar a 320.000 militares de setenta países independientes», entre 1945 y 1971. En 1965 el entonces director de Ayuda Militar, Robert Wood, señalaba orgullosamente que «casi todos (los oficiales de América Latina) han recibido adiestramiento, ya sea en Estados Unidos o en Panamá».[3]

Hoy recogen los frutos de su cosecha. Han promovido dictaduras militares reaccionarias a su servicio en varios

países de América Latina. Conspiran para lograrlo allí donde no lo han conseguido aún.

Aprendiendo en carne viva, debemos, pues, concluir que para asegurar el desarrollo pacífico de la revolución es indispensable hacer imposible que sectores reaccionarios de las fuerzas armadas las conviertan en el verdugo y en el sepulcro ensangrentado del movimiento popular. O sea, es necesario que el ejército no se comporte como un apéndice, como superpolicía, como tropa colonial criolla a las órdenes del Pentágono, ni oficie como compañía de seguros de vida o guardia pretoriana del monopolio y del latifundio.

Una de las mayores debilidades del movimiento popular chileno fue que este problema se planteara mal, pobre y vergonzantemente, más bien a niveles de personalidad, excluyendo la participación que les correspondía a partidos de fuerte raigambre popular y a las masas mismas. Se mantuvo largamente en el mando a jefes militares y de policía que aparecían remisos al cumplimiento de sus deberes. No se conocía con exactitud el pensamiento interno (por no decir íntimo) de muchas jerarquías castrenses (y el caso de Pinochet es el más abismante, pero de ninguna manera único), lo cual denotó una falla suicida de los servicios de información, en gran parte infiltrados por los conspiradores. Además fue negativo para todo el proceso la falta de cohesión del gobierno en el apoyo al gabinete encabezado por el general Prats y la posterior eliminación de éste del Comando en Jefe del Ejército. Creemos sinceramente que también nosotros, comunistas, adolecimos de un vacío histórico, por la insuficiencia y la debilidad de nuestra política militar y ante las fuerzas armadas.

¿Cómo lograr un cambio positivo en el ejército? Lograrlo es empresa muy ardua. Pero es y debe ser posible. Para dar una respuesta correcta es preciso analizar su naturaleza social y su composición de clase, su función a través de la historia, su papel actual en la sociedad y los mecanismos o, mejor dicho, la dialéctica de su comportamiento.

Las fuerzas armadas latinoamericanas no son entes abstractos ni instituciones diabólicas, eterna e ineluctablemente destinadas a masacrar pueblos. No es el caso mencionar el carácter esencialmente diferente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, nacidas de una revolución socialista triunfante. En otros ejércitos del continente –donde no

4*

se ha producido una revolución— se dan fenómenos que desautorizan una interpretación fatalista, de pesimismo definitivo sobre el problema. Ya Carlos Marx vislumbraba en el ejército español dos vertientes (e históricamente, como escuela de formación, mentalidad, ambiente y contorno humano, éste tiene algo que ver con los ejércitos de la América Hispana); veía dibujarse en él dos alternativas de conducta política social que continúan siendo válidas. Advertía en sus filas el reaccionarismo obtuso, pero también —como lo demostró el levantamiento de Rafael Riego— una posibilidad latente de iniciativa revolucionaria. Hay que reconocer, sin embargo, que no ha sido históricamente ésta la característica dominante sino la otra: ser garantía armada del régimen de opresión establecido.

Por supuesto, la primera alternativa no puede manifestarse sino en épocas de crisis política. Lenin subrayaba precisamente la relación viva entre el desarrollo del proceso y la agudización de la inquietud dentro del ejército. O sea, establecía la correspondencia entre el despliegue del movimiento revolucionario y su reflejo en el interior de las fuerzas armadas.

No faltaron entusiastas de la teoría del «particularismo» chileno, «que sostenían que en cierto momento hubo «neutralidad» política por parte del ejército. En honor a la verdad, debe recordarse que siempre éste actúa bajo el influjo predominante de una clase o de un movimiento. Es utópico pensar en la neutralidad política del ejército. Cosa *distinta es producir, en una situación determinada, un período de neutralización*, como resultado de la lucha exterior y dentro de las fuerzas armadas, para impedir que se consumen los planes del sector fascista de conducirlo al golpe reaccionario, apoyándose el pueblo para ello en el sector constitucionalista existente en el interior. Ese concepto de *neutralización* puede ser momentáneamente válido dentro de una concepción pacífica de desarrollo de la revolución.

El origen de clase de los miembros del ejército es un dato de primera importancia; pero en definitiva el hecho de que su mayoría sean hijos de obreros y de campesinos pobres sólo se expresa de modo manifiesto hacia el exterior y actúa abiertamente, de modo masivo, bajo el estímulo de una coyuntura revolucionaria y a condición de que exista una organización, un trabajo en el interior de los cuarteles.

Mientras esa coyuntura no se produzca, impera y rige la estructura jerárquica, el régimen de coacción interna y el miedo al castigo. Se siguen observando, por lo general, las reglas draconianas de la disciplina prusiana, ajena y contraria a la disciplina consciente. Trata precisamente de amputar o prohibir toda expresión propia del soldado. Deforma en él el reflejo condicionado de la obediencia ciega a órdenes que incluso repugnan a su sentir. Se le inculca la desfiguración sistemática del pensamiento. Se impone a muchos una falsa conciencia social, lo cual obliga a un trabajo político e ideológico mucho mayor a más calificado por parte nuestra.

Aparece como aceptado por estudiosos del problema que dentro del ejército chileno se perfilaban antes del golpe tres tendencias, clasificadas sin gran precisión científicas como sectores 1º «constitucionalista» o «patriótico», 2º «profesional» y 3º «fascista». Dicha clasificación mantiene en sus trazos gruesos su vigencia potencial y vale como una aproximación relativa; pero sería mecanicista si no se diera al dinamismo del proceso, a las modificaciones introducidas posteriormente por factores internos y externos, toda su capacidad de influir alterando dichos lineamientos. La lucha, que es también, por supuesto, ideológica dentro de la sociedad chilena, no obstante el monopolio de la información ejercida por el Estado totalitario, no deja de existir ni de proyectarse al interior de las fuerzas armadas. A este proceso de esclarecimiento en el ejército –que es también de gradual toma de conciencia– deben dar un aporte activo el movimiento popular y democrático, los sectores antifascistas del país.

Existen elementos objetivos: profunda, desastrosa crisis económica; vacío político en torno a la Junta; aislamiento internacional, repudio de la gran mayoría del país, lo cual crea un clima favorable para desplegar dicha acción. Maduran a la vez diversos factores subjetivos. Se ha robustecido en el último año el papel de la clase obrera. El Partido Comunista, no obstante la persecución salvaje, no deja de impartir orientación, funcionando de dirección a base, a través de todo Chile. Se reestructuran a nivel nacional los principales partidos populares de oposición. Se ahondan las grietas dentro del grupo dominante. Sectores del ejército son sacudidos gradualmente por la comproba-

ción diaria del rechazo creciente, por la abrumadora convicción de que la camarilla castrense no sólo no ha solucionado ningún problema del país sino que los ha agravado todos. Penetra y cunde en las filas la fuerte condena que suscita el ejercicio del terror desenfrenado, la crueldad sin parangón de la Junta y los abusos incontables de la DINA, bajo directa dependencia de Pinochet, con su tenebrosa caza del hombre y la proliferación de las listas de «desaparecidos», sombría nómina de prisioneros de la Gestapo criolla, cuyo arresto ésta se niega a reconocer.

El combate, desde luego, asume caracteres cruentos, que la opinión internacional conoce. No sabemos exactamente cuánto durará. Abreviar dicho calvario depende en parte apreciable de nosotros mismos, de la Unidad Popular, de todas las fuerzas antifascistas. Aprendiendo las cien lecciones de la experiencia chilena, muchas amargas, otras luminosas, todas útiles, creemos que el pueblo está abriendo con su lucha infinitamente sacrificada y azarosa, pero creciente y organizada, la ruta hacia un cambio en la situación, que permita un día no sólo devolver Chile a su pueblo sino contribuir a aclarar ciertos problemas teóricos y políticos de palpitante vigencia que aún continúan pendientes.

[1] Odilón Barrot: político conservador de los tiempos de la Segunda República en Francia. Sus conocidas palabras «la legalidad nos mata» reflejaban las intenciones de los representantes de la reacción francesa, a finales de 1848 y comienzos de 1849, de provocar un levantamiento popular y, habiéndolo aplastado, restituir la monarquía. Véase sobre el particular la Introducción de Engels para la edición de 1895 de la obra de C. Marx *Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850*. *Obras escogidas*, 1973, Moscú, Ed. Progreso, t. I, pág. 206 (en español).

[2] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Buenos Aires, Cartago, t. XXVII, pág. 129.

[3] Fernando Rivas y Elizabeth Reimann. *Un caso de penetración imperialista*. Ediciones 75, México, D. F., pág. 7.

# LAS ETAPAS Y LAS TAREAS DEMOCRATICAS Y SOCIALISTAS DE LA REVOLUCION POPULAR

*Orlando* **MILLAS,**
*miembro de la Comisión Política del CC del Partido Comunista de Chile*

LAS TAREAS QUE ABORDO LA REVOLUCION CHILENA continúan vigentes. Las transformaciones democráticas que se planteó el pueblo son ahora aún más necesarias que entonces. La bestial regresión fascista ha demostrado a la inmensa mayoría de los chilenos que sus intereses y sus anhelos exigen resolver aquellos grandes problemas que permanecen pendientes. Esto no significa que la historia vaya a repetirse. No se ha vivido en balde la tragedia de los últimos años.

Hemos aprendido, bajo el fascismo, tanto las fuerzas que sustentaron al Gobierno del Presidente Allende como aquellas otras que se enfrentaban con él, a pesar de coincidir en muchos de sus objetivos y de ser también antifascistas. Ahora cada asunto es visto a una nueva luz. Se siente la necesidad de una coalición más vasta, lo que implica una concepción superior. Por lo mismo, el análisis de la obra, de los éxitos y de las insuficiencias del proceso revolucionario en el período de 1970 a 1973 no nos lleva al pasado, sino que puede ayudar al esclarecimiento de temas que se proyectan sobre el presente y el futuro.

La declaración formulada en septiembre de 1976 en Santiago por la dirección del Partido Comunista de Chile, junto con reiterar que la lucha por derrotar al fascismo y restablecer la democracia es la tarea suprema que debe unir y movilizar a todo el pueblo, destacó que la lucha por las libertades públicas y por la democracia está en el centro de la actividad revolucionaria. Las proposiciones unitarias de los comunistas se orientan a obtener el acuerdo de todos los sectores patrióticos para derrotar al fascismo; pero, a la vez, indican la posibilidad y la necesidad de que tal acuerdo

comprenda compromisos para «construir un régimen político más democrático que el anterior, que dé más libertades y que, al mismo tiempo, no permita el restablecimiento del fascismo»[1].

LA VIDA HA DADO la razón al repudio manifestado por los comunistas a las posiciones nihilistas respecto de la democracia. Las tesis leninistas sobre la importancia de la lucha de la clase obrera y del pueblo por la democracia cobran plena actualidad. Para los comunistas, las tareas democráticas y los objetivos socialistas de la revolución chilena se unen, dialécticamente, como un proceso único, con etapas políticas y económico-sociales.

El concepto de revolución popular es el que mejor define nuestro proceso. Ya en los comienzos de la década del 50, al elaborar su Programa aprobado por el X Congreso Nacional, el Partido Comunista de Chile desechó el término «revolución democrático-burguesa», por estimar que pudiera inducir a algún grado de confusión en las nuevas condiciones, en que el aparecimiento en el país de una oligarquía financiera y el rol del imperialismo dan una connotación reaccionaria muy precisa a la política predominante en el campo burgués. Sin embargo, el Partido se negó a simplificar el análisis de las contradicciones sociales. Apreció las contradicciones entre los clanes de la oligarquía financiera vinculada al imperialismo y las otras fracciones de la burguesía. Consideró que las tendencias a negar las diferenciaciones en el seno de la burguesía y a anteponer un carácter inmediatamente socialista al proceso, no favorecen sino que dificultan el cumplimiento consecuente de las tareas que abren paso de verdad al socialismo.

En el lenguaje clásico en el proceso revolucionario se distinguen las etapas denominadas democrática y socialista. Estas expresiones no contraponen tales etapas, sino que las vinculan. En efecto, si bien en la primera de ellas no se abordan aún tareas socialistas, la segunda de ellas lleva más adelante las tareas democráticas, las profundiza, las hace asumir una nueva calidad, forja aquella democracia capaz de servir de forma y de instrumento de la revolución socialista.

Consideramos a la revolución antiimperialista, antioligárquica y agraria como etapa democrática en el desarrollo

de la aproximación a la revolución socialista. El enunciado, que expresó el Partido, de la clase obrera como «centro y motor de los cambios revolucionarios», es la consigna de la clase obrera reagrupando a todo el pueblo y conduciendo a la victoria los objetivos de todo el pueblo. Obviamente, en ello es determinante el carácter de nuestra época de paso, a nivel mundial, del capitalismo al socialismo y al comunismo. En la aplicación de esta política, se creó un impetuoso movimiento antiimperialista encabezado por la clase obrera, se unió la lucha parlamentaria y otras acciones políticas con las acometidas de masas, se ubicó el proceso en el contexto de las contradicciones internacionales y de las condiciones en que se desarrollaban, se precisó el papel de las reivindicaciones democráticas en el acercamiento a la revolución socialista y se aplicó, modificando parcialmente su carácter, la legalidad y la institucionalidad burguesas en favor de los intereses populares.

Estos logros de la revolución chilena son inseparables del hecho de que el Partido Comunista de Chile entendió la posibilidad de una vía revolucionaria no armada como el empleo de una gran variedad de formas de lucha, incluso violentas, contra el imperialismo y la reacción, poniendo el acento en el desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, en su unidad y organización y en sus relaciones de alianzas. La deducción teórica de los comunistas de la posibilidad cierta de que la revolución, en nuestra época, avance por distintas vías, fue confirmada al abordarse una transición pacífica que planteó e hizo realidad grandes transformaciones revolucionarias democráticas.

El aspecto esencial de este proceso revolucionario consistió en que la clase obrera y el pueblo se foguearon en el fragor de una áspera lucha de clases, se dieron cuenta cabal de la magnitud de sus fuerzas, ampliaron sus horizontes, fortalecieron su voluntad, fueron abriéndose paso al poder, conquistaron y ejercieron tres años el gobierno, aplastaron una sucesión de conspiraciones y ejecutaron transformaciones tan profundas como fueron la nacionalización de la gran minería del cobre y la del hierro, la estatización de las minerías del salitre y del carbón, el establecimiento del área social de la economía con las instituciones bancarias y las grandes industrias del sector monopólico y empresas fundamentales del comercio exterior e

interno, la reforma agraria que eliminó el latifundio y entregó la tierra a los campesinos para su explotación cooperativa, la redistribución de la renta nacional en favor de los trabajadores, el desenvolvimiento de una política exterior independiente y el gigantesco impulso a la participación popular en la dirección del país.

Una revolución popular cuenta en nuestra época con poderosos aliados, así como con peligrosos y agresivos enemigos. El cumplimiento de las tareas de la fase democrática de la revolución levanta la suspicacia, la enemistad y la hostilidad agresiva de parte del imperialismo. El caso de Chile lo subraya dramáticamente. El comando de la conspiración fascista lo ejercieron sin tapujos las empresas supranacionales afectadas por las nacionalizaciones, con participación directa de la CIA y del Pentágono. La reacción interna fue galvanizada por el imperialismo norteamericano, que trazó un plan siniestro de «desestabilización» del gobierno popular chileno, demolición de la democracia en Chile e instauración de la tiranía fascista, que es la dictadura terrorista abierta de sus grupos más agresivos.

Los aliados fundamentales de una revolución popular son la Unión Soviética y otros países socialistas, el movimiento obrero y el conjunto de las fuerzas antimonopolistas de los países capitalistas desarrollados y el movimiento de liberación nacional. Un proceso de esa especie encuentra la simpatía, el apoyo y la solidaridad de los pueblos. El gobierno del Presidente Allende tuvo la comprensión y la ayuda generosa de la Unión Soviética, Cuba socialista, la República Democrática Alemana y otros países socialistas. Mantuvo, además, cordiales relaciones con la generalidad de los gobiernos latinoamericanos, desarrolló los vínculos del Pacto Andino, concertó acuerdos altamente positivos con varios países de Europa Occidental y se vinculó al Asia y Africa. En las nuevas condiciones internacionales, con la mayor influencia de las fuerzas de la paz y al abrirse paso la distensión, son más favorables las condiciones para una revolución popular. Esta es inconcebible efectuando concesiones al antisovietismo y aislándose del torrente de las fuerzas progresistas de la humanidad.

Las fuerzas revolucionarias chilenas no se han amilanado ante la derrota transitoria. Por el contrario, se ha mantenido en todo momento las posiciones de principios. Ya en la pri-

mera declaración formulada por el Partido Comunista de Chile después del putsch, en octubre de 1973, se sostiene: «El Partido Comunista está absolutamente convencido que su posición de defensa irrestricta del Gobierno Popular, sus empeños dirigidos a buscar el entendimiento con otros sectores democráticos –principalmente en la base–, sus esfuerzos tendientes a dar seguridad a los sectores medios de la población, su lucha permanente contra el peligro de guerra civil, su acción enfilada a concentrar los fuegos contra los enemigos principales –el imperialismo y la ultrarreacción–, su perseverancia en afianzar la unidad socialista-comunista, la unidad de la clase obrera y el entendimiento entre todos los partidos de la Unidad Popular, su afán por lograr un aumento en la producción y en la productividad, el financiamiento propio de las empresas del área social y la máxima disciplina en el trabajo, conforman una política general enteramente justa. No obstante, no desaloja debilidades ni errores en su acción.»[2]

EL AVANCE POR LA ETAPA DEMOCRATICA de la revolución, con vistas al socialismo, se traduce en una interacción cada vez más compleja de las actividades políticas, ideológicas, sociales y económicas. Esto conlleva la necesidad de alcanzar la hegemonía de la clase obrera, factor decisivo para reagrupar combativamente, en alianza amplia y firme, a todas las fuerzas democráticas.

El Partido Comunista de Chile comprendió que le correspondía, en el movimiento unitario, mantener su línea independiente, clasista, orientada precisamente a la cohesión de todas las fuerzas revolucionarias, que enfrentase las desviaciones y defendiese el porvenir del proceso. Asume, por lo tanto, la plena responsabilidad por las debilidades y por las insuficiencias en la aplicación de esa línea.

La dialéctica del pluripartidismo y de una dirección firme alcanzó en Chile características singulares. Se articuló una unidad amplia y flexible, que implicaba la cohesión de la propia clase obrera, su alianza con las demás capas de trabajadores y con las amplias masas populares y su entendimiento con otras fuerzas democráticas. En las condiciones peculiares del proceso, tal unidad se basaba en la existencia de un Partido Comunista fuerte e influyente, en la unidad socialista-comunista que revestía primordial importan-

cia, en la vigencia del bloque de la Unidad Popular –integrado por los partidos Comunista, Izquierda Cristiana, MAPU, MAPU Obrero-Campesino, Radical y Socialista y por la Acción Popular Independiente– y en los acuerdos circunstanciales con otros conglomerados políticos, particularmente los que se concretaron con el Partido Demócrata Cristiano para la elección del Presidente Allende por el Congreso Pleno y para las reformas constitucionales referentes a las denominadas «garantías democráticas» y a la nacionalización de la gran minería del cobre. Por otra parte, se estableció una relación amistosa con la Iglesia católica y las demás Iglesias. En octubre de 1972 se llegó a un acuerdo, sobre la base del Programa de la Unidad Popular, con los mandos constitucionalistas de las Fuerzas Armadas de posición democrática, que se tradujo en el gabinete encabezado por el general Carlos Prats desde noviembre de 1972 a marzo de 1973, inclusive, con su conocida declaración política y su proyecto de constitución del área social de la economía.

Los revolucionarios no podemos hacer solos la revolución. Un requisito indispensable del éxito es atraer al cauce revolucionario a las capas que objetivamente están interesadas en ella pero que tradicionalmente son vacilantes, asunto que, en la experiencia histórica, se ha resuelto en muy diferentes formas. El pluripartidismo, una de ellas, funcionó en el caso chileno al concretarse una práctica de acción conjunta en importantes contiendas políticas y dar paso a la elaboración de un programa común, con respeto a la independencia de los integrantes de la alianza.

Pero, las clases y capas sociales se enfrentan, constantemente, a nuevos problemas y nuevas tareas en el curso del proceso revolucionario y son regidas por sus leyes. La vida afecta a los programas, máxime cuando la acción revolucionaria coloca a la Historia una potente locomotora. De allí la necesidad de que una coalición pluripartidista cuente, en dichas circunstancias, con una dirección suficientemente unitaria, firme y cohesionada, capaz de desarrollar creadoramente su propio programa, consolidar los avances, defender las conquistas y derrotar a la reacción. De otra manera, la revolución se encuentra amenazada.

La fraseología revolucionaria, las tentaciones de colocar en primer plano la competencia proselitista, el juego de los

oportunismos de derecha y de «izquierda», la generación de «polos» que escindan el campo avanzado, pueden debilitar suicidamente a un gobierno popular. La experiencia de Chile entrega, al respecto, lecciones muy severas. Sin embargo, la unidad de las fuerzas revolucionarias ha resistido con éxito la prueba de la derrota transitoria. Esto demuestra que fue fundada sobre cimientos sólidos. La unidad socialista-comunista es hoy más profunda que ayer, la coalición de la Unidad Popular ha encontrado el camino de un entendimiento superior y se desarrolla una unidad más amplia, a través de la acción conjunta de todos los antifascistas, comprendido el Partido Demócrata Cristiano. Unos y otros hemos aprendido. La tragedia no ha sido en vano. Con todo, es evidente que se precisa aún ahondar mucho más el análisis de lo sucedido, para que el combate antifascista adquiera la mayor eficacia y la debida proyección.

EN EL ULTIMO CUARTO DE SIGLO ha habido en Chile una gran extensión y centralización del capital. En este lapso, la vida llevó a las capas medias a adoptar reivindicaciones democráticas que corresponden a sus intereses, opuestos al imperialismo y a los monopolios. El gobierno del Presidente Allende fue posible como culminación de sucesivas luchas en que la gran burguesía interna y el imperialismo amenazaron y atacaron las libertades, los derechos y las instituciones democráticos y, en cambio, la clase obrera, el Partido Comunista de Chile y sus aliados hicieron suyas las reivindicaciones coincidentes con el interés nacional y acordes a los avances de los pueblos en esta época.

En Chile había, como consecuencia de los combates de la clase obrera y del pueblo, un Estado democrático relativamente moderno, en cuyo seno, a pesar de su carácter burgués, se desarrolló, especialmente en el lapso 1970—1973, una prolongada lucha por el poder. En el Estado llegaron a coexistir su antiguo contenido antidemocrático, de clase, al servicio de la explotación, y el injerto en él de conquistas democráticas. Sólo podían afirmarse los avances democráticos y plantearse el socialismo profundizando la revolución y convirtiendo en realidad la posibilidad de destruir la vieja estructura antidemocrática.

Este problema, a nuestro parecer, no lo puede eludir una revolución. Algunos en Chile creyeron que les era dado

superarlo pronunciando frases generales, socialistas o libertarias, invocaciones y consignas anarquistas que ocultasen la debilidad en la lucha concreta con la reacción. Sin embargo, la experiencia ha confirmado y confirma que aquel tipo de oportunismo que, por motivos «honrados», hace pasar lo abstracto a primer plano, ocultando lo concreto en aras de intereses momentáneos, llega a ser, según la advertencia leninista, el más peligroso de los oportunismos[3].

Cada una de las dos etapas del proceso revolucionario está vinculada con la otra y esa interrelación se manifiesta, también, entre sus respectivas articulaciones clasistas. A la etapa meramente democrática corresponde una determinada composición de clases de sus fuerzas motrices y de su campo de alianzas. Al avanzarse hacia la etapa socialista, ello no implica necesariamente el estrechamiento y la contracción de las alianzas. Por el contrario, la revolución es integradora de fuerzas. Triunfa el que reúne más fuerzas y la clase obrera necesita obtener que el bloque favorable a los cambios revolucionarios sea más poderoso que el patrocinado por el imperialismo.

La lucha por la democracia y el socialismo requiere una constante vigilia, porque cualquier sobrepeso transitorio de fuerzas es aprovechado por la antidemocracia para descargar sus contragolpes. Por eso mismo, las cuestiones decisivas deben ser discutidas y aclaradas a las masas mucho antes que se puedan presentar.

En cuanto a las capas medias, era previsible su inestabilidad y tenía una inmensa importancia el mantenimiento, respecto de ellas, de una política clara, firme pero elástica, o sea una política de principios, que impidiera al imperialismo y a la reacción convertirlas en una base social de la sedición fascista. Uno de los aspectos incisivos de este asunto era la vinculación familiar y de origen social de la mayoría de los oficiales de las fuerzas armadas con las capas medias.

La lucha de clases se intensifica en el curso del cumplimiento de las tareas de la fase democrática de la revolución y comienzan a adquirir vigencia en ella exigencias vinculadas al avance hacia el socialismo. Entonces, es imposible descartar la cuestión de qué clase gobierna la sociedad, cómo consigue movilizar la mayoría activa y cuál es su capacidad de defender y ejercer su poder. La amplia-

ción de la base social del proceso revolucionario, inherente a la fase democrática, plantea tareas superiores a la vanguardia del proletariado y, si ésta no crece orgánica y políticamente al ritmo del desarrollo del movimiento popular, puede retrasarse cuando maduran nuevas condiciones objetivas.

Las tareas revolucionarias democráticas antiimperialistas y antimonopolistas apuntan, en el fondo, a la contradicción básica del régimen. Una formación económico-social es un complejo dialéctico integrado. De allí que, en la complicada correlación dialéctica de las contradicciones sociales, así como no se puede anticipar etapas, tampoco hay entre ellas separaciones abismales.

La Revolución Chilena fue una réplica a la concepción estrecha que coloca en el mismo plano, como enemigos principales, al conjunto de las clases dominantes, sin hacer distingos entre los terratenientes, los agricultores ricos y medios, la oligarquía monopólica, los diferentes estratos de la burguesía nacional y las capas medias. A la Revolución Chilena la acusó la ultraizquierda de reformismo; pero, es decidor que tales ataques fuesen ampliamente publicitados y exaltados por los medios de comunicación de masas comprometidos en los esfuerzos por desestabilizar el Gobierno Popular y abrir paso al putsch fascista. Para el imperialismo y la reacción estaba claro que la revolución democrática, antiimperialista, antimonopólica y antilatifundista abría el camino al socialismo. La dinámica predominante en la economía chilena llegó a ser no capitalista, en razón de las transformaciones alcanzadas. El sector determinante de esa economía dejó de estar al servicio de la acumulación capitalista. Objetivamente, el proceso de reproducción exigía, en estas condiciones, que a la antigua disciplina impuesta por los monopolios le reemplazase una nueva disciplina que derivase de la hegemonía obrera. Se requería un mayor control obrero de la producción, planificar el conjunto de la economía y ejercer una dirección a través de un funcionamiento eficiente del área social y del sector de reforma agraria.

La experiencia de los años 1970 a 1973 ratificó que el desarrollo democrático antiimperialista crea las condiciones para el ascenso al socialismo, que se entrelazan las medidas democráticas consecuentes con los gérmenes del socia-

lismo, y que la no consolidación de las posiciones conquistadas y las debilidades en la profundización del proceso revolucionario, colocan ante el peligro de un retroceso en toda la línea. La contrarrevolución no sólo se propone cerrar el paso al socialismo, sino que se opone a toda garantía democrática, en una perspectiva de reacción sin límites. Por eso, el examen autocrítico de la Revolución Chilena debe asignar su gran significación al análisis de la falta de una respuesta adecuada, de nuestra parte, en el curso del proceso, a la agudización de las contradicciones objetivas, que era previsible ya que corresponde a una ley de toda revolución.

SI FUE POSIBLE la constitución del Gobierno Popular, el reconocimiento de la victoria electoral de Salvador Allende y el desarrollo de las transformaciones democráticas, ello tuvo que ver con la fuerza que dimanaba de que la clase obrera se encontrase unida en los asuntos básicos y en la acción, dispusiera de orientaciones correctas, reuniera en torno de sí un amplio movimiento antiimperialista, ampliase sus relaciones de alianza, pudiendo así darse las formas de organización adecuadas para las tareas de ese momento. Más adelante, la situación fue aún más compleja, se exacerbaron las fuerzas del enemigo y se necesitó desarrollar también mayores fuerzas de parte de la clase obrera y de sus aliados del campo democrático. La burguesía, incluso sus sectores perjudicados por la dominación monopolista y que obtuvieron beneficios de la acción del Gobierno Popular, era en conjunto más o menos proclive, a medida que se profundizaba el proceso revolucionario, a guiarse en primer término por su contradicción con la clase obrera. Esa tendencia fue alimentada, además, por la prédica en abstracto de la perspectiva socialista efectuada al margen de los problemas reales del momento; pero, lo más perturbador y negativo fue que la clase obrera no alcanzara una hegemonía efectiva, que, en lugar de ella, campeasen las dualidades de política y las concesiones a los oportunismos de derecha y de «izquierda».

En el mes de abril de 1972, el Partido Comunista alertó sobre los peligros que se diseñaban y planteó la necesidad de elevar el papel de la clase obrera, establecer una dirección coherente y rigurosa de la economía, consolidar los

avances efectuados y aislar a los enemigos principales, para avanzar decididamente. A la luz del desarrollo de los acontecimientos, es evidente que la lucha por estas posiciones no se realizó con toda la decisión indispensable. Con razón, después de la derrota se ha establecido que «llevamos adelante la discusión y esclarecimiento de nuestras posiciones de clase en los niveles dirigentes, pero sin desarrollar suficientemente la discusión en la base, en el seno del pueblo, para impedir la proliferación del revolucionarismo pequeñoburgués que dañaba la unidad socialista-comunista y con ello el proceso»[4].

El quiebre de la dirección única, coherente, unitaria y movilizadora, fue uno de los factores de la derrota. El oportunismo proliferó en dos vertientes intercomunicadas, que no dejaban de simpatizar entre sí, paradojal pero explicablemente, alimentadas por prejuicios respecto de los comunistas. De un lado, la ultraizquierda descalificaba el proceso revolucionario y trataba de enfrentarlo o, al menos, socavarlo. Del otro lado, se sobreestimaban las particularidades pacíficas del proceso, rindiendo culto a la institucionalidad antidemocrática, sin darse cuenta de su inadecuación para las nuevas y superiores tareas que la vida colocaba a la orden del día.

LA REVOLUCION CHILENA CREO INSTITUCIONES DE NUEVO TIPO, desarrolló un democratismo superior, comenzó a fusionar, en algunos sectores, la administración estatal con la organización popular. Se desarrollaron ampliamente las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) dirigidas por la eminente revolucionaria Marta Ugarte. Las Juntas de Vecinos y los Centros de Madres elevaron su actividad. Nacieron en las industrias los Comités de Producción y los Comités de Defensa. Los sindicatos iban asumiendo funciones dirigentes en la vida social. La Dirección de Industria y Comercio se fue transformando con la designación de los inspectores populares elegidos por los sindicatos y por las JAP y sus Oficinas Comunales operaban con las organizaciones de masas. La Central Unica de Trabajadores (CUT) promovió la formación de sus Consejos de Cordones Industriales. La participación se hacía realidad en las empresas incorporadas al área social y en la zona reformada del agro y convergía a la preparación del plan

económico nacional de 1974. Se suscribió una serie de convenios de producción, productividad, provisión de materias primas, créditos, salarios, precios e inversiones, entre el Ministerio de Economía y los trabajadores de determinadas empresas. Ante los paros patronales de octubre de 1972 y de agosto de 1973, la clase obrera, con un apoyo impresionante de la juventud y de la intelectualidad, mantuvo a Chile en pie.

Pero, la Revolución Chilena no alcanzó a promover una situación propiamente de transición, o sea el pleno logro de sus objetivos democráticos y antiimperialistas y la apertura de la perspectiva socialista. Ello hubiera requerido una democratización más completa, eliminando de raíz los privilegios de los monopolios imperialistas y de la oligarquía financiera y su poder político, a la vez que erigiendo en toda la línea la nueva dirección de la sociedad, o sea lo que científicamente hubiera podido ser designado como una dictadura de la clase obrera y las masas populares urbanas y rurales, es decir la autoridad popular.

Lo sucedido indica la peligrosidad de no llevar la democratización, lo antes posible, hasta sus últimas consecuencias. Y ello incluye, indudablemente, la defensa de los derechos democráticos del pueblo frente a la contrarrevolución, reprimiendo las actividades antidemocráticas contrarrevolucionarias. Para el Partido Comunista de Chile y para la Unidad Popular era claro que la dominación de los monopolios imperialistas e internos mantiene sólo algunos de los aspectos fundamentales del problema del poder en la esfera parlamentaria y asigna otros aspectos, también fundamentales, a las esferas industrial y militar. De allí el pensamiento, reiterado constantemente por Luis Corvalán, de que los éxitos electorales no son lo más relevante en el avance de las fuerzas populares y forman parte del desenvolvimiento complejo de una lucha social más vasta. Sobre esta base, el Partido advirtió, constantemente, de la peligrosidad de las posiciones triunfalistas que consideraban asegurado nada menos que el establecimiento de la formación económico-social socialista como consecuencia inmediata del resultado de las elecciones de septiembre de 1970 e hizo ver que únicamente habíamos conquistado una parte del poder. En este marco, se requería llevar la democratización a todos los terrenos, democratizar a fondo la direc-

ción de la economía, extender la democracia a los aparatos judiciales y controladores y obtener una correlación militar democrática, además de efectuar la adecuación del conjunto del sistema administrativo a auténticos patrones democráticos. Esto es lo que quedó a medio camino. El Gobierno Popular no logró hacer efectiva la democracia, realmente, en las esferas decisivas. Sus avances y sus éxitos, aunque espectaculares y muy meritorios, fueron insuficientes.

Con todo, los avances inmensos en este camino demolieron, en la conciencia de millones de chilenos, las patrañas propaladas por la reacción, enseñando con su propia experiencia a cada cual que el proceso revolucionario brinda al pueblo más libertad, eleva su participación en la vida social y desarrolla posibilidades inéditas de superación cultural, con efectivo respeto a las creencias, las costumbres y los sentimientos de todos los sectores del pueblo.

Esto se proyecta en la vida de hoy. La actitud de la Iglesia y el entendimiento de los católicos sin partido y de los demócratacristianos con la Unidad Popular en defensa de los derechos humanos tiene su base en la observación por las masas cristianas de la actitud mantenida respecto de ellas, desde el Gobierno, por los comunistas, socialistas, radicales y cristianos de izquierda. De otra parte, la mayoría de los chilenos perdió, en buena hora, sus ilusiones en la «independencia del Poder Judicial» y en la «neutralidad de las fuerzas armadas» y sabe ahora que la democratización de uno y de las otras es indispensable. Lo más importante es que la clase obrera elevó su conciencia. Ello está vivo en su resolución de perseverar en que sigan actuando sus sindicatos, unitarios e independientes, aun bajo el terror fascista. Y no sólo la clase obrera, sino con ella la mayoría del pueblo, comenzó a entender que, en las condiciones de una sociedad de clases antagónicas, el Estado es un producto del carácter irreconciliable de estas contradicciones.

EL CARACTER ANTIDEMOCRATICO de rasgos decisivos de la antigua institucionalidad fue siendo puesto en evidencia al hacerse efectivas las transformaciones revolucionarias democráticas. Entonces, lo primordial pasó a ser la capacidad de defender las transformaciones democráticas, la fuerza del Gobierno Popular, su acción preservadora de

5*

lo conquistado por el pueblo y de continuidad en la obra transformadora. Carlos Marx hizo notar que «en general, las reformas sociales jamás suelen deberse a la debilidad de los fuertes; deben ser y serán llamadas a la vida por la fuerza de los débiles»[5].

En efecto, la capacidad de defender la revolución es un requisito de todo auténtico proceso revolucionario, cualquiera que sea la vía por la que se abra paso. La fase democrática de la revolución necesita consolidarse y avanzar, lo que se vincula inseparablemente a su defensa. Hay que defender la revolución concreta, en la etapa en que se encuentra, como única forma posible de defender la posibilidad de su ascenso a la fase superior. La experiencia chilena puso en claro el entrelazamiento dialéctico y la interdependencia de las operaciones tendientes a la destrucción del poder de las clases dominantes, las que enfrentan a la contrarrevolución y las que movilizan a las masas para construir la nueva sociedad. Todo esto se dio al calor de la lucha de clases más compleja y en el curso de las transformaciones económicas y sociales.

La defensa de las conquistas revolucionarias no es la obra de pequeños grupos, aislados de las masas, no es una conspiración, sino que se basa en la interpretación por el Gobierno Popular de los anhelos e intereses de las grandes masas, en la actividad creadora más dinámica y certera y en la capacidad movilizadora unitaria y combativa. Sin embargo, todo eso no es suficiente si falta la aptitud para afianzar el gobierno democrático y fortalecer el Estado en cuanto portavoz de las fuerzas progresistas. Ello implica la modificación sucesiva e incesante de la antigua institucionalidad, en el sentido de colocar todos los resortes del poder al servicio de la clase obrera, del pueblo y de la nación.

Los comunistas chilenos hemos aprendido cuanto perjudica a la revolución y al pueblo toda debilidad ante la violencia reaccionaria. Hemos llegado a la conclusión de que el deber más elemental de las fuerzas revolucionarias, para realizar a firme las tareas de la etapa democrática, es encontrarse en disposición intransigente a aplicar golpes demoledores a quienes recurren a la violencia contrarrevolucionaria. A la movilización de la mayoría activa del pueblo ha de prestar respaldo una adecuada organización de

masas con los medios, la educación y el entrenamiento adecuados.

Por lo demás, para avanzar de la etapa democrática a la etapa socialista es imprescindible que las fuerzas populares se mantengan a la ofensiva, lo cual no es sinónimo de ampliar incesantemente el radio de las acciones expropiatorias o el campo de los enemigos, sino que exige, en cambio, llevar más y más adelante la democratización, cohesionar más y más en actitud combativa a la clase obrera, colocar más y más en tensión al partido y a sus aliados, hacer más y más eficiente el gobierno del pueblo, ganar más y más fuerzas sociales y políticas para el apoyo al proceso, aislar más y más a la contrarrevolución.

¿Por qué la dirección revolucionaria no lo consiguió? En el caso chileno, hubo un momento en que todo pasaba a ser determinado por la decisión política en el ejercicio del poder y en la reunión de fuerzas para defender las posiciones. El gran asunto era el de un real poder democrático, el de la autoridad del Gobierno Popular. En la medida en que esto no se planteaba con la más absoluta certeza y no se trabajaba con la indispensable prioridad en la resolución de las cuestiones que implicaba, la política diseñada no alcanzó suficiente carácter movilizador.

El poder popular debía ser el correspondiente a la etapa que se vivía y a las tareas planteadas. Se encarnaba en la síntesis del Gobierno Popular y de la fuerza del pueblo. La debilidad en su desarrollo permitió que muchos se confundieran con la prédica de las concepciones reformistas y anarquistas del poder, propaladas respectivamente por los que rendían culto a la antigua institucionalidad y por los que reclamaban un «poder popular» opuesto y contradictorio con el Gobierno Popular.

La derrota temporal de la Revolución Chilena acredita la dialéctica de las tareas democráticas y de la perspectiva socialista, así como la dialéctica de las vías revolucionarias, que exige crear la capacidad y tener en el momento preciso la disposición para el paso de una a otra, de acuerdo a las necesidades planteadas por los hechos. El putsch fascista del 11 de septiembre de 1973 comprobó que, aunque nosotros olvidemos estas leyes objetivas, el enemigo las tiene siempre presentes.

[1] *Partido Comunista de Chile. Boletín del Exterior*, n.º 20, 1976, pág. 8.

[2] «¡Desde Chile hablan los comunistas!». Ediciones Colo-Colo, 1976, págs. 28–29.

[3] V. I. Lenin. *El Marxismo y el Estado*, Moscú, Ed. Progreso, 1973, págs. 12–13 (en español).

[4] «¡Desde Chile hablan los comunistas!», pág. 88.

[5] C. Marx y F. Engels. *Obras*, 2ª ed., t. 4, pág. 256 (en ruso).

# LA DIALECTICA DE LAS VIAS REVOLUCIONARIAS

Jorge INSUNZA,
miembro de la Comisión Política del CC del Partido Comunista de Chile

EL PROCESO REVOLUCIONARIO CHILENO fue la primera experiencia prolongada de desarrollo pacífico de la revolución. El movimiento comunista internacional lo ha apreciado por ello como un caso cuyo análisis es de gran valor desde el punto de vista del perfeccionamiento de la estrategia y la táctica revolucionarias. El estudio de estas luchas de clase permite extraer conclusiones para enriquecer la teoría del desarrollo de la revolución por una vía pacífica así como para precisar sus límites y para subrayar la vigencia de la concepción marxista-leninista de la necesidad de estar en condiciones de utilizar todas las formas de lucha.

Para nosotros, comunistas chilenos, la evaluación precisa del proceso como totalidad, de éxitos y errores, es una necesidad para conducir acertadamente nuestras luchas del presente y del porvenir. Es una tarea a la que se viene prestando atención desde los primeros días después del golpe, pero que sigue siendo actual.

NUESTRA EXPERIENCIA ES, en verdad, una confirmación de que las vías de la revolución, pacífica o armada, no pueden ni deben ser concebidas como formas excluyentes. Una contraposición absoluta de ellas acarrea serios peligros para el éxito del proceso revolucionario.

Ya Marx, hablando en nombre de los obreros revolucionarios, advertía a los reaccionarios: «...Actuaremos contra ustedes pacíficamente donde sea posible, con las armas donde sea necesario»[1]. Fijaba con ello criterios generales de táctica que no han perdido vigencia. Las vías distintas de acceso al poder y de su consolidación, pacífica o armada, han de ser vistas en el devenir del proceso, consti-



tuyen una unidad dialéctica. Un ejemplo brillante de tal concepción de las vías es la que llevó a la práctica Lenin en 1917. Señala en abril las posibilidades de desarrollo pacífico; después de los hechos de julio afirma la necesidad de prepararse para la insurrección armada; vuelve en septiembre a estimar posible el desarrollo pacífico y a esforzarse para crear condiciones para que cristalice esa posibilidad, para concluir, poco después, la necesidad de llevar adelante la insurreción armada que conducirá a la victoria de la Revolución de Octubre.

Nuestro Partido, que desde tiempo antes venía explorando posibilidades de acercamiento a la revolución por la vía pacífica, durante la década de los años sesenta profundizó su propia elaboración, perfeccionando gradualmente una concepción, aplicable a las condiciones de Chile, que trataba de tener en cuenta las leyes generales de la revolución y también las particularidades nacionales. Los comunistas propusimos unir alrededor de la clase obrera a la mayoría del país, a todas las fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas, para constituir un gobierno capaz de llevar adelante los cambios revolucionarios que la maduración de la crisis de la sociedad chilena hacía indispensable. Se trataba de cristalizar la revolución antiimperialista, antimonopolista y agraria con la perspectiva de avanzar al socialismo. Diferenciando dos etapas estratégicas de la revolución nos proponíamos desarrollarlas en un proceso sin ruptura, posibilidad determinada por el entrelazamiento objetivo de las tareas de una y otra y por el rol dirigente que la clase obrera puede y debe asumir en la vasta alianza de las fuerzas interesadas en los cambios. Nuestro Partido puso en evidencia que se perfilaba una crisis revolucionaria y junto con ello las posibilidades que se abrían en nuestro país para llevar adelante la revolución por una vía pacífica.

La posibilidad de que el movimiento obrera y popular se abra paso al poder sin recurrir a la violencia armada generalizada depende de factores muy diversos, objetivos y subjetivos, nacionales e internacionales. Considerábamos posible una determinada conjunción de estos factores que permitiera esa forma de victoria popular en Chile. Esta constatación se convirtió en un importante factor subjetivo que dio fuerte impulso al desarrollo del movimiento de

masas y ensanchó las posibilidades de alianza en torno a la clase obrera.

El Partido hubo de defender su concepción contra múltiples ataques y muchas incomprensiones. Se demostró en la teoría y en la práctica el carácter revolucionario de esa vía. Se precisó que el apelativo «pacífica» no debía conducir a equívocos. El desarrollo del proceso por esos cauces no significaba mantener la lucha del movimiento popular sólo en los marcos de las formas legales burguesas, ni se vinculaba necesariamente, ni mucho menos exclusivamente, a procesos electorales. La vía pacífica (decíamos también «no armada») no implicaba ni podía implicar la prescindencia de la violencia en el desplazamiento de las clases reaccionarias del poder. Estamos convencidos de que la revolución es siempre violencia y coerción social aunque no sea siempre armada.

Todos los escritos del Partido destacaban que la cuestión de la vía a seguir es algo que no pueden determinar subjetivamente los revolucionarios, que no está exclusivamente en sus manos decidir y que debía preverse cambios en la situación y adoptar las formas de preparación consiguientes. Esta conclusión está explícita en la redacción del Programa de nuestro Partido en 1969. En dos versiones anteriores se había redactado el asunto de las vías remarcando las posibilidades de la vía pacífica. Ahora, en cambio, no se hacía tal mención. Como dijo el camarada Luis Corvalán en el XIV Congreso Nacional del Partido, «el nuevo texto del Programa sostiene que 'la revolución es un proceso múltiple vinculado a todas las luchas que viene librando nuestro pueblo. *Sus vías se determinan en conformidad a la situación histórica, pero siempre han de basarse en la actividad de las masas*'. En consecuencia, la salida revolucionaria no está asociada, obligatoriamente, a una vía determinada»[2].

Esta apreciación no estaba vinculada a un cambio de táctica; era una mejor elaboración de aquella con que veníamos trabajando.

A la luz de nuestra experiencia parece claro que es necesaria una profundización mayor de las categorías vía pacífica y vía armada. Los hechos indican que hay que despojar esos conceptos de connotaciones estratégicas, remitirlas más al terreno de la táctica, que cambia al modi-

ficarse las circunstancias, y hacer el análisis y la proyección de línea política desde el punto de vista de su interrelación y unidad dialéctica. Nuestros puntos de vista sobre esa dialéctica, como se ha señalado, se precisaron progresivamente, pero subsistió cierta tendencia a absolutizar la vía pacífica. Usamos expresiones como «cauce natural» para referirnos a ella y el concepto correcto de la necesidad de trabajar en un determinado período con «una sola línea» se convirtió para muchos en una identificación de nuestra línea con la vía por la que marchábamos en ese momento.

Como se sabe, Lenin exigía del Partido revolucionario el dominio de todas las formas de lucha. Pero unía a esa necesidad la exigencia de guiarse en un momento determinado por una línea táctica definida. Explicaba que no se debía «confundir la admisión *en principio* de todos los medios de lucha, de todos los planes y procedimientos, con tal de que sean convenientes, con la exigencia de que en *determinado momento político* es preciso guiarse por un plan aplicado en forma inflexible...»[3]

Resolver en la lucha la aplicación de estos criterios no es siempre fácil. Hay que tener en cuenta el peso de una situación objetiva puesta de relieve por el mismo Lenin y que se manifestó en el caso chileno.

«Toda forma de lucha requiere la correspondiente técnica y el correspondiente aparato –subrayaba Lenin–. Cuando las condiciones objetivas convierten la lucha parlamentaria en la principal forma de lucha (Lenin se refiere aquí a formas de lucha revolucionarias), será inevitable que en el partido se destaquen con mayor fuerza los rasgos del aparato, en función de la lucha parlamentaria»[4]. La acentuación de tales rasgos conlleva ciertos riesgos para operar con agilidad los cambios de táctica que puede imponer el curso de los acontecimientos, riesgos que sólo puede minimizar una actividad muy atenta y profunda de la dirección y de todo el Partido. Tal actividad existió en nuestro caso pero resultó insuficiente.

No obstante defectos, el análisis del Partido había entregado los elementos teóricos esenciales de carácter estratégico y parcialmente de carácter táctico capaces de generar y conducir un fuerte movimiento de masas tras objetivos revolucionarios. Se crearon las condiciones para hacer

cuajar la situación revolucionaria en desarrollo por medios fundamentalmente no armados. La línea política, que definía acertadamente los enemigos principales y descargaba en ellos el golpe central y que, abierta al aprovechamiento de la coyuntura electoral, ponía el acento especialmente en el desarrollo de la lucha de masas, en su actividad revolucionaria, mostró su capacidad de conseguir la victoria.

Como resultado de un complejo sistema de perseverantes combates de clases que abarcó todos los frentes de la actividad social, esa orientación condujo a la conquista de la Presidencia de la República por la Unidad Popular.

La victoria de 1970 realizó la posibilidad del ascenso al poder (en rigor, a una parte del poder) de un gobierno revolucionario utilizando el mecanismo electoral burgués y las leyes de la democracia burguesa. La hipótesis planteada por la teoría leninista de la revolución se convirtió en hecho.

¿Acaso la derrota posterior del proceso chileno comprueba la inviabilidad de tal camino revolucionario? Esta afirmación ha sido hecha por exponentes del pensamiento burgués y pequeñoburgués. Pero ningún análisis verdaderamente científico podría demostrar tal afirmación. El revelará, sin embargo, pasos que había que dar y no se dieron o se dieron sin suficiente energía y decisión para hacer posible la continuidad de la victoria por esos medios.

También será legítima una conclusión más general. La posibilidad del tránsito pacífico de la revolución es un proceso que se completa cuando se resuelve definitivamente la cuestión del poder, cuando se han liquidado las posibilidades de restauración de las viejas clases desplazadas, cuando se ha consolidado la nueva democracia y la nueva conducción de la sociedad. Es posible distinguir fases en el proceso. El acceso del movimiento popular a posiciones de poder (incompleto en un comienzo) culmina una primera etapa. Se abre con ella el período de las tareas del «segundo día», del proceso de avance y consolidación durante el que sigue planteado el dilema: ¿quién vencerá a quién? Hay premisas comunes para la victoria en una y otra fase pero hay también niveles de exigencia distintos que debe llenar el movimiento revolucionario en cada una de ellas. Y puede ocurrir que la reacción exacerbada imponga la

necesidad de la violencia revolucionaria armada. En tal situación la segunda fase deberá resolverse por una vía diferente a la primera. Pero eso, por una parte, no invalidará el primer paso y, por otra, es evidente que las posibilidades de la reacción de provocar la guerra civil tenderán a ser menores después de la primera victoria, si los revolucionarios trabajan bien.

La experiencia del proceso chileno hasta 1970 y un tiempo después permite aseverar que el desarrollo del proceso revolucionario por una vía pacífica es el más apropiado donde existen esas posibilidades y, naturalmente, sólo hasta el momento en que existan. Es el agotamiento o inexistencia de condiciones para el desarrollo de la revolución por una vía pacífica lo que condiciona y obliga, en una situación revolucionaria, a su enrielamiento por la vía armada.

LA POSIBILIDAD DEL DESARROLLO DE LA REVOLUCION por una vía pacífica está estrechamente vinculada a los cambios substanciales que han tenido lugar en el mundo desde la Gran Revolución Socialista de Octubre. La mayor posibilidad de hoy está vinculada directamente a la apertura de una nueva época en la historia de la humanidad, al peso creciente del socialismo en el mundo. Se ha hecho más y más difícil para el imperialismo la exportación de la contrarrevolución, la intervención armada directa, que impone la necesidad de la violencia revolucionaria armada. La victoria de la revolución vietnamita, que constituyó un severo golpe a la exportación de la contrarrevolución, es un símbolo de nuestra época. Lo es también la victoria de Cuba, expresión, entre otras cosas, de la imposibilidad del imperialismo de llevar a cabo una intervención con sus propias fuerzas armadas en determinadas circunstancias. Y aunque ambas revoluciones son producto de una enconada lucha armada, resultan de todos modos confirmaciones de las premisas internacionales que hacen posible una revolución por vía pacífica, allí donde se conjugan a esos factores internacionales los factores nacionales correspondientes.

El proceso chileno permite reafirmar una conclusión adicional. La influencia del socialismo no opera exclusivamente por sí sola. Las posibilidades de que su influencia contri-

buya a la consolidación de un proceso revolucionario determinado están también vinculadas a la actitud de la dirección política de cada proceso. La dirección revolucionaria puede contar con el apoyo de los países socialistas y éstos han demostrado su decisión de aportar a la victoria del proceso nacional dado sin condiciones.

Algunos sectores remarcan las dificultades que impone en América Latina la dominación del imperialismo para un tránsito pacífico. Hacen notar el encono que éste coloca en la defensa de su «reserva estratégica». Añaden la ubicación geográfica como un factor que pesa políticamente. Ambos son hechos reales, pero no únicos. Ambos pueden ser y son más que compensados si los movimientos revolucionarios se orientan decididamente a apoyarse en el socialismo real y en la solidaridad proletaria. Este es un problema de principios y práctico muy importante. No es el aislamiento respecto del campo socialista lo que añade fuerzas a la posibilidad del tránsito pacífico sino al contrario, el fortalecimiento de los vínculos con él es lo que aumenta las posibilidades de éxito a esa vía, como en general del éxito de la revolución por cualquier vía.

La afirmación general de que las posibilidades del desarrollo pacífico de la revolución aumentan en nuestra época tiene una de sus bases en la nueva situación internacional. Pero el mejoramiento progresivo de la correlación de fuerzas en nivel internacional no lleva a concluir la obligatoriedad ni la universalidad de esa vía. Se trata sólo de un aumento de las posibilidades reales de éxito de dicha vía, posibilidades que en el pasado se estimaban extremadamente raras[5].

La experiencia de Chile indica, por otra parte, que el imperialismo ha acomodado también su táctica a las nuevas condiciones mundiales y que ha creado medios alternativos a la intervención armada directa para derrotar el proceso revolucionario. Se trata de operaciones en el campo de la economía, de las relaciones internacionales, de la ideología, de las Fuerzas Armadas, etc. Chile brinda un abundante material para el examen de estos métodos. No cabe en los propósitos de este artículo analizarlos detalladamente. Pero se puede anotar que también una parte de la actividad de los revolucionarios para anular los efectos de esos medios alternativos se vincula directamente a la

estrecha colaboración con el campo socialista y al apoyo en la solidaridad internacional, lo que nosotros no hicimos suficientemente.

PARTIENDO DE LA INTIMA RELACION de los factores internacionales y nacionales habrá siempre que subrayar la importancia decisiva de los factores internos para el éxito del proceso revolucionario. La base de la revolución, en las condiciones de Chile, era la conquista de una sólida mayoría en torno a la clase obrera. Es sabido que la victoria electoral de 1970 que permitió a las fuerzas populares conquistar el gobierno del país fue una victoria aritméticamente relativa. El triunfo no fue alcanzado por mayoría absoluta, sino con un 36 por ciento del electorado. Asumir el gobierno después de la elección fue el resultado de un proceso enconado de luchas de clases en los dos meses siguientes, proceso en el que la Unidad Popular logró derrotar una primera operación encubierta del imperialismo que culminó en un intento de golpe de Estado y logró colocar tras de sí a la mayoría del pueblo y poner a la defensiva al enemigo de clase. Sin esta condición no hubiera sido posible imponer el respeto al resultado electoral, la victoria en la lucha por el gobierno.

Entonces, guiándose por los hechos, hay que considerar la victoria electoral como un paso de gran significación pero que no era garantía suficiente de que la oligarquía y el imperialismo, que mantenían una posición dominante en la sociedad, respetasen el resultado y que por tanto, no determinó «per se» la conquista del gobierno sino en concatenación a la lucha previa a la elección misma y a la lucha posterior a ella.

Si la condición básica de la victoria inicial fue la conformación de una mayoría calificada y actuante para el objetivo del momento, el desarrollo de esa mayoría, su consolidación, su actividad, era también condición básica del desarrollo del proceso hasta su culminación. «En virtud del carácter mismo de la revolución chilena, de los intereses de clases y capas populares, de la necesidad de aislar a los reaccionarios, de derrotar sus maniobras sediciosas, de impedir la intervención extranjera, de enfrentar las presiones del imperialismo, de darle en fin un respaldo nacional al gobierno, en virtud de todo esto puede y debe des-

arrollarse todavía más la unidad del pueblo y convertirse en la fuerza realmente invencible. ¡Tal es la cuestión principal que hay que resolver en los días que corren!»[6]

Había que actuar para convertir una correlación de fuerzas no consolidada, no definitiva, en una correlación favorable al pueblo, definitiva. Y había que hacerlo utilizando las posiciones de poder alcanzadas y realizando desde ellas una acción de gobierno que ayudara a ese proceso.

Las perspectivas de avance y consolidación del proceso revolucionario dependían en mucho de esto. Esa era la base indispensable e irreemplazable para desarrollar el poder popular real y llevar victoriosamente a término la revolución democrática y avanzar en seguida a la revolución socialista. Era el asunto principal que hacía posible materializar los objetivos revolucionarios por medios pacíficos y también la base para enfrentar el desencadenamiento de la violencia reaccionaria.

Como se ha señalado, el problema clave era, sin duda, el de la férrea unidad de la clase obrera y la construcción de una sólida alianza, en torno suyo, de los sectores intermedios de la población, en primer término de los campesinos pero también, de manera relevante, de las vastas capas medias urbanas que, en Chile, tienen un peso social considerable. Esta alianza podía incluir sectores de la burguesía nacional o al menos desarrollar una política que los neutralizara. Las capas o sectores intermedios, como se sabe, son los que se encuentran entre los dos polos, el de la revolución y el de la contrarrevolución y que tienden, antes que nada económicamente, y por eso política e ideológicamente, a oscilar entre esos polos. El polo contrarrevolucionario en la sociedad chilena lo constituyen las oligarquías financiera y terrateniente y el imperialismo. En relación con su aislamiento debía operar la clase obrera para asegurar su victoria. Su arco de alianza *necesario y posible* era muy vasto. No fue llenado. Al revés, en el curso del proceso se produjo un acentuado aislamiento de la clase obrera, especialmente a la hora del golpe y que fue factor principal de la derrota. La afirmación no niega que la clase obrera logró ganar aliados, algunos de importancia, pero comprueba a la vez que estuvo muy lejos de abarcar el arco de alianza necesario que creara condiciones para asegurar su victoria.

En torno a este asunto clave se anudaron batallas decisivas en el curso de los tres años de Gobierno Popular. Un papel muy dañino para los intereses de la clase obrera jugaron los elementos ultraizquierdistas. Sus desatinos, originados en supuestos falsos sobre el carácter de la revolución chilena y que fueron utilizados a fondo por el imperialismo y la reacción, provocaron primero desazón y luego pánico en sectores muy grandes de las capas intermedias.

Ganar la mayoría revolucionaria del pueblo sólo es posible para las tareas maduras en cada coyuntura política, en cada etapa de la revolución. Por eso una condición de éxito es definir acertadamente el carácter de la etapa y ceñirse a tales conclusiones de un modo responsable.

La clase obrera puede convertirse en centro de unidad y desarrollar su influencia en las capas intermedias uniendo dos factores esenciales: su capacidad de asumir en su política general la defensa de sus intereses junto con la defensa de los intereses inmediatos de esas capas sociales y el desarrollo de su propia fuerza revolucionaria. La política del gobierno y de las fuerzas populares debía orientarse por estos criterios para ganar y consolidar aliados y, simultáneamente, imposibilitar a las fuerzas reaccionarias influir sobre los sectores en disputa.

Analizadas las cosas desde este ángulo, junto a los logros significativos del proceso revolucionario, verdaderamente históricos, como la nacionalización del cobre, la reforma agraria, la creación del área social, etc., resaltan también sus debilidades. Enfrentados a exigencias anormales por el bloqueo económico imperialista, no se logró aprovechar las transformaciones revolucionarias concretadas, en la medida que la situación lo exigía. La falta de unidad de dirección del bloque político facilitaba las desviaciones de derecha y de «izquierda». Hubo insuficiencias en la democratización real del sistema, que hubiera creado mejores condiciones para la fusión en un frente único de las fuerzas objetivamente interesadas en los cambios. Existieron vacilaciones para contener los excesos de la reacción, particularmente de los medios de prensa que controlaba abrumadoramente y con los que combatía con saña inédita en Chile al Gobierno y al movimiento popular. Cada uno de estos hechos dificultó la consolidación de la mayoría.

La conquista de la mayoría, sin embargo, no hubiera sido suficiente. Se requería desarrollar otra condición también indispensable: construir con esa mayoría los medios para imponerse a sus adversarios en todo terreno. «En períodos revolucionarios –afirmaba Lenin– no es suficiente conocer la 'voluntad de la mayoría'; es necesario *resultar más fuerte* en el momento decisivo y en el lugar decisivo, es necesario vencer»[7]. La revolución «ha de saber defenderse». El instrumento básico para esa defensa es el nuevo Estado que la revolución debe crear. Esta tarea plantea problemas muy complejos en las condiciones de la vía pacífica, problemas que de nuevo subrayan la unidad dialéctica de las distintas vías posibles de la revolución.

El proceso por vía pacífica, como se dio en Chile, colocó en manos del movimiento popular una parte del poder. El éxito resultaba así una demostración de la fuerza del movimiento popular y, a la vez, una demostración de su incapacidad momentánea de conquistar *todo* el poder del Estado. Esta es una situación que no tiene porqué reproducirse en cada victoria por vía pacífica. En general, será posible asumir en el «primer día» el conjunto de los mandos, al menos de los mandos civiles del aparato estatal (ejecutivos y legislativos). Persistirá, sin embargo, la existencia del viejo aparato estatal y, eventualmente en su mismo seno y seguramente fuera de él, de centros de poder no controlados por la revolución. Todo ese aparato marchará con dificultades a las transformaciones necesarias, al ejercicio de la coerción necesaria para abrir paso a las transformaciones revolucionarias, a menos que sea modificado sustancialmente en su contenido y también en su forma. El asunto crucial, como se puede concluir de las experiencias de Chile, es el de la democratización profunda del aparato estatal a través de la creación de los mecanismos que aseguran el control popular directo de las funciones estatales y el traslado, en la mayor proporción posible, de sus atribuciones a las masas populares mismas. Las experiencias avanzadas en ese terreno, por ejemplo, en el control y distribución de los abastecimientos esenciales y de sus precios son una demostración fehaciente de las posibilidades que se abren por este camino. Lo decisivo es el control «desde abajo» de las masas, asumiendo de hecho el ejercicio del poder y presionando desde afuera para realizar las modificaciones del

6 7416-5

aparato estatal que la dirección revolucionaria impulsa desde dentro.

Los asuntos relativos a la legalidad burguesa y el respeto a esa legalidad cuando se ha asumido posiciones de poder por medio de ella, son un aspecto de esta lucha. Este asunto se planteó en Chile de una manera especial por la forma en que se dio el primer paso, vale decir, porque el movimiento popular conquistó sólo el poder ejecutivo mientras sus opositores mantenían fuertes posiciones en otros poderes estatales como el parlamento, el poder judicial, organismos contralores, etc. Esta situación peculiar determinaba que la modificación de la legalidad vigente, la dictación de nuevas leyes para hacer avanzar en el nivel jurídico la democratización real y las transformaciones revolucionarias, fuera difícil. Sin embargo, de nuestra experiencia se puede concluir que las conquistas democráticas que la clase obrera y el pueblo han ido afincando con su lucha previa, y que son una de las condiciones que han hecho posible el progreso de la revolución por medios pacíficos, la legalidad vigente, puede ser usada por los revolucionarios desde las posiciones de poder conquistadas para impulsar avances muy considerables. Es obvio que este uso es posible combinando la utilización de los mecanismos legales con la lucha activa de masas. Las nacionalizaciones de los grandes monopolios fueron una demostración de estas posibilidades.

No obstante, nuestra experiencia también muestra que la lucha de las masas no puede, tampoco después de haberse conquistado el gobierno, quedar sometida a los marcos legales antiguos, en definitiva estrechos, donde no cabe toda la actividad revolucionaria necesaria.

Todo esto lleva a considerar la necesidad de una organización unificadora que exprese el poder popular generado desde abajo. De manera más o menos espontánea en Chile se comenzó a resolver tal necesidad. De la experiencia de las Juntas de Abastecimientos y Precios marchamos a la creación de otros organismos que reunían a delegados de las masas populares. Pero no culminaron en órganos de poder. No creemos que necesariamente se deba marchar a una organización especial; probablemente en muchos países se pueda convertir en órgano de poder a alguna de las organizaciones existentes. Lenin en su tiempo mostró que

«El proletariado ha abordado y abordará de diversas maneras esta tarea original. En algunos lugares de Rusia la revolución de febrero-marzo ha puesto casi la totalidad del poder en sus manos —escribía Lenin analizando la situación concreta de aquellos años— en otros, el proletariado quizá comience a organizar y desarrollar en forma 'subrepticia' la milicia proletaria; y en otros probablemente luchará por elecciones inmediatas, sobre la base del sufragio universal, etc. a los municipios y a los zemstvos, para convertirlos en centros de revoluciones...»[8] Lo decisivo es, entonces, crear las condiciones para que el pueblo se exprese y ejerza efectivamente el poder desde abajo, para que participe directamente en la edificación de la nueva democracia. Sin eso el poder en las alturas no podrá cumplir sus tareas revolucionarias que no avanzarán sin una lucha muy enconada.

En el proceso chileno hubo tropiezos en este campo porque faltó claridad suficiente y unidad de dirección entre los revolucionarios para definir el tipo de Estado por construir, la forma y contenido de la democracia necesaria. Las vacilaciones a que dio lugar la indeterminación de esta tarea fueron desde la negación de la necesidad de toda dictadura (lo que se traducía inevitablemente en debilidades en la lucha por la transformación del Estado burgués) a la pretensión de implantar de inmediato la dictadura del proletariado, lo que se convertía en un salto al vacío y no podía sino llevar a un aislamiento de la clase obrera. Esa indeterminación provocó cierto grado de anarquía: al faltar la teoría revolucionaria, faltaba el factor subjetivo capaz de encauzar y desarrollar las acciones de las masas que pugnaban por contribuir a consolidar un poder popular.

EL ASUNTO DECISIVO en definitiva en la defensa de la revolución es el de las Fuerzas Armadas y, en general, el de la correlación de fuerzas en nivel militar. Las posibilidades de toda vía revolucionaria de culminar con éxito sus tareas atraviesan necesariamente este problema. En el caso de una vía no armada el crear una correlación militar favorable que culmine con la transformación del ejército y su ubicación al lado del pueblo es un elemento indispensable de su culminación. Son conocidos los elementos tácticos deducidos por Marx, Engels y Lenin para abordar el problema específico de la generación de una correlación de

6*

fuerzas favorables en el nivel militar. Se trata de indicaciones que en general se expusieron para un proceso que se define por vía armada. Pero, sin analizarlos en detalle, se puede decir que todos ellos deben estar presentes en una concepción completa para el desarrollo de una revolución por vía pacífica. En este caso el objetivo no será necesariamente la insurrección armada o la guerra civil pero precisamente para evitar que la reacción la desencadene ese trabajo es indispensable.

Es claro que uno de los componentes fundamentales de la correlación de fuerzas militar es la situación en el interior de las FF. AA. y de orden. ¿Cómo abordamos este problema en Chile?

En la primera etapa, hasta culminar con la victoria de 1970, nuestros esfuerzos se dirigieron a conseguir la no intervención de las FF. AA. contra el movimiento popular, a crear las condiciones que hicieran imposible un golpe reaccionario. Nos apoyamos para ello en las tradiciones de prescindencia en la política partidista que mantenían, relativamente, durante cerca de 40 años y en las fuerzas constitucionalistas que operaban en el interior de las FF. AA., orientadas a respetar el triunfo popular si éste se alcanzaba por vía electoral.

Poníamos de relieve en nuestros análisis el hecho que las FF. AA. chilenas no estaban vinculadas *directamente* a los grandes monopolios, que sus cuadros de oficialidad eran fundamentalmente provenientes de las capas medias, que sufrían los efectos de la crisis y que la suboficialidad, clases y soldados provenían de la clase obrera o del campesinado, en general las capas más pobres de la población. Las FF. AA. no podían por tanto ser impermeables al proceso de cambios, decíamos.

Como un modo de asegurar su no intervención acentuábamos sus proclamadas tradiciones constitucionalistas y su profesionalismo.

Advertíamos, al mismo tiempo, que la profundización de la crisis creaba situaciones nuevas: «es un hecho real que las FF. AA. constituyen un nuevo factor de la política nacional. Se puede decir que el período de prescindencia de las FF. AA. en la vida política, prescindencia que nunca fue absoluta, pero que durante varias décadas estuvo reducida a uno que otro grupo de oficiales, ha terminado o tiende a

terminar»[9]. Agregábamos que «no se puede pasar por alto las condiciones en que han sido formadas y sobre todo, la educación y el entrenamiento que han recibido en los últimos decenios bajo la inspiración del Pentágono»[10].

Creemos poder afirmar que la orientación básica dirigida a obtener en primera instancia la no intervención, lo que hemos llamado «neutralización», fue correcta como lo era apoyarse en ciertas tradiciones democráticas existentes, así como dar un valor a la composición de clase de las FF. AA. para concretar ese primer objetivo. Sin embargo, esa política era, como lo vemos claro ahora, completamente insuficiente y además basada en algunos presupuestos teóricamente falsos.

Por ejemplo, nosotros considerábamos el «sentido profesional» como un valor en el que podíamos asentar nuestros esfuerzos para impedir una intervención antipopular; pero en determinadas circunstancias, esa categoría también puede ser aprovechada por otros para acentuar el aislamiento de las FF. AA. respecto del pueblo y de sus problemas. En este segundo caso, prevalece en el profesionalismo una mentalidad superpuesta a las determinaciones clasistas provenientes del origen social de los soldados.

La experiencia chilena muestra que la «neutralización» fue condición necesaria y suficiente para el primer paso, la conquista del gobierno, las exigencias para culminar el proceso revolucionario son cualitativamente diferentes. La neutralización es un fenómeno temporal, virtual. Por su propia esencia no puede ser más que eso. La contradicción se resolverá a la larga en un sentido u otro, a favor de la revolución o de la contrarrevolución. En el curso del proceso, entonces, debe resolverse obligatoriamente el paso de los FF. AA. al lado del pueblo, por la vía de su democratización profunda y alcanzar este objetivo es materia de una lucha muy enconada y multifacética.

En este campo se advertía con máxima claridad la dialéctica de revolución y contrarrevolución puesta en evidencia por Marx. Las exigencias que debe cumplir la revolución crecen a medida que avanza, porque avanza hasta su consolidación haciendo crecer a la vez la contrarrevolución. Así, lo que era suficiente para el primer paso no lo es para el que viene.

Es necesario empeñarse con todos los medios adecuados

en la transformación de las FF. AA. La vía principal era, repetimos, su democratización profunda a través de la influencia creciente de la clase obrera y del pueblo en su seno. Se dieron pasos en tal dirección. Se desarrolló en algún grado un proceso de integración de ellas a la lucha por el desarrollo del país, lo que las conducía a un contacto más estrecho con el pueblo y sus problemas. Algunos cuadros patriotas de su seno asumieron posiciones en el aparato estatal y en coyunturas difíciles como la del intento contrarrevolucionario de octubre del 72 la alianza del movimiento popular y el sector patriota aseguró una victoria del pueblo. Hay que decir, además, que todo eso fue poco. Las limitaciones de ese trabajo, no estaban constreñidas por cuestiones «constitucionales» sino por insuficiencias políticas en el campo de la revolución. El sectarismo izquierdista pesó gravemente en este campo. También nos dañaron nuestros propios defectos.

En ese período afirmamos: «Es verdad que los institutos militares también necesitan cambios; pero éstos no pueden serles impuestos. Deben surgir de su propio seno, por su propio convencimiento». Esto es un planteamiento evidentemente incompleto. Para alcanzar los cambios no basta con la lucha en su seno. Se requiere también una lucha desde el exterior. Esta forma de disputa por las FF. AA. se ha mostrado evidentemente necesaria en las insurrecciones armadas. Es también una necesidad, con las formas apropiadas, en las condiciones de la revolución por medios «pacíficos». «El contenido esencial de la ley de la violencia revolucionaria es la combinación de las fuerzas políticas con las FF. AA.», ha dicho el dirigente vietnamita Vo Nguyen Giap. Esto se aplica a toda vía revolucionaria.

Como hemos dicho, algunos avances se hicieron en esa dirección pero lo que hicimos estuvo por debajo de nuestras necesidades y por debajo de nuestras capacidades. No conseguimos poner al ejército al lado del pueblo ni asegurar por otros medios una correlación militar favorable. Cuando se erosionó nuestra correlación en el nivel político, esta situación hizo crisis.

Si atendemos al *resultado* de nuestra experiencia se podrá afirmar, como lo hacen algunos, que este es un problema insoluble, que el enfrentamiento armado es siempre inevitable. Pero si atendemos al *proceso* de nuestra

experiencia la conclusión será otra. Este problema es también posible de resolver en una vía pacífica, es decir, en un proceso revolucionario donde los medios de fuerza sean fundamentalmente pacíficos y será tanto más probable que así sea cuanto mejor preparado esté el movimiento revolucionario para defender sus conquistas en cualquier terreno.

LA REVOLUCION CHILENA fue derrotada temporalmente. Sin embargo, esto no ha significado, pese a los esfuerzos de la reacción, que se borren de la mente del pueblo los logros alcanzados a través de su mayor creación histórica: el Gobierno Popular. El contraste entre ayer y hoy es tan abismante que muchos de los que no se empeñaron en la defensa del Gobierno Popular retornan hoy desde sus pasadas posiciones y se aproximan a la unidad de acción con las fuerzas populares a las que ayer combatieron. El análisis crítico del período, sobre la base de la valoración adecuada de las inmensas adquisiciones de las masas durante él, es también un factor de unidad. Esencialmente, el proceso de maduración subsiguiente de la política de la vanguardia, asimilando a fondo las lecciones que fluyen de éxitos o de insuficiencias, permitirá a ésta superar las dificultades de hoy y abrirse paso con más seguridad y fuerza en la próxima coyuntura revolucionaria.

[1] C. Marx y F. Engels. *Obras*, t. 17, pág. 649 (en ruso).

[2] L. Corvalán. *Camino de Victoria*. Santiago de Chile, septiembre de 1971, pág. 331.

[3] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2 ed., Buenos Aires, Cartago, t. V, pág. 446.

[4] V. I. Lenin. Ob. cit., ed. cit., t. XI, pág. 382.

[5] Véase V. I. Lenin, Ob. cit., ed. cit., t. XXVI, págs. 391–392.

[6] L. Corvalán. «Gobierno Popular en Chile». *Revista Internacional*, n.º 12, 1970, pág. 8.

[7] V. I. Lenin. Ob. cit., ed. cit., t. XXVI, pág. 282.

[8] V. I. Lenin. Ob. cit., ed. cit., t. XXIV, pág. 369.

[9] L. Corvalán. *Camino de Victoria*, pág. 315.

[10] Ibid., pág. 425.

# LA CLASE OBRERA Y SU POLITICA DE ALIANZAS

**Gladys MARIN,**
miembro de la Comisión Política del CC
del Partido Comunista de Chile

LA CONSTITUCION EN CHILE del Gobierno Popular no fue producto de la casualidad o consecuencia de un error de cálculo de la reacción, como sostuvieron algunos. Se conquistó a través de un proceso unitario, en el cual la clase obrera desempeñó el papel dirigente. Fue producto de la unidad y de la lucha de amplias capas del pueblo durante muchos años, cuyas acciones adquirieron en las décadas del 50 y del 60 un gran ascenso.

En este período se consolidó la unidad de socialistas y comunistas, se formó la Central Unica de Trabajadores, bajo cuya orientación los trabajadores libraron grandes combates reivindicativos y políticos. Se desplegó con gran energía la lucha organizada de los campesinos por la tierra, de los pobladores urbanos por la vivienda. Los estudiantes y profesores desarrollan un pujante y combativo movimiento por la Reforma Universitaria y la juventud irrumpió con audacia y con formas nuevas en el combate, donde la tónica principal era la exigencia por los cambios revolucionarios. En esos años se ampliaron las libertades públicas, se democratizó la vida del país, maduró y se elevó la conciencia política de las grandes mayorías, en lo cual jugaron un papel relevante las dos grandes contiendas electorales: las elecciones presidenciales de 1958 y de 1964, ambas con Salvador Allende como abanderado de una coalición popular.

La justa política aplicada por nuestro Partido en las condiciones del gobierno demócratacristiano —que se sintetizaba en la consigna de unir a todas las fuerzas progresistas y democráticas que estaban en la oposición y en el gobierno contra las fuerzas reaccionarias existentes en el

gobierno y en la oposición— permitió hacer vivir su propia experiencia a amplias masas del pueblo que habían sido ilusionadas por las formulaciones reformistas de dicho gobierno y logró poner en el centro de la discusión los grandes problemas políticos y sociales que señalaban la necesidad de cambios de fondo. La recuperación de nuestras riquezas naturales, en especial de la gran minería del cobre, la reforma del derecho de propiedad, la liquidación del latifundio por medio de una profunda reforma agraria, la necesidad de abrir nuevas fuentes de trabajo, de romper la dependencia, de terminar con el atraso, encaminando a Chile por la senda de su desarrollo independiente y soberano, eran temas que se incorporaron a la discusión y preocupación de amplios sectores del país.

En síntesis, la convicción de que en Chile debían producirse profundos cambios económicos, sociales y políticos pasó a ser parte de la conciencia social de las grandes mayorías, las cuales se expresaban no sólo a través de los partidos que conformarían la Unidad Popular sino también englobaban a mayoritarios sectores demócratacristianos e independientes.

En medio de esa efervescencia surgió, a fines de 1969, el bloque político de la Unidad Popular. Su programa recogía los anhelos mayoritarios del país y ponía en el orden del día las profundas transformaciones que ya estaban maduras en la sociedad chilena.

En la creación de la Unidad Popular el papel principal lo jugó el Partido Comunista, el cual, con perseverancia y firmeza, supo caracterizar la etapa que se vivía, definir a los enemigos principales y concluir en la necesidad de una alianza amplia de fuerzas sociales que aislara a la reacción.

Al mismo tiempo hay que señalar que en la conformación de la Unidad Popular entregaron un aporte decisivo los partidos Socialista y Radical y los sectores que se desprendieron de la Democracia Cristiana, pasando a constituir el MAPU.

El triunfo popular del 4 de septiembre de 1970 fue ante todo una conquista de la clase obrera y de los sectores más avanzados del campesinado, en alianza con las fuerzas revolucionarias de la pequeña burguesía y con importantes sectores representativos de las capas medias urbanas. Para

continuar avanzando se requería fortalecer este proceso unitario, reforzando el carácter dirigente desempeñado por el proletariado, e incorporar, a él, a nuevas capas de la población.

Nuestra política de alianzas nació del estudio profundo de la realidad. En Chile, las contradicciones principales a resolver eran las originadas por la dominación del imperialismo, la oligarquía monopolista y los grandes dueños de la tierra en oposición absoluta con los intereses de la aplastante mayoría de la población. Por lo tanto, ante la clase obrera estaba planteado buscar el entendimiento (o a lo menos, en algunos casos, neutralizar) con todos los sectores nacionales que tenían contradicciones con la dominación del imperialismo y las oligarquías internas. Para lograrlo, las fuerzas populares chilenas contaban a su favor con la rica experiencia acumulada, la cual había alcanzado una fase superior precisamente con la conjunción de fuerzas sociales que habían hecho presidente a Salvador Allende, expresadas ideológicamente a través del pensamiento marxista, de posiciones cristianas y de tendencias racionalistas. Esta unidad se había desarrollado en gran medida buscando intensamente los puntos de convergencia, poniendo el acento en todo lo que unía frente a los enemigos y desarrollando fundamentalmente la acción entre las masas. En el curso de la campaña electoral se formaron casi 15.000 comités de base, dando lugar así a la organización de un gran contingente político, lo que constituía una fuerza potencial muy grande a favor de los cambios revolucionarios.

En suma, era necesario avanzar teniendo siempre presente la enseñanza leninista de que «sólo se puede vencer a un enemigo más poderoso empeñando los mayores esfuerzos y mediante la utilización más cuidadosa, prudente, minuciosa, diestra y *obligatoria* de cualquier "fisura", aun la más pequeña, entre los enemigos... y también aprovechando todas las posibilidades, aun las más pequeñas, de conquistar un aliado de masas, aunque ese aliado sea transitorio, inconsecuente, vacilante, poco seguro y condicional»[1].

UNA POLITICA UNITARIA que hiciese de la clase obrera «el centro y motor de los cambios revolucionarios» recla-

maba, antes que todo, fortalecer la unidad del propio proletariado y, luego, la del conjunto de los asalariados. Su unidad permitiría desarrollar una amplia convergencia nacional alrededor suyo. Políticamente esta alianza se basaba en la acción común de socialistas y comunistas. En el terreno sindical la Central Unica de Trabajadores (CUT) había agrupado bajo sus banderas a la gran mayoría de los destacamentos sindicales organizados. En el seno de los trabajadores era muy fuerte la influencia de las fuerzas revolucionarias. Lo ratificó la elección con votación directa efectuada en 1972 para elegir su directiva, que dio un amplio respaldo a los dirigentes sindicales comunistas (32,5 %) y a la vez mostró la fuerte presencia en el movimiento sindical del Partido Socialista (26 %). La Unidad Popular en su conjunto, si se agregan los sufragios recibidos por el Partido Radical (4,7 %) y el MAPU (4,1 %) obtuvo más de las dos terceras partes de las preferencias totales. La votación demostró, además, que existía una influencia importante entre los trabajadores de la Democracia Cristiana (25,9 %).

Igualmente se evidenció que si bien el proceso de organización había experimentado un fuerte impulso, permanecía un número significativo de obreros y empleados desorganizado. Hecho que no es raro si consideramos que en el país hay un número apreciable de pequeñas industrias y talleres artesanales en los cuales trabajaban, según estadísticas confeccionadas en los años 1967 y 1968, un 39 % de la fuerza de trabajo de toda la industria. De otra parte, influía el rápido incremento que se venía produciendo en el número de asalariados, que lógicamente provenían de otras capas sociales, muchos de ellos del campesinado, o eran jóvenes recién incorporados a la vida productiva. En sólo 5 años, entre 1966 y 1971, la fuerza de trabajo del país creció en un 16 %. Ambos hechos indicaban la necesidad de reforzar la alianza en el seno del movimiento sindical, así como que era preciso realizar constantemente una labor de formación clasista en los nuevos sectores que llegaban al proletariado.

Ganar a la gran mayoría de los trabajadores para el proceso de transformaciones que tenía lugar no era tarea fácil. En su interior se dieron no pocas posiciones erróneas. En el plano económico, por ejemplo, las debilidades de la política de la Unidad Popular permitieron que tomaran

auge, entre otras, tendencias al aumento de los gastos improductivos desligados de las posibilidades reales del país. La conformación de una política de precios estática chocó con el reivindicacionismo, el cual, en no pocas oportunidades quebró los niveles de mejoramiento salarial programados por el Gobierno Popular y la organización sindical. Tenemos que para 1971 de un margen promedio programado del 40 %, que superaba el alza experimentada por los precios, se llegó a un reajuste general promedio por sobre el 50 % de los salarios. No pocas empresas no respetaron la política salarial decidida y entregaron reajustes por encima del 100, el 200 % e incluso el 500 %. Nuestras debilidades en este plano, como era de esperar, fueron aprovechadas y estimuladas por la reacción en el marco de su política de desestabilización. Sectores que se habían opuesto siempre a las reivindicaciones de los trabajadores pasaban a ser decididos defensores de los petitorios más exagerados.

Evidentemente, en ello influyó, además, que sectores del movimiento sindical que apoyaban al gobierno no supieron comprender el cambio cualitativo que se había producido en la situación y continuaron actuando en función de sus viejas banderas reivindicacionistas, sacando partido de la audiencia que tenían ahora las demandas de los trabajadores en la dirección del país, así como del debilitamiento que tuvo lugar en la antigua dictadura patronal.

La experiencia indica que las exigencias por mejoramientos económicos y otras reivindicaciones específicas, que son habitualmente una expresión de lucha de los trabajadores contra las clases dominantes, pueden ser también utilizadas por éstas, si los obreros y empleados pierden la visión de la situación de conjunto en los momentos que se genera un Gobierno Popular.

Lo acontecido revela, además, la convergencia objetiva que puede producirse en estos casos entre el oportunismo de derecha y el de «izquierda». Fenómeno, a nuestro entender, de ninguna manera casual, y que constituye un elemento característico que tiende a expresarse en muchos períodos críticos.

La competencia entre la ultraizquierda y corrientes de derecha, en el seno del movimiento obrero, y fuera de él, por levantar las consignas más extremas, permitió compro-

bar una vez más la obligación de librar una lucha decidida contra el oportunismo.

Nuestra experiencia indica que esta batalla en contra del oportunismo no debilita la acción común y la cohesión de los trabajadores, sino que es condición necesaria para alcanzarla, para que los destacamentos influidos por estas tendencias se incorporen al movimiento unitario. Los planes de los sectores golpistas consideraron siempre utilizar para sus fines estas corrientes oportunistas y en particular las movilizaron en cantidad significativa en apoyo de los paros patronales de octubre de 1972 y julio–agosto de 1973. La base de acción para estas tendencias provenía de las propias características ya reseñadas de la estructura de los asalariados chilenos, de la existencia en ella de núcleos desorganizados y despolitizados, de las nuevas capas que se incorporaban a sus filas con su carga ideológica propia, como de insuficiencias en la acción de las fuerzas revolucionarias en el seno de los trabajadores. El oportunismo de derecha y el ultraizquierdismo alcanzaron un cierto apoyo de masas, que siendo minoritario, no dejaba de tener su importancia.

EL PROCESO REVOLUCIONARIO REQUERIA, PARA FORTALECERSE, junto con la constante lucha ideológica contra las influencias extrañas a la clase obrera, desarrollar la más amplia participación de todos los trabajadores en la marcha de la economía, de la administración pública y de todos los sectores sociales. Nuestro Partido planteó, en estas circunstancias, en forma reiterada, la política de la clase obrera en el proceso de transformación en la economía de Chile. Estimamos que es útil al respecto tener en consideración el planteamiento concreto formulado por el Partido Comunista y los propios términos en que se hizo. «La batalla de la producción no es tal sin planes concretos, metas precisas y una auténtica participación de los trabajadores. Cuando hablamos de planes, no nos referimos a los cálculos de supuestos y la formulación de previsiones en los términos acostumbrados en las condiciones del capitalismo. Proponemos planes que comprendan tareas determinadas, cuantificadas en forma estricta, respecto de la producción, la comercialización, las inversiones, las finanzas, la mano de obra, la productividad del trabajo, el promedio de remu-

neraciones, las exportaciones, las importaciones, las medidas de alcances sociales y culturales y la destinación de los excedentes. Sin planes de esa especie, no se puede concebir una estabilización que promueva el aumento de la productividad y asegure la rentabilidad de las empresas del área social. Formular y cumplir estos planes no puede concebirse como algo burocrático, sino como un proceso de elaboración en que los índices orientadores, preparados con criterio científico, sean la base para decisiones adoptadas con la más amplia participación de los trabajadores y distribuidas sección por sección y mes a mes, de modo que las tareas sean comprensibles para todo obrero y técnico y se fiscalicen por ellos mismos. Los Consejos de Administración debieran rendir cuentas mensuales a las asambleas de los trabajadores sobre la marcha de los planes. En lugar de la antigua dictadura de los patrones en las fábricas y del sistema consiguiente de pliegos de peticiones, hay que abrir paso en el área social y mixta a convenios democráticos de planes de producción y de remuneraciones en que participen los sindicatos como expresión de la clase obrera en su nuevo papel de fuerza dirigente del país, con responsabilidad revolucionaria y patriótica.»[2]

Esta política no sólo fue expuesta sino que se realizó una gran lucha por implementarla prácticamente. Son decidores, por ejemplo los éxitos que se alcanzaron en Yarur, en Textil Progreso y en otras fábricas. En estas empresas, al igual que en Madeco, Socora, Inmar, etc., se observó una correcta dirección administrativa enmarcada en las orientaciones generales entregadas por el gobierno, a la vez que la participación de los trabajadores se transformó en un hecho real que ayudó a elevar el nivel de organización de los procesos productivos y por ende los rendimientos. Merecen también destacarse los esfuerzos que se hicieron en la organización de los parques de maquinarias, en la planificación de la producción y los estímulos materiales, a tráves de los convenios producción –salarios– costos, en la programación del uso de divisas en las empresas industriales del sector social y mixto, etc., etc.

En la incorporación del pueblo al proceso de dirección nacional el Gobierno de Salvador Allende dio pasos históricos, si se mira bajo el prisma de la situación existente en Chile antes y después de su administración, pero, limitados,

desde el ángulo de las transformaciones en curso. Se logró la incorporación real de los trabajadores a la gestión directiva en varias empresas, se crearon canales nuevos de distribución popular, las organizaciones sindicales entregaron su opinión, y fueron consideradas, en la resolución de grandes problemas nacionales. Esto era decisivo no sólo en relación con la marcha del país, sino que también en el desarrollo de la conciencia de los trabajadores y en la creación de nuevas formas de disciplina en el trabajo en momentos que se derrumbaba la existencia de una disciplina acorde a los patrones de la explotación capitalista. Los principales éxitos en la gestión del Gobierno se alcanzaron en aquellas empresas en las cuales los trabajadores pasaron a asumir responsabilidades importantes. Donde no se alcanzaba este nivel, surgían habitualmente manifestaciones de anarquía que deterioraban la producción y, más grave todavía, la imagen del Gobierno, no permitiendo aprovechar en beneficio del pueblo las ventajas que provenían de los cambios estructurales que tenían lugar. La creación de canales de participación popular al margen de los sindicatos debilitó este proceso y acentuó la deformación que surgió en algunos sectores de ver a las organizaciones permanentes de los trabajadores tan sólo como un mecanismo reivindicativo.

Frente a hechos como los señalados que debilitaban la presencia de la clase obrera y del conjunto de los asalariados, se desarrollaron muchas otras tendencias que fortalecían su cohesión y acrecentaban su capacidad de movilización. La experiencia chilena ratificó la deducción ya realizada en otros procesos de cambios revolucionarios sobre la velocidad con que en ellos puede desarrollarse la conciencia del pueblo. La clase obrera fue decisiva en varios momentos muy agudos para el Gobierno. Por ejemplo, respondió a la huelga patronal de octubre de 1972, que trató de imponer la paralización de todas las empresas, con una ocupación masiva de ellas y su puesta rápidamente en funcionamiento. Así, incluso, a pesar de las dificultades, ante el movimiento revolucionario se abrían nuevas perspectivas. Estos hechos dejaron muy claro ante los trabajadores que existía la posibilidad real de dirigir directamente la producción. Igualmente la constitución del Area de Propiedad Social fue una gran acción de masas de los trabaja-

dores. Los pocos casos de empresas consideradas para ser incorporadas al Area de Propiedad Social en cambio, en que ello no fue posible, se debió por lo general a que no se dieron las condiciones para avanzar con los trabajadores de ellas. En el caso de los trabajadores industriales la participación adquirió formas más claras en las empresas estatizadas, pero no se fue capaz de buscar formas adecuadas que la impulsasen en el sector privado, a pesar que se desarrollaron algunos Comités de Vigilancia de la Producción, para evitar acciones contrarias al interés nacional de parte de los empresarios.

El elemento más importante que facilitaba la cohesión lo daba el entendimiento entre socialistas y comunistas y la acción del conjunto de la UP. La falta de dirección común, por el contrario, debilitaba la capacidad de acción de los trabajadores y facilitaba la proliferación de tendencias extrañas al movimiento obrero.

LA CLASE OBRERA, PARA DESEMPEÑAR SU ROL de centro y motor de los cambios revolucionarios, no sólo debía ser portavoz de sus propios intereses como clase, sino que, al mismo tiempo, debía hacer suyos los de las clases y capas que era necesario agrupar. Ello exigía, en primer término, fortalecer la alianza obrero-campesina, teniendo en cuenta claramente el nivel insuficiente en que ella se encontraba, a pesar del fuerte ascenso que en la organización y en la lucha del agro se había producido durante la década de los años sesenta. Los cambios producidos habían sido sumamente significativos. En 1960 sólo se registraron 3 huelgas en el campo, de obreros agrícolas, las cuales crecieron a 39 en 1964 y a 693 en 1967, para alcanzar a 1.580 en 1970. Los sectores más avanzados del agro, aprobada la ley de Reforma Agraria, comprendieron que este proceso se daría con mayor o menor fuerza en la medida que se lograse desplegar su propia lucha. En 1970, principalmente en acciones que tenían como bandera la aplicación de la Reforma Agraria, fueron ocupados por sus trabajadores 368 fundos.

La organización en el campo de la misma manera experimentó un gran salto. Los integrantes de Confederaciones Sindicales Campesinas pasaron de 103.664 en 1969 a 277.895 en 1972, creciendo en particular el número de afi-

liados a la organización que era dirigida por comunistas y socialistas. En las elecciones parlamentarias en 1973 las fuerzas de la Unidad Popular, y particularmente los comunistas, alcanzaron, como fruto de este proceso, un gran ascenso en las zonas rurales. Sin duda que la alianza entre obreros y campesinos dio en los años del Gobierno de la Unidad Popular, así como durante la administración de Frei al iniciarse el proceso de Reforma Agraria, un gran salto, al mismo tiempo que se incrementó la presencia de la población rural en toda la vida nacional. En el curso, especialmente, de 1973, el Gobierno y sobre todo el Partido Comunista adoptaron muchas medidas concretas de ayuda al campo. La lucha por la realización plena de la Reforma Agraria pasó, de una bandera dirigida contra los latifundistas, a ser una transformación que incidía en todo el proceso de desarrollo democrático. El latifundio era un freno en el agro y en el conjunto del desenvolvimiento nacional.

Con todo, a pesar de la magnitud de estos avances, cuya huella se dejará sentir necesariamente en el futuro, la política realizada por el Gobierno Popular hacia el campo fue insuficiente. Lo cierto fue que en la práctica, en oposición a las formulaciones programáticas, no se actuó teniendo presente a todas las capas del agro que se debía considerar. Los principales beneficiados con la Reforma Agraria fueron los obreros agrícolas y capas semiproletarias, hecho sin duda positivo, pero, junto con ellos, debieron haber recibido sus beneficios los pequeños campesinos y las capas con más tierra entre los semiproletarios. Se requería tener presente al conjunto de sectores que en el campo debían ser beneficiados por la Reforma Agraria y que, por lo tanto, podían llegar a identificarse con la política del Gobierno Popular. «Hay más de 200.000 propiedades de menos de 40 hectáreas básicas —se dijo en el informe rendido en agosto de 1972 por Luis Corvalán ante el Pleno del CC reunido para considerar los problemas del agro—, centenares de miles de esforzados chilenos viven en ellas. No podemos abastecer al país si prescindimos de su producción. El Gobierno Popular ha ampliado su ayuda crediticia hacia ellos, pero es insuficiente. Es preciso ayudar en su organización en cooperativas, otorgarles créditos, ampliar en forma efectiva los poderes de compra y sobre todo establecer en los hechos la seguridad de tenencia de la tierra. Los

pequeños y medianos agricultores deben convertirse en aliados del proceso histórico que vive Chile y es contrarrevolucionario quien en su torpe acción, los empuja al otro lado.»[3]

El balance que se puede hacer ahora demuestra que estas insuficiencias no fueron, ni mucho menos, completamente eliminadas. Este cuadro se agravaba por el clima de inestabilidad que se desarrolló entre muchos propietarios por algunas acciones de tomas de tierra que no debían ser alcanzadas por la Reforma Agraria impulsadas por la ultraizquierda, lo cual fue aprovechado por la reacción en su propaganda. La respuesta del Gobierno a estas acciones no fue siempre la adecuada.

En el proceso de Reforma Agraria chileno muchas veces se actuó sin tener en cuenta la opinión de los campesinos, intentando imponerles formas de organización por arriba, algunas de las cuales pretendían dar saltos para los cuales no había condiciones en el proceso de cooperativización agrícola. Ello tuvo consecuencias negativas en lo político y en lo económico. En agosto del 72 el Partido Comunista mostró claramente la situación existente en materia de formas de explotación: «De los antecedentes recogidos en el terreno mismo se pueden sacar algunas conclusiones. Ni los asentamientos establecidos por la Democracia Cristiana, ni los CERAS creados bajo el actual Gobierno, satisfacen integralmente a los campesinos... Nos parece fundamental y urgente revisar todas estas formas orgánicas y tener indispensablemente en cuenta la opinión e interés de los campesinos, única manera de contar con ellos para el cumplimiento de las grandes tareas que tenemos en el campo.»[4]

Fue un problema éste que tampoco se alcanzó a resolver adecuadamente. De otra parte, otra debilidad residió en concentrar toda la atención acerca de nuevas formas de organización de la producción y de propiedad sólo en el sector reformado, no buscando de manera adecuada, como lo señalaba el Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, de estimular la organización de formas de explotación cooperativa entre los pequeños propietarios. Estas insuficiencias crearon el campo de agitación necesaria para que algunas acciones de la ultraizquierda reflejasen problemas reales que afectaban a capas en el campo, aunque la solución buscada fuese descabellada. El «hambre de

tierra» que alcanza a una población importante del agro reclama buscar nuevas formas para encarar el proceso de Reforma Agraria que tengan en cuenta este conjunto de necesidades.

EN CHILE, COMO EN VARIOS OTROS PAISES DE AMERICA LATINA, ha ido adquiriendo una importancia creciente en la política de alianza de la clase obrera su entendimiento con las capas medias urbanas, por su peso numérico, y más todavía por el rol creciente que desempeñan en la vida política del país.

La población urbana en Chile ha venido aumentando constantemente a costa de la rural. En 1970 la población activa agrícola era de sólo 23,9 %. Desde el punto de vista del número en la estructura de la población las capas medias ocupan el segundo lugar después del proletariado. Su composición, sin embargo, es particularmente heterogénea y está constituida por capas medias producto de las formas precapitalistas de producción y de capas medias desarrolladas bajo el modo de producción capitalista.

Entre los sectores de las viejas capas medias se encuentra el artesanado y una parte de la pequeña industria. En 1968 el 94 % del total de los establecimientos industriales del país eran talleres artesanales o pequeñas industrias, contabilizando como tales a las unidades con hasta 49 trabajadores. Estos sectores sufrían la explotación de los grupos monopólicos y de la oligarquía financiera. Las transformaciones impulsadas por la Unidad Popular los liberaban de dicha explotación y, por lo tanto, ellas debían ser recibidas por estos sectores con simpatía o a lo menos con neutralidad. Todas las primeras acciones para producir cambios estructurales se dieron en condiciones de existencia de una correlación de fuerzas favorable. Para que esta situación se consolidase se requería que el Area de Propiedad Social en desarrollo no sólo se transformase en el sector de la economía más dinámico, sino que además estableciese relaciones de nuevo tipo con las empresas del sector privado con las cuales cada una de ellas tenía vinculaciones, más todavía cuando muchas empresas pasaban a ser dependientes de sus abastecimientos de materias primas.

Los pequeños, así como los medianos empresarios, elevaron sus niveles de ingresos pero en condiciones tales

7*

que no apreciaron este resultado como una consecuencia de los cambios producidos en el país; por el contrario, fueron ganados en muchos casos para las actividades especulativas y de mercado negro fomentadas en los marcos de los planes desestabilizadores y vieron las limitaciones que se les pusieron para ello como una demostración de disminución en sus «libertades». La experiencia chilena corroboró la caracterización leninista sobre la inestabilidad de estos sectores, que vacilan entre sus deseos de liberarse de las amarras que les impone el gran capital y su temor a los procesos de transformaciones revolucionarias.

En nuestro país las fuerzas progresistas no fueron capaces, a pesar de todas las posibilidades que crearon para el desarrollo y funcionamiento de la pequeña industria y el artesanado, de mostrar que sus logros eran un producto de las transformaciones en curso, así como no supieron crear relaciones estables de nuevo tipo entre el Estado y el área social de la economía y los empresarios privados. A esta incomprensión contribuyeron, además, excesos que se produjeron en la formación del Area de Propiedad Social. Un porcentaje importante de la pequeña burguesía y de los artesanos fueron arrastrados a los paros patronales realizados para crear condiciones para el golpe, siendo ganados por las consignas de «defensa de la propiedad» y de las «libertades», levantadas por la reacción demagógicamente. El régimen fascista, con su liquidación masiva de pequeños, medianos e incluso grandes empresarios no monopólicos, ha dejado al descubierto nítidamente que los intereses reales de estos sectores estaban verdaderamente protegidos durante el Gobierno Popular y no ahora.

En Chile, son las nuevas capas medias urbanas las que se encuentran en desarrollo y desempeñan un rol político más activo. Igualmente tienen una importancia creciente sectores como los estudiantes, los profesionales, los intelectuales y la parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, que se pueden ubicar en este sector.

Históricamente se había venido desarrollando una fuerte alianza entre la clase obrera y el estudiantado, relaciones que se profundizaron durante el Gobierno Popular. Las formas de apoyo del movimiento estudiantil al Gobierno Popular fueron múltiples, pero en medio de un proceso complejo en el cual a la vez se hacían más y más belige-

rantes los grupos estudiantiles que apoyaban a las fuerzas de oposición. Entre parte muy importante de la intelectualidad, igualmente, las ideas progresistas eran dominantes. Su aporte creador se materializó en este período de múltiples maneras. No era igual la situación en las organizaciones de profesionales: varias de ellas pasaron a ser instrumentos de los grupos más reaccionarios. En el seno de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, por su parte, existía una corriente democrática que fue perdiendo terreno en la medida que se deterioraba la situación general y no se profundizaba en las relaciones de unidad entre ellas y las fuerzas que apoyaban al Gobierno.

La lucha por determinar una correlación de fuerzas favorable para las fuerzas revolucionarias o para las contrarrevolucionarias, en parte importante, se concentró en la disputa por ganarse a los sectores medios. En el cumplimiento de este objetivo, la clase obrera no fue capaz de tomar con fuerza las reivindicaciones de estos sectores, ni de aprovechar adecuadamente las posiciones ganadas en el gobierno del país.

La experiencia prueba que para resolver estas insuficiencias era determinante no perder de vista el carácter de las transformaciones que tenían lugar en Chile, propias de la revolución democrática, no pretender saltarse etapas y ver detenidamente el aporte que los sectores afectados por las contradicciones dominantes en el país podían realizar, analizando cuidadosamente como se continuaba con la mayor parte de ellos hacia etapas superiores.

UNA ACERTADA POLITICA DE ALIANZAS exigía buscar formas de entendimiento con el PDC, partido pluriclasista con fuertes posiciones entre las capas medias y una influencia no despreciable entre sectores de asalariados, partido con el cual se había contado para la ratificación de Salvador Allende como Presidente de la República por parte del Congreso Pleno, así como para la nacionalización del cobre que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.

Desde el punto de vista del Gobierno Popular, el entendimiento con el Partido Demócratacristiano implicaba llegar a compromisos, para lo cual se hicieron esfuerzos que no se concretaron, por la oposición que se produjo al interior de dicho partido como en la Unidad Popular, proveniente,

de un lado, de sectores burgueses y pequeñoburgueses que colocaron en primer plano su temor al desarrollo de las posiciones del proletariado y del otro de sectores de izquierda que concibieron cualquier compromiso como un retroceso a partir de una falsa concepción de que estaba planteado intensificar las medidas de tipo socialista, sin que existiesen condiciones políticas ni económicas para ello. Oposiciones, por lo demás, enteramente previsibles y que sólo podrían haber sido vencidas con una activa y paciente labor entre las masas.

En Chile, como lo demostró la vida, alcanzar este entendimiento era un camino que permitía avanzar. El éxito del trabajo tendiente a conformar un gran frente de fuerzas democráticas dependía en no poca medida también de la amplitud con que actuasen las fuerzas no integrantes de la Unidad Popular que debían participar en él y de las tendencias que se desarrollan en el seno de las masas, incluidos, desde luego, los militantes demócratacristianos. La dirección del Partido, constatando las posibilidades y necesidad de acciones comunes con el PDC, ha señalado:

«Hay sin duda, muchas cosas que ayer y hoy nos separaron y nos separan a marxistas y demócratacristianos pero tenemos intereses comunes y de la historia de nuestra patria surge una lección clara: cada vez que logramos desarrollar la acción común y hacer prevalecer la unidad en lo esencial, se produjeron avances concretos de beneficio popular y nacional.

Esta es una cara de la medalla. Hay otra, porque el PDC es un partido pluriclasista y pesan en su seno intereses muchas veces contrapuestos. Y entonces, por el contrario, cuando en la dirección del PDC han logrado imperar fuerzas sectarias vinculadas a los monopolios, que han encontrado inestimable ayuda en manifestaciones de sectarismo que han aflorado en la izquierda, se ha impuesto la división y hasta el enfrentamiento, y de ello han sacado dividendos los intereses y privilegios reaccionarios.»[5]

El planteamiento del Partido Comunista, como se ve por las palabras arriba señaladas, con claridad indica que es imprescindible la lucha por la unidad con todas las fuerzas antifascistas, y a la vez constatan la particular importancia que tiene, en el éxito de esta actividad, la lucha ideológica en contra de las manifestaciones que dificultan o se oponen

al proceso unitario. La lucha por la unidad, en la cual el PC juega un papel sustancial, debe encaminarse, por ello, sin renunciar a la lucha ideológica, tras el objetivo central de propiciar un acercamiento de posiciones, buscando reforzar y extender así las posibilidades de la alianza.

Las diferencias que existen entre el Partido Demócrata-cristiano y la Unidad Popular, no tienen porqué adquirir un carácter antagónico, mucho menos todavía si se tiene en cuenta la composición de clase de aquel Partido. La oposición de izquierda a que la clase obrera desarrollase esta política unitaria se hacía, en parte, señalando que ello conduciría a que renunciase a su papel hegemónico y no actuase con independencia, planteándose así una contradicción inexistente. El rol hegemónico, por lo demás, sólo es posible que la clase obrera lo alcance desarrollando el entendimiento con otras clases y capas y no como resultado de ningún decreto, sino en la medida que despliegue su acción y haga suyos los intereses de estas clases y capas. Lo anterior no sólo no es contradictorio, sino que exige la labor independiente del partido proletario. En el interior de la alianza se produce necesariamente una relación de unidad y de lucha. Hecho que se acentúa cuando lo que se trata de realizar es una unión de fuerzas muy amplia.

El fortalecimiento del Partido Comunista, la extensión de su influencia, así como la amplia divulgación del marxismo-leninismo, constituyen tareas a resolver para asegurar el fortalecimiento y ampliación de la alianza. La importancia de ello no proviene de ningún criterio sectario ni excluyente, ni se encuentra en oposición al crecimiento que experimenten otros partidos del frente unitario. El fortalecimiento de los comunistas no es un fin egoísta, sino una necesidad objetiva del movimiento social. El desarrollo de la unidad tiene, por lo tanto, una relación directa con la mayor influencia de los comunistas, debido a que no sólo su política e ideología, sino también la fuerza de su organización, le permiten contar con aliados.

Esto refuerza la necesidad de que el partido del proletariado mantenga dentro del frente común su independencia de clase y busque extender la influencia de su ideología. Para lo cual es necesario, como lo ratifica el período que analizamos, actuar teniendo siempre presente el papel a desempeñar por las masas, diciendo toda la verdad a los

trabajadores y al pueblo, creando las condiciones para que éste resuelva las dificultades y vaya abriendo paso a las soluciones correctas. Es lo que nos deja nuestra propia experiencia. La designación de un candidato de las fuerzas populares en 1970, la elaboración de un programa unitario, la determinación de las normas básicas de funcionamiento del Gobierno Popular, se resolvieron con la activa participación popular. Su presencia fue decisiva para vencer las dificultades que se fueron presentando. En cambio, no siempre, durante el Gobierno Popular en los hechos se actuó igual. Varios de los debates decisivos para asegurar una adecuada conducción del proceso se quedaron sólo en las «alturas» o en un marco muy restringido. Ello trabó la posibilidad de resolver las dificultades que nacían de la carencia de una dirección única, hecho que se manifestó en más de una oportunidad en posiciones discrepantes y anárquicas que conducían, a veces, al Gobierno incluso a la inacción. Las oportunidades en que se recurrió a las masas, éstas desplegaron una gran capacidad movilizadora.

La unidad se abre paso, principalmente, por la fuerza de la acción de las masas. Esto no quiere decir, es claro, que no se preste, al mismo tiempo, toda la atención debida al trabajo entre los medios dirigentes, sin hacer una oposición artificial entre lo uno y lo otro.

DE LO EXPUESTO, a manera de conclusión, se puede señalar, que uno de los grandes problemas del proceso revolucionario chileno fue que no se lograra asentar sólidamente una dirección revolucionaria homogénea, pero, a la vez, los éxitos que se alcanzaron están vinculados en gran medida a los momentos en que se expresó dicha dirección. Por el carácter del proceso, el papel fundamental en la implementación y desarrollo de una dirección revolucionaria le correspondió a la clase obrera y en la medida en que se contravino tal papel se dio paso a la acción del enemigo.

También quedó claro que mientras se ahondaba la situación revolucionaria y se agudizaba la intensa disputa por el poder aumentaba el papel a desempeñar por el Partido.

Los aciertos y las debilidades del proceso revolucionario chileno los comunistas no podemos menos que examinarlos

en forma autocrítica, para sacar las debidas enseñanzas, condición necesaria para transformar la derrota de ayer en victoria del mañana.

1 V. I. Lenin. *Obras Completas,* 2ª ed., Buenos Aires, Cartago, t. XXXIII, pág. 176.

2 O. Millas. «La clase obrera en el Gobierno Popular», *Cuadernillo de Propaganda,* n.º 4, pág. 14–15.

3 *Boletin informativo del CC del PC de Chile,* Santiago–Chile, n.º 8, 1972, pág. 37.

4 Ibid., pág. 33.

5 *¡Desde Chile hablan los comunistas!,* Ediciones Colo-Colo, 1976, pág. 145.

# EL PROBLEMA DE LA DEFENSA DEL PODER POPULAR

**Pedro RODRIGUEZ,**
miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Chile

LA EXPERIENCIA DE LO OCURRIDO EN CHILE con el Gobierno Popular de Salvador Allende pone en nuevo plano de discusión e investigación teórica un aspecto fundamental de la cuestión del poder —problema crucial de toda revolución— como es su defensa y conservación. Es preciso delimitar y evaluar cuidadosamente el carácter del marco histórico-político dentro del cual nuestra experiencia revolucionaria de gobierno aporta, con sus méritos y errores, a configurar determinadas lecciones en relación al problema del poder, a saber: la irrupción de una cuota de poder popular revolucionario que se configura como Gobierno por medio de la conquista de la parte correspondiente del *Estado*; cuota de poder que es plenamente capaz de *unir* su actividad estatal con la continuación de la actividad revolucionaria de las masas a fin de dar inicio a las transformaciones radicales y plantearse, en un momento determinado, como una posibilidad real e inmediata el ejercicio del poder por las fuerzas democrático-revolucionarias, y avanzar en una perspectiva socialista.

En la pasada experiencia de Chile, se manifestaron, desarrolladamente unos y en forma embrionaria otros, todos los problemas de la teoría marxista-leninista referentes a la resolución del Poder y a su conservación, así como las cuestiones relativas a la dialéctica entre la utilización de la fuerza material del poder y su combinación con las cuestiones de la democracia; la dialéctica entre las tareas democrático-populares y los objetivos socialistas; la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo; entre las «peculiaridades nacionales» y las leyes generales de la revolución; entre lo nacional y lo internacional; etc., problemas todos que exi-

gen una profunda y seria meditación por parte de los comunistas y demás revolucionarios.

LA EXPERIENCIA DE LO QUE FUE NUESTRO PROCESO indica enfáticamente que más allá de las formas de acceso al Poder, en una y otra de las llamadas vías operan las mismas leyes generales que regulan el paso de la vieja sociedad a la nueva que la reemplaza. Asimismo, más allá de la continuidad evolutiva de la vieja forma que acompaña durante cierto tiempo al nuevo contenido que tiende a desarrollarse, la mutación de la vieja forma social necesariamente debe producirse. Pero ello no se da de manera automática.

Hablar de una parte de Poder en manos de la clase obrera y sus aliados cuando se ha ganado el Ejecutivo no puede sino entenderse como aquella peculiar paradoja de que por primera vez el movimiento popular está en condiciones de centralizar parte de su propia fuerza de clases también, *ahora, con ayuda de una parte* de la vieja máquina del Estado. Lo ocurrido en Chile durante los años 1970–1973 demostró que tal paradoja es posible. Pero la nueva fuerza, para ser real y efectiva, también necesita nuevos recursos y métodos, de un nuevo aparato de Estado para dar *destino* a esa parte de la fuerza centralizada.

El proletariado como fuerza de vanguardia no puede quedarse a medio camino, postergar aquello, y debe obligatoriamente extender toda su fuerza de clase y del movimiento popular al control del aparataje necesario para defender, conservar y hacer efectivo el ejercicio pleno y real del Poder. En caso contrario la efectividad de las transformaciones que se produzcan será limitada. En Chile, al haberse ganado sólo el Ejecutivo, se dependía del poder que, a su vez, la burguesía ejercía sobre el resto del aparataje del Estado, el que mayoritariamente quedó en sus manos (Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Contralor, y sus pilares fundamentales, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación de masas). Esta situación evidencia, además, que la contradicción antagónica ha llegado a un punto en extremo peligroso –y eventualmente catastrófico– para los intereses de los monopolios y el imperialismo que ya no pueden detener a través de sus viejos recursos, de la vieja institucionalidad democrático-burguesa y por medio

de los métodos clásicos de la política, a un movimiento popular en avance y en posesión de un programa revolucionario, resuelto a llevarlo a cabo. Son la propia gran burguesía del país y el imperialismo los que se encargan de lanzar por los aires la *vieja forma* que ya no sirve a sus designios estratégicos de clase. Esto en Chile se demostró en toda su plenitud.

El Gobierno Popular se constituye en la conquista más importante del movimiento popular y en torno al cual se desarrolla la actividad más dinámica de las masas, en torno a su defensa y en las perspectivas de las transformaciones revolucionarias. Se configura así como uno de los factores decisivos del desarrollo de la situación revolucionaria y de la generación de las condiciones sociales y políticas que permitan plantearse un Poder Popular. Es la palanca más importante de las transformaciones radicales de la economía, del desarrollo efectivo de la democracia, del ensanchamiento de la alianza popular y del incremento de la organización y conciencia revolucionaria del pueblo.

La propia dinámica de la lucha del proletariado y del Gobierno Popular por llevar a cabo las transformaciones revolucionarias de la sociedad y la lucha de la gran burguesía y del imperialismo por detener a toda costa la revolución y restaurarse plenamente en el Poder, es lo que en definitiva pone a la orden del día la transformación radical de esa cuota de Poder Estatal en manos del pueblo, en un Estado de nuevo tipo, democrático y popular. En suma, la conservación del Poder del Gobierno Popular no puede significar otra cosa que el que la dirección revolucionaria plantee la tarea, de las fuerzas democráticas y revolucionarias, de llevar adelante el proceso.

En las situaciones en que el movimiento popular dispone sólo del Gobierno, el paso adelante puede asumir diversas fases, entre las que es preciso destacar; aquella durante la cual la clase obrera y sus aliados irrumpen con una cuota de Poder Estatal en una parte del Estado y configuran un Gobierno; otra fase durante la cual el Gobierno Popular ejerce su poder sin llegar a la ruptura con las partes del Estado en manos de la gran burguesía y sin llegar a romper el juego de la institucionalidad democrático-burguesa. Es la fase de las primeras realizaciones democráticas y en que, más allá del auge de las masas y la paralogización

momentánea de la reacción, toda la situación político-social aparece apresada por la legitimidad institucional que se vive y que la hizo posible. En Chile hubo una fase siguiente, particularmente aguda y explosiva: la fase de los progresivos choques y colisiones abiertas entre los Poderes del Estado en manos de la reacción y la parte de ese Estado en manos del Poder Popular. El entrelazamiento evidente de dos dictaduras en pugna (la del movimiento popular en estado embrionario) en el seno del Estado tiende a rebasar su marco progresivamente, al grado de que en un momento el movimiento popular, a fin de conservarse y llevar a cabo los cambios iniciados, se trasmuta y se constituye en centro por sí mismo, de la actividad estatal de las masas revolucionarias, «es decir, un poder directamente basado en la toma revolucionaria del poder, en la iniciativa directa del pueblo desde abajo, *y no en una ley* promulgada por un poder político centralizado»[1].

Por último, resulta evidente que a esta fase le sucede aquella dentro de la cual el Poder Popular, con la combinación de su propia actividad estatal y la acción de la mayoría del pueblo se propone la construcción del nuevo Estado democrático. No hay duda de que entre esta fase y la anterior pueden mediar meses, pero también, incluso, horas, y en esta situación darse una casi simultaneidad entre las tareas de una y otra fase. La experiencia de la Unidad Popular no supo resolver estas tareas de forma exitosa. «*Concretamente, el enemigo hizo lo suyo y nosotros no hicimos lo nuestro.*»[2]

Cada fase hacia el poder tiene su momento político muy determinado, una correlación de fuerzas y un grado muy preciso de desarrollo de la situación revolucionaria que madura sobre ella. A la luz de los análisis actuales, nos resulta evidente que las fases señaladas pudieron condensarse en Chile preferentemente durante la primera mitad del año 1971, época de auge relevante de la lucha de las masas, de dificultad objetiva del imperialismo y de la gran burguesía chilena para unirse y responder en el plano de las acciones abiertas y de masas a la revolución, de neutralización a favor del Gobierno Popular de importantes sectores medios y de una evidente correlación de fuerzas en América Latina favorables a la democracia y al progreso social.

De esos momentos hubo no pocos en Chile (paro de octubre de 1972, «tancazo» de junio de 1973, etc.), pero cada vez más explosivos e inseguros para la revolución. Nuestra experiencia es indicativa de que el Partido de vanguardia debe saber prever esos momentos, esos cuartos de hora en que el éxito de la revolución, como dicen los compañeros vietnamitas, se asemeja a una tonelada colgando de un pelo, preverlos en general, antes incluso de configurarse el movimiento popular en una cuota de Poder Estatal, elegir los mejores en donde el enemigo está más debilitado, más necesitado de tregua para reponer sus fuerzas paralogizadas momentáneamente por el triunfo popular, más incapacitado por sus divisiones internas para oponer un solo frente contrarrevolucionario y planificar sus acciones de clase, «*ese momento de viraje* en la historia de la revolución en ascenso, en que la actividad de la vanguardia del pueblo está en su apogeo, en que son mayores las *vacilaciones* en las filas del enemigo y *en las filas de los débiles, fríos indecisos amigos de la revolución*»[3].

Es la resolución de esta serie ininterrumpida de tareas y medidas lo que permite no perder las posiciones conquistadas, asegurar el Poder de la alianza de las fuerzas progresistas, abriéndose en rigor, sólo bajo esas nuevas condiciones, lo que con precisión leninista se denomina fase de transición al socialismo.

La experiencia de la revolución chilena indica que la estrategia del Poder debe concebir las tareas y medidas del movimiento revolucionario en una línea de avance casi simultáneo, dirigiendo los golpes principales de la acción de las masas, tanto hacia la estructura como a la superestructura de la vieja sociedad. Situación en donde los problemas de la política y la necesidad de ejercer el Poder sobredetermina los problemas de la economía y la democracia.

Nuestro Partido ha precisado con claridad científica su concepción de la revolución chilena: «Concebimos la revolución chilena como el movimiento de la clase obrera y del pueblo organizado que, mediante la lucha de masas, desplaza del Poder a las actuales clases gobernantes, elimina al viejo aparato del Estado, las relaciones de producción que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas e introduce transformaciones de fondo en la estructura económica, social y política del país abriendo paso al socialismo.»[4]

Para romper y superar los límites entre las diversas fases de tránsito en la política que aplicó la Unidad Popular, es esencial el auge ascendente de la lucha de las masas, y para sus fases más decisivas un auge de la lucha de las masas de un carácter nacional revolucionario. Es preciso que la acción estatal de aquel poder popular que se ha configurado como Gobierno dentro del sistema estatal —el Ejecutivo en el caso nuestro— se combine y sea respaldada, a su vez, por el movimiento político de las grandes mayorías sociales que se proponen llevar a cabo la revolución. Esto es posible en presencia de una crisis nacional revolucionaria surgida sobre la base objetiva de una situación revolucionaria.

El problema de la conservación del Poder y, por ende, la preparación para el paso a la integridad de él, hacen resaltar en toda su riqueza la concepción leninista de la revolución: el Partido de los comunistas, a la par de asumir la tarea de llevar a cabo la revolución debe manifestarse, también, como el factor creativo principal que guía las masas en la preparación de las condiciones que la hacen posible, dentro del marco objetivo de la situación revolucionaria que se desarrolla.

Desde luego, la situación revolucionaria es la configuración, ante todo, de un conjunto de cambios objetivos en la sociedad. Pero, no de toda situación revolucionaria surge la revolución. Se requiere, como escribía Lenin, además de la existencia de factores objetivos, que se manifieste la capacidad de las fuerzas revolucionarias para aprovechar dicha situación. Lenin afirma: «Lo que se discute es el deber indiscutible y fundamental de todos los socialistas: el de revelar a las masas la existencia de una situación revolucionaria, de explicar su amplitud y su profundidad, despertando la conciencia revolucionaria y la determinación revolucionaria del proletariado, ayudándolo a pasar a las acciones revolucionarias y formar las organizaciones que correspondan a la situación revolucionaria, para trabajar en esta dirección.»[5]

El Partido Comunista de Chile planteó ya en su X Congreso, el año 1956, la posibilidad real de acceder al Gobierno de la nación. Ha sido un mérito directo de nuestro Secretario General, camarada Luis Corvalán, poner al Partido y a la lucha de masas revolucionarias en esta perspec-

tiva de Poder. El Partido Comunista de Chile, aunque relativamente poco numeroso en los primeros años de la década del 60, fue capaz, sin embargo, de conducir a la mayoría del pueblo y al conjunto de la izquierda chilena a las postulaciones programáticas y a una táctica que dieron como fruto la victoria popular de 1970. Esto constituye un innegable mérito y aporte de nuestro Partido a la revolución en Chile. Fue la coherencia interna de los postulados del Programa Popular en el que se plasmó nuestra línea política, y la aplicación consciente de ella al curso objetivo de la situación inicial que se desencadenaba, lo que permitió dar una fisonomía al Gobierno Popular y a sus primeras y más sustanciales medidas revolucionarias. Ahora bien, al no ubicar plenamente en el marco de una situación revolucionaria y su necesario desarrollo hacia la crisis nacional, la dimensión y naturaleza de los procesos que se desencadenaban y, por lo mismo, «haber absolutizado determinadas formas de lucha, sin estar preparados para todas las alternativas»[6], esta línea resultó, precisamente por eso, ser unilateral, y por tanto incapaz de ayudar a generar a las masas las condiciones que permitieran conservar el Poder y viabilizar el acceso a su totalidad.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU CONTENIDO SOCIAL, toda revolución es siempre violenta. El desarrollo de la teoría del Estado por Marx y Engels, y las tesis de V. I. Lenin, apuntan a esa enseñanza. El propio V. I. Lenin señala que el desarrollo por Engels de la teoría del Estado es «un verdadero panegírico de la revolución violenta»[7], insistiendo él por su parte que el meollo del marxismo consiste precisamente en educar a las más amplias masas sociales en la idea de tal revolución.

Jamás la vieja clase en el poder se dejará desplazar de él sin oponer la más feroz resistencia en todas las formas y planos que le sea posible y, de otro lado, cuando el proletariado revolucionario ha comenzado ya la revolución no puede detenerse. La tragedia que vive Chile constata esta ley inexorable de la historia.

A su vez, el contenido de la violencia social no es, como es sabido, otra cosa que las fuerzas de clase contrapuestas. Las formas de la lucha de clases son la expresión de esas fuerzas contradictorias y antagónicas puestas en acción. Por

lo mismo, cualquier forma de lucha de clases es *substancialmente violenta*, incluidas aquellas más pacíficas. La experiencia chilena también constata estas verdades.

En este sentido general es de primordial importancia entender que para los comunistas y demás revolucionarios la preparación de los elementos y factores necesarios para generar una favorable correlación militar de fuerzas debe ser una preocupación y actividad permanente, un problema de orden estratégico; ahora bien, que tal correlación militar de fuerzas se exprese o no, en un momento determinado, bajo la *forma* de una guerra armada de clases es ya una cuestión de orden táctico que dependerá de las circunstancias. Por lo señalado, conservar la cuota de Poder Estatal, plantearse su desarrollo y avanzar al socialismo mediante formas de lucha que no signifiquen una guerra civil generalizada tiene que ser considerado de manera flexible, no sólo por lo naturalmente inestable de la situación que se genera, sino que principalmente porque exige crear una correlación de fuerzas en todos los terrenos tal que la reacción no esté en condiciones de generalizar sus formas de lucha armada contra el Gobierno Popular.

Nuestra propia experiencia, en lo que tiene de específicamente nacional, señala, además, que es posible acceder a una cuota de Poder Estatal por medio de elecciones generales y conformar gobiernos sin que fatalmente sea necesario, en ese momento, que se exprese una correlación militar favorable a la revolución, y mantenerse en él incluso durante una primera fase. Pero *el resultado final* de nuestra experiencia de Gobierno Popular indica con particular fuerza que la *única manera* de *conservar* esa cuota de Poder ya conquistada y ampliarla es sólo posible si se crea, en virtud del auge de la lucha de las masas y de la crisis general revolucionaria, tal correlación de fuerzas a favor de la revolución, cuestión que depende, además, del propio estado de descomposición objetiva de las fuerzas de la burguesía y de la eficacia del trabajo de los revolucionarios.

En Chile se manifestó un hecho significativo, en la experiencia de la Unidad Popular, en un instante de la lucha social las clases en pugna se elevaron sobre el sentido inmediatista de los éxitos económicos, entendiendo que lo que estaba en juego eran en definitiva sus intereses histó-

8 7416 - 5

ricos de clase, hayan sido éstos de carácter objetivo o simples espejismos ideológicos[8].

La conservación del Poder exige, también, dar la lucha ideológica tendiente a elevar la conciencia de las masas sobre el sentido histórico de la revolución y sus realizaciones económicas. Esto es tanto o más válido mientras lo que se conserva sea una cuota de Poder y se haga evidente en las masas, a partir de su propia experiencia de Gobierno, que las realizaciones económicas revolucionarias se consolidarán sólo en la medida que sus resortes últimos, estatales, dejen de estar en manos de la reacción y pasen en su conjunto a las fuerzas que componen la alianza popular. A la par, las realizaciones económicas son un acicate en este sentido, e indican que el Gobierno está dispuesto a llevar a cabo, a toda costa, lo prometido y satisfacer las reivindicaciones vitales del pueblo. Ayudan a fortalecer y desarrollar la alianza popular y a aislar y golpear a los enemigos del desarrollo social.

El Gobierno de la Unidad Popular debió enfrentar una situación económica muy compleja. Las oligarquías financiera y de la tierra mantenían una influencia muy grande en el desenvolvimiento de la economía, controlaban una gran masa de recursos monetarios, que destinaron en parte importante a fomentar actividades especulativas, tenían en su poder muchas palancas económicas, y mantenían una gravitación importante en la burocracia estatal. De otra parte, la mayoría de la oposición en el Parlamento hacía muy difícil y en muchos casos imposible aprobar disposiciones legales imprescindibles, este problema llegó a ser tan agudo que incluso se llegó a rechazar una ley destinada a sancionar los delitos económicos. Simultáneamente se debía modificar a fondo las relaciones de dependencia. Ello implicaba no sólo recuperar las riquezas básicas en poder de monopolios norteamericanos, sino que, además, terminar con la presencia dominante de éstos en casi todos los sectores de la economía, particularmente en los más dinámicos, modificar la estructura geográfica del comercio exterior y establecer nuevas relaciones financieras internacionales, en condiciones que la economía chilena se había venido desenvolviendo históricamente con fuertes vínculos de dependencia del imperialismo norteamericano. En este contexto era que se debía ser capaz de concretar

las transformaciones de fondo contenidas en el programa de gobierno, desarrollar el área social de la economía, hacer crecer la producción y la productividad, establecer normas básicas de planeamiento y de dirección centralizada e incorporar a las masas, en especial a los trabajadores, a la dirección real de la economía.

El imperialismo hizo en Chile, a su vez, cuanto estuvo de su parte por «desestabilizar» al Gobierno Popular. En el plano de la economía aplicó el bloqueo financiero (y tecnológico), dando la batalla decisiva en el interior del país, combinando la acción con la de los clanes financieros chilenos, boicoteando la producción, promoviendo la fuga de divisas y utilizando especulativamente su capital. Estas medidas se combinaron con la guerra sicológica destinada a aterrorizar a diferentes capas de la población, en especial a sectores intermedios, buscando, al mismo tiempo, generar el mercado negro y provocar el falso desabastecimiento, el caos y la anarquía generalizada de la economía. Esta política, dirigida hacia los sectores medios y hacia los políticamente atrasados de la población, estaba destinada a dificultar la generación de una correlación de fuerzas favorable al Gobierno Popular y aislarlo. El imperialismo se dio cuenta tempranamente de la importancia política y económica que tenían los sectores vinculados al comercio detallista y al transporte, se dio cuenta que ellos eran capaces de paralizar la economía a grados catastróficos para el país y generar por sus efectos económicos la exasperación de grandes sectores de la población en contra del Gobierno Popular.

Los comunistas deben demostrar su capacidad para resolver este tipo de problemas, junto a sus aliados, con las masas y apoyándose en la ayuda de todo orden del campo socialista y de la solidaridad internacional además, por cierto, del esfuerzo económico principal dentro del mismo país. La lucha ideológica no debe bajar la guardia respecto de estos problemas objetivos impuestos a cualquier revolución; señalar los problemas que necesariamente entrarán a provocarse; y no renunciar a enseñar a las masas que sus obligaciones en esos momentos están por sobre sus derechos inmediatos, explicándoles además que sus sacrificios materiales momentáneos serán compensados con creces por los logros futuros que se vinculan a

vencer el atraso y la explotación definitivamente. Se requiere combinar acertadamente la lucha ideológica con la aplicación de la fuerza organizada de las masas para, junto con impulsar el programa de transformaciones acordadas, actuar contra las fuerzas que buscan desorganizar la economía.

Estas consideraciones generales entrañan, además, que la aptitud de los comunistas y sus aliados para defender y fortalecer el Poder Popular y encontrar la adecuada solución de los problemas de la economía nacional depende, de otra parte, de la corrección de su política económica, de la claridad que se tenga de las etapas de la revolución, de la amplitud y profundidad con que se comprenden las tareas y del ritmo general de los cambios. Una revolución no puede atarse a fechas fijas: la lentitud o rapidez de los cambios no están determinadas sólo por la voluntad de los revolucionarios, sino además, por las condiciones concretas, internas y externas, existentes.

EL GOBIERNO POPULAR DE SALVADOR ALLENDE fue el Gobierno más democrático que conoció la historia de Chile; se asentaba en la actividad de las grandes mayorías populares, en su lucha dura y tenaz, interpretó los vehementes deseos de cambios del pueblo chileno, significó desarrollar las conquistas democráticas del pueblo y ampliar su contenido cualitativamente, al ir entregando al pueblo un papel crecientemente decisivo en la vida nacional. Tuvo un carácter profundamente patriótico.

El Gobierno Popular permitió plenamente la expresión libre de todos los sectores de la sociedad. Esta experiencia pone en un nuevo plano la discusión del problema de la democracia, su contenido concreto, su carácter de clase. El contenido de la lucha ideológica y de la actividad práctica del movimiento popular se centró a este respecto en el desarrollo del democratismo de la vida nacional y de aquellos valores e instituciones positivas, que con su propia acción había logrado imponer y desarrollar.

La experiencia de la revolución chilena es unívoca al subrayar el hecho de que la actitud del imperialismo ante la libertad y la democracia y su actitud momentánea frente el veredicto popular, es de absoluta hipocresía. Se hace necesario evaluar el hecho de que, formado un Gobierno Popu-

lar a través de elecciones generales, las clases enemigas del proceso revolucionario no desarrollen inicialmente una actividad abierta de carácter insurreccional contra el nuevo Gobierno, indicando respetar las reglas del juego, sin embargo, la actividad conspirativa del imperialismo estaba en pleno desarrollo, incluso antes de la asunción de un Gobierno Popular, como se demostró fehacientemente.

La esencia de la democracia y la libertad en el período inicial de la revolución, *esencia de clases*, se oculta bajo la apariencia de la juridicidad prevaleciente que recubre el contenido de la lucha de clases y su nivel.

Esta apariencia jurídica apresa inicialmente el desarrollo de la lucha de clases, al grado de que el movimiento popular asienta parte de la legitimidad de su Gobierno respecto de una serie de sectores intermedios y del Ejército, precisamente en el reconocimiento de las reglas del juego democrático burgués que formalmente lo hicieron posible. A la vez, la misma actividad de gobierno utiliza una serie de mecanismos y recursos de la institucionalidad prevaleciente que permiten dar inicio a una serie de transformaciones radicales.

Esta situación, por otra parte, amarra inicialmente a la gran burguesía y al imperialismo en el reconocimiento formal del Gobierno Popular, lo que con todo no impide que utilicen la institucionalidad, sus centros estatales de poder, para bloquear y obstruir la actividad del Gobierno Popular.

Este inicial equilibrio institucional, de carácter relativo, es con todo favorable al Gobierno Popular en cuanto no le ata de manos para dar inicio a las transformaciones más radicales, como sucedió en Chile; pero, termina por romperse por el propio hecho de la resistencia de la burguesía a los cambios revolucionarios, al grado de que termina por transformarse en un choque abierto de las fuerzas en pugna. El enfrentamiento regulado jurídicamente por las clases dominantes es reemplazado por un choque no regulado jurídicamente por ninguna ley previa. Choque que se extenderá hasta el momento en que un nuevo desarrollo democrático, impuesto por las fuerzas populares, venga a imponer su orden, o simplemente por la exclusión de todo juego entre las clases, como acontece, por ejemplo, con el fascismo en Chile, que es la negación de toda democracia, es la expresión terrorista abierta del dominio del gran capi-

tal financiero nacional e imperialista sobre todas las demás clases, es —al decir de Dimitrov— «el ajuste de cuentas terrorista con la clase obrera»[9] con la que no está en condiciones de jugar, aunque sea con las cartas marcadas de la democracia burguesa, su Poder estatal y económico.

Después de nuestra experiencia revolucionaria nos resulta evidente que desde el punto de vista de la conservación del Poder y de la defensa de la Revolución, los aspectos que resuelven la cuestión se refieren tanto a la nueva dimensión y naturaleza de la democracia, como a la autoridad del nuevo Poder y sus recursos estatales. «En cuanto al desarrollo de la sociedad —señaló el camarada L. Corvalán en el mitin celebrado en Moscú en enero de 1977— tenemos posiciones definidas. En una sociedad de clases antagónicas, todo Gobierno constituye alguna forma de dictadura de la clase dominante, y la dictadura del proletariado es más democrática que cualquier Gobierno de la burguesía. Así lo demuestra la experiencia internacional. A la luz de lo sucedido en Chile, surge hoy la necesidad de que el pueblo se dé un Gobierno capaz de defenderse frente a todas las conspiraciones y golpes urdidos por el imperialismo, la reacción interna y el fascismo. Hoy no está planteada en el país la dictadura del proletariado, pero en algún momento de su historia surgirá también como una necesidad, haciendo más reales los valores democráticos.»[10]

El curso al socialismo sin formas generalizadas de lucha armada entre las clases no evita sino que presupone una extendida y conmocionada polarización de las fuerzas sociales; algunas fuerzas opuestas a la revolución se colocan objetivamente fuera de los valores de la democracia real, pero otras continúan dentro de ella, sin estar por ello con la revolución. El movimiento popular desarrolla con éstas la lucha política e ideológica por sumar fuerzas, por defender los objetivos de la revolución, por disputar en el plano de la concepción política y filosófica de la nueva sociedad. Desde este punto de vista, las relaciones con aquellas fuerzas y sus partidos e instrumentos, incluso esa lucha política e ideológica adquieren formas distintas, que incluyen la colaboración basada en la unidad y la dilucidación de las diferencias. *La democracia debe posibilitar la más amplia expresión de las mayorías nacionales, creando, al mismo tiempo, los instrumentos para derrotar las accio-*

*nes contrarrevolucionarias de quienes quieren destruirla, permitiendo así la defensa exitosa de las conquistas revolucionarias.*

NUESTRA EXPERIENCIA DE GOBIERNO POPULAR reafirma el papel dirigente de la clase obrera y su necesaria independencia de clase, como manera de garantizar el rumbo correcto de la revolución y el carácter de masas de la lucha. Indica además, en este sentido, que la amplitud del frente no debe confundirse con el plurivanguardismo, e indica la necesidad de que la clase obrera y su Partido desarrollen la lucha ideológica necesaria contra las desviaciones anarquistas y aventureras y contra el oportunismo de derecha que busca salidas conciliadoras con la reacción. De otro lado, eleva la responsabilidad del Partido de los comunistas y de sus aliados y la necesidad del trabajo teórico que sintetice las experiencias de las demás revoluciones y en primer lugar las lecciones de la lucha de su propio pueblo, aprenda de su capacidad creadora y se enriquezca con el aporte de las demás organizaciones aliadas.

[1] V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Buenos Aires, Cartago, t. XXIV, pág. 453.

[2] O. Millas. «Entrevista», *Boletín Informativo del Comité Chileno de Solidaridad*, La Habana, n.º 97, agosto de 1976.

[3] V. I. Lenin. Ob. cit., ed. cit., t. XXVII, pág. 132.

[4] *Programa del Partido Comunista de Chile.* Santiago, Imp. Horizonte, 1969, pág. 14.

[5] V. I. Lenin. Ob. cit., ed. cit., t. XXII, pág. 313.

[6] Véase O. Millas, Ob., cit., ed. cit.

[7] V. I. Lenin. Ob. cit., ed. cit., t. XXVII, pág. 31.

[8] Como aconteció con algunos sectores intermedios y del proletariado de la sociedad ganados para la política de la reacción, a pesar de los beneficios económicos reales que obtuvieron durante el Gobierno Popular.

[9] Véase J. Dimitrov, *El Frente Unico y Popular*, Sofia, 1969, pág. 118.

[10] Suplemento de la revista *Socialismo: teoría y práctica*, Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, abril 1977, pág. 74.

# LA GUERRA PSICOLOGICA, ARMA POLITICA DEL IMPERIALISMO

**Rodrigo ROJAS,**
miembro suplente de la Comisión Política del CC del Partido Comunista de Chile

LA PRESENCIA DEL FASCISMO EN CHILE constata que el imperialismo recurre a todos los medios de que puede disponer para impedir la amenaza a sus intereses. La experiencia chilena es un toque de alerta respecto de los métodos del imperialismo; pero, además, constituye un llamado de atención al estudio riguroso y creador de los problemas de la revolución.

En este artículo queremos sólo abordar uno de esos métodos, el uso de la guerra psicológica como arma política a la que recurre el imperialismo contra los pueblos, y mirar desde ese ángulo lo ocurrido en Chile.

EL PROBLEMA DE LAS LIBERTADES PUBLICAS y de los derechos democráticos reviste carácter fundamental en el desarrollo de la lucha de clases. La clase obrera sostiene firmemente la bandera del desarrollo democrático. En nuestra época la vigencia real en países capitalistas de derechos democráticos del pueblo sólo corresponde a concesiones que deben otorgarse a las fuerzas de la clase obrera y de sus aliados o a conquistas que han arrancado. Al plantearse la transformación revolucionaria de la sociedad, las fuerzas reaccionarias emplean todas sus armas contra los derechos democráticos de la clase obrera y del pueblo.

En Chile la situación se presentó en términos en que el mantenimiento y la ampliación de los derechos democráticos de la inmensa mayoría se hizo incompatible con la tolerancia observada frente al abuso de estos derechos por la minoría reaccionaria. Las fuerzas que se propusieron la instauración del fascismo desplegaron primero el terror psicológico en forma de terror publicitario para ir abriendo

paso al terror militar. A medida que se avanzó en el desarrollo de la conspiración fascista, ella articuló en un solo plano el terror propagandístico y el terror físico. Nuestra experiencia muestra que fue negativo el que hubiera debilidad en la represión oportuna del uno y del otro.

En la carta pública del 29 de agosto de 1972 del Secretario General del Partido Comunista, compañero Luis Corvalán, al Presidente de la República, compañero Salvador Allende, se reiteró la posición invariable y sostenida de los comunistas en los siguientes términos: «El reconocimiento de los derechos de la oposición no puede llevarnos a aceptar toda clase de excesos y fechorías. Ciertos opositores creen que se puede hacer cera y pabilo de la ley. Hay diarios y radios de la oposición que han convertido en pan de cada día la mentira, la injuria, la calumnia, las publicaciones falsas y alarmistas... Nuestra primera y principal obligación con el pueblo y el país es ponerles camisa de fuerza a los que quieren arrastrar a Chile a un baño de sangre. La necesidad de mantener y asegurar el desarrollo de la libertad y la democracia nos impone la obligación de aplicar la ley contra quienes incurren en delitos en busca de la caída del Gobierno y de la implantación de una dictadura fascista.»[1]

Los hechos han demostrado la justeza de esta posición. Además, nuevos antecedentes comprueban que el abuso de la propaganda reaccionaria estuvo sincronizada en Chile con un aparato que no era meramente de publicidad, sino de guerra psicológica como preparación de la guerra armada contra el pueblo.

La experiencia de Chile indica, además, que los métodos y técnicas que el imperialismo exporta intenta presentarlos, en cada caso, como cuestiones de orden exclusivamente nacional, puramente locales. Sin embargo, es evidente que la orquestación de los medios de comunicación de masas en poder de las fuerzas reaccionarias fue hecha por expertos de la Agencia Central de los Estados Unidos y de otros servicios de subversión del imperialismo norteamericano. La base de tal orquestación la encontramos en las recetas contenidas en el manual denominado *Las operaciones psicológicas* del Departamento de Ejército de los Estados Unidos.

Luego de indicar que «la paz es hoy la continuación de la

guerra por medios no militares», el manual señala que el principal medio «no militar» que hoy se emplea es «la propaganda u operaciones psicológicas»; estas operaciones son «planificadas o ejecutadas para influir en los sentimientos, actitudes o comportamientos de grupos extranjeros de modo favorable al logro de las políticas y objetivos de los Estados Unidos». Su objetivo fundamental es, como señala el manual, «crear desaliento, derrotismo y apatía,... estimular a los individuos a poner su interés personal por encima del colectivo,... intensificar el interés del individuo en su situación personal y privada, a fin de reducir su apoyo a los fines colectivos o nacionales,... fomentar escepticismo respecto a los fines políticos y la ideología de la autoridad local o nacional, si ésta es hostil a los propósitos de los Estados Unidos,... estimular la discordia, disensión y lucha,... promover el comportamiento desorganizado y confuso,... fomentar acciones decisivas y antisociales, a fin de socavar la estructura política del país,... promover y apoyar movimientos de resistencia contra la autoridad, si ésta no es amiga de los Estados Unidos»[2].

Los citados «principios» y «recomendaciones» fueron aplicados acuciosamente en Chile. La guerra psicológica tenía como propósitos específicos acentuar los graves problemas económicos del país, exaltar a las masas de los sectores intermedios y a capas medias de la sociedad contra el movimiento popular, generar la unidad entre estos sectores y capas y la gran burguesía en torno a la política del imperialismo; imponer la hegemonía del capital financiero en la conducción política de la contrarrevolución; buscar por todos los medios aislar a la clase obrera de los sectores medios de la población; meter cuñas entre el Gobierno y determinados sectores del movimiento popular; alentar sus disensiones internas propagando las concepciones y prácticas provocadoras y objetivamente contrarrevolucionarias de la ultraizquierda; y, aprovechándose de la naturaleza de clase de las Fuerzas Armadas y de la larga y paciente penetración imperialista en sus filas, ayudar a generar una correlación de fuerzas interna y externa a ellas que las llevara a separarse del Gobierno Popular, romper con su sedicente profesionalismo, su acatamiento al Poder civil y su «prescindencia» política y caer en el fango del golpe de Estado y el crimen contra el pueblo.

Esta política fue complementada, además, no sin contradicciones entre las diversas fracciones de las clases dominantes, por todos aquellos centros de Poder institucional que conservaban en sus manos, buscando producir un verdadero cerco institucional al Gobierno de la Unidad Popular para impedirle gobernar.

La experiencia chilena indica que la propaganda y su instrumento, la guerra o presión psicológica, utiliza desde los recursos más tradicionales (cine, TV, radio, prensa escrita, etc.) hasta los más novedosos y espúreos como el rumor y el chiste malintencionados, al grado de que en un momento de conmoción social adquieren, por así decirlo, vida y dinámica propias, propagándose por el cuerpo social como un verdadero cáncer de explosividad e irracionalidad social.

LA GUERRA PSICOLOGICA tiene como condimento esencial el terror. Y pese a que la política de terror no es omnipotente ni infalible, el imperialismo y sus aliados lograron desencadenar con éxito campañas de miedo, odio y terror entre diferentes sectores de la población, respecto del movimiento popular y del Gobierno que éste conquistara. El terror, para algunos sectores sociales, es, en cierto grado y en determinadas condiciones, un estado natural del período de violencia que acompaña a un proceso revolucionario; es lo que sucede con las viejas clases dominantes que se ven desplazadas del Poder. El imperialismo juega con habilidad esa situación de clases y opera sobre todo el anticomunismo sembrado de generación en generación. La política del terror y la presión psicológica del imperialismo es multidireccional; la desencadena contra sus propias fuerzas de apoyo como forma de reafirmar los valores de clase y, preeminentemente, como forma de generar agitación y organización en las filas de la burguesía: en una primera fase para generar formas de defensa de clases, para, posteriormente, cuando el terror se trasmuta en odio, generar formas de agresión anticomunista.

El terror lo aplica, además, contra el proletariado y sus aliados más seguros. Consciente de que el terror no logra cambiar la equivalencia ideológica de un pueblo políticamente maduro —cuestión comprobada a través de numerosos experimentos científicos— su intención es principalmente

de orden inhibitorio, tendiente a bajar la moral de combate de la clase obrera, de hacerla perder confianza en sus dirigentes... La presión psicológica se combina para llevar la discordia y desunión al seno del movimiento popular, fomentar el divisionismo e inculcar la pasividad. La experiencia de Chile demostró que el imperialismo utiliza como elemento objetivo de su guerra psicológica contra el pueblo los propios errores y debilidades del movimiento popular. En Chile, las acciones de la ultraizquierda contra los sectores de la pequeña y mediana propiedad, contra el Gobierno Popular, y sus extemporáneos llamados a las Fuerzas Armadas, así como toda su verborragia izquierdizante, fueron hábilmente utilizados, además, como elementos de la campaña del terror y la guerra psicológica, más allá de los propósitos mismos de los dirigentes de los grupos de «izquierda».

Pero la política del terror tuvo como principal blanco, desde un punto de vista de clases, a las capas medias de la sociedad, en particular a los sectores de la pequeña burguesía propietaria. El imperialismo recurre al terror psicológico como elemento dinamizador de la sociedad y lo dirige hacia las situaciones objetivas que entrañan la mayor cantidad de sentimientos vitales, atávicos.

La presión psicológica se dirigió, también, a instituciones hasta entonces no «mancilladas» por la política tradicional burguesa, en particular, la familia. La campaña del terror hizo girar en ciento ochenta grados las actitudes políticas de ciertos sectores de la burguesía, la pequeña burguesía y las capas medias de la sociedad respecto de la familia, la mujer y los hijos. Se trataba, por cierto, de sectores vacilantes y algunos de ellos no ganados para el Programa de la Unidad Popular y a los cuales se trataba de que se pusieran del lado de la oposición. Se les inculcó la idea de que la familia debía ser un centro de agitación y organización antipopular, unidas cada una de ellas por una concepción de clases, anticomunista y agresiva. Se trataba de inducir a la mujer burguesa a dejar de ser el obstáculo tradicional de la participación en la política de los elementos masculinos de la familia y se quiso transformarla en una de las impulsoras más dinámicas y agresivas de la política burguesa. Se inventó la organización del «Poder Femenino» tras una espúrea acción feminista. Las experien-

cias de las mujeres de la burguesía cubana marchando enlutadas contra el Gobierno Revolucionario de Fidel Castro, o las «marchas de las cacerolas» de las burguesas contra Joao Goulart en Brasil, fueron exportadas a Chile y constituyeron una de las principales manifestaciones de «desobediencia civil» contra el Gobierno de Salvador Allende. La propaganda reaccionaria y los rumores trataban de presentar a las mujeres más valerosas y resueltas que los hombres y, tras una política descalificatoria de la virilidad de aquéllos, presionarlos a una activa propaganda anticomunista.

Una vía directa de llegar a ellas fue por medio de los hijos, tanto en lo que se refería a su educación como a su seguridad personal, con lo que la reacción especulaba desvergonzadamente. Se pretendía mostrar a la Unidad Popular y a los marxistas contraponiendo a los hijos a sus padres. Por ejemplo, el diario *El Mercurio*[3], en un aviso publicitario, publicó la fotografía de un estudiante; imagen adicional de la misma persona con atuendo de «guerrillero» y un arma en la mano. Título: «¿Su hijo... o su enemigo?», párrafo de refuerzo: «En los países socialistas los hijos son obligados a espiar a sus padres». En otro anuncio publicitario se presentó la secuencia fotográfica de una ejecución. Título: «Esto es el comunismo», acompañadas de un titular: «¿Desea usted esto para Chile? ¡Salve a Chile del comunismo!» Lo propio se hacía en la Radiodifusión: (Ruido de metralleta). Una mujer grita: «Los comunistas mataron a mi hijo» (Locutor): «Esto podría suceder en Chile si Chile fuese comunista.» Se lanzaban consignas organizadoras en defensa de los hijos: «No los deje que jueguen en la calle», «Vaya a buscarlos al colegio», etc., etc.

Gran parte de los sectores medios y de la alta burguesía fueron inducidos a asumir formas de organización que aceleraban el caos económico y realimentaban el terror imperante, agudizando la anarquía social. Se pasa abiertamente a combinar el terror con formas ofensivas de organización de clases. La consigna matriz de ese período fue: «¡Junten rabia, chilenos!», repetida con majadera insistencia.

Por medio de la guerra psicológica y a través de interminables cadenas telefónicas, mensajes manuscritos y rumores se induce por la vía celular de la familia al acaparamiento

y al mercado negro amenazando con que tal o cual producto iba a desaparecer del mercado o se iban a alzar sus precios. Se inducía a formar o provocar colas artificiales. Se hacía desaparecer, por la vía del acaparamiento, productos vitales o de amplio consumo. Se llegó al grado de arrojar a los basurales y a los ríos grandes cantidades de alimentos para lactantes, leche, biberones, medicamentos, etc. Por supuesto, con ello se lograba crear en la población una sensación de malestar y antipatía, señalando como responsable de toda esta situación al Gobierno y a la Revolución. El ya citado manual *Las operaciones psicológicas* propicia, a este respecto, la necesidad de «atribuir la culpa a quien está en el poder». La propaganda «tiene más probabilidades de éxito en una situación de intranquilidad social», agrega.

Se hacían encuestas apócrifas, a nombre de la Unidad Popular, preguntando a los sectores medios de la sociedad —urbanos y rurales— cuántos dormitorios tenía la casa en que habitaban, número de camas, enseres personales y su disposición a compartir la casa y sus haberes con otros chilenos.

Metido el terror en el cuerpo, se indujo a la organización para la autodefensa por calles, manzanas y barrios. Estas actividades fueron en muchas partes dirigidas por militares en retiro lo que aseguraba, por un lado, un buen nivel de organización paramilitar y, por el otro se impregnaba a la autodefensa de un sentido militar y patriota. «¡Cercado Santiago!», «¡Miristas asedian barrios altos!» eran titulares que se publicaban junto a planos de las poblaciones civiles y barrios militares presuntamente «rescatados», «salvados» de las «tomas» del MIR[4]. Se crearon sistemas de enlace a través de los niños, claves telefónicas, pitos y silbatos de diapasones predeterminados. Se hacían verdaderas maniobras operativas que reafirmaban la sensación de terror y agresividad, realimentando la conspiración de otros sectores sociales, dirigiendo sus esfuerzos, de preferencia, hacia los gremios, colegios profesionales, federaciones estudiantiles y militares fascistas. Se utilizaba el aporte de profesionales para la instalación de sistemas de comunicación, trincheras y hospitales de campaña. Todo tendía a crear un estado de histeria colectiva, reforzando la campaña del terror hacia los sectores medios y atrasados

de la población. Esta campaña fue reforzada por atentados terroristas destinados a sembrar el pánico; interrupciones en el suministro de agua potable, apagones de luz eléctrica en los barrios residenciales de la burguesía y en las poblaciones militares, cadenas radiales llamando a «conservar la calma y a no dejarse arrastrar por las provocaciones de los extremistas».

Las medidas de autodefensa iban acompañadas crecientemente de formas de agresión abierta; atentados terroristas (entre junio de 1972 y febrero de 1973 hubo 105 atentados de carácter grave y fueron asesinados 17 militantes de la UP); paros de transportistas, comerciantes y profesionales; paros de sectores de la heredada administración imperialista de las empresas del cobre; y movimientos de «solidaridad» de la burguesía con esos «huelguistas»; tomas de centros universitarios en los que tenían influencia; «conciertos de cacerolas» y manifestaciones, mítines, marchas de la reacción; cadenas radiales de la burguesía atacando al Gobierno; instalación de barricadas y organización de desmanes en los barrios altos y lugares céntricos de la capital y otras ciudades, etc.

Al mismo tiempo, no se puede dejar de señalar que, pese a todos los esfuerzos del imperialismo, ningún sector consciente de la clase obrera participó en acciones en contra del Gobierno Popular.

TODA LA CAMPAÑA PROPAGANDISTICA Y DEL RUMOR de la reacción englobaba los sentimientos de terror, odio y esperanza en una «salida democrática» que permitiera «reconstruir Chile», instando, a la vez, al derrocamiento del Presidente Allende. Ejemplo de ésto eran avisos publicitarios como el siguiente: «Mujer chilena: no podemos esperar hasta 1976, porque en 4 años más el comunismo implantaría totalmente la dictadura del hambre. Hay urgencia de cambiar el Gobierno marxista».

La propaganda reaccionaria destinada a destruir la imagen de las fuerzas populares tenía diversas variantes: se amplificaban todas las discrepancias internas de la UP y del Gobierno; se trataba de presentar al Gobierno de Allende reprimiendo al pueblo. A estos efectos se utilizaban todas las provocaciones de la ultraizquierda, en particular del MIR. El diario *El Mercurio* jamás publicó una entrevista

a un personero del Gobierno, pero muchas veces sí de los máximos dirigentes del MIR, ocupando páginas completas no en atacar a la reacción, sino a las medidas del Gobierno y, con particular saña, al Partido Comunista.

En la política de contraponer el pueblo al Gobierno Popular se propagandeaban todas las reivindicaciones economicistas de la ultraizquierda y sus llamados a formar un «polo revolucionario» opuesto al Gobierno, etc. Cuando se insistía en que el país era llevado a la anarquía por la labor gobernante, se mostraba al Presidente Allende sobrepasado por la ultraizquierda; cuando se insistía en el totalitarismo del Gobierno eran traspasadas a la Unidad Popular todas las connotaciones negativas del MIR.

El ya varias veces citado Manual del Ejército de USA muestra a las claras esta campaña de división en el campo popular por el imperialismo: «Si no puede atacarse directamente, se utiliza la insinuación. (Se busca) aumentar las fricciones y tratar de provocar manifestaciones de desunión..., estimular la disensión y los conflictos internos, crear sospecha y desconfianza.»

De otro lado, la propaganda reaccionaria trataba de generar permanentemente la imagen de incapacidad de los gobernantes, de aprovechamiento personal, de vulgaridad, etc. Se lanzaban insolentes ataques al Presidente Allende. Se recurría al chantaje, se utilizaban trucos fotográficos. Todo este aspecto de la guerra psicológica, destinado a quebrar la imagen de las autoridades de Gobierno, fue exportado también por el imperialismo yanqui.

La guerra psicológica y sus efectos prácticos tuvo reflejos directos en las FF. AA. y en su «cerco sanitario» civil: el desabastecimiento y el caos económico; el terror inducido en los barrios de la burguesía, de las capas medias y en las poblaciones militares y de carabineros; la organización de la «autodefensa» en todos esos lugares; el clima de inestabilidad y de ausencia de autoridad; la manipulación psicológica de la familia, la mujer y los hijos y su participación directa en marchas, mítines y barricadas; el clima de deliberación generalizada en las FF. AA., y en su entorno civil, etc. La guerra institucional desde el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría; el bombardeo de la propaganda reaccionaria a través de los medios de comunicación de masas; la «comprobación» de ilegitimidad del Gobierno y

de «anarquía» unas veces y de «totalitarismo» otras, fueron elementos que tuvieron grandes y negativos efectos dentro de las FF. AA. Se sumaron a ello el trabajo de los políticos reaccionarios y de las mujeres de los militares fascistas hacia los cuarteles, las acusaciones de falta de virilidad, de un lado, y de halago, por otro, los «atentados psicológicos» a los militares patriotas, etc. El imperialismo utilizó para su guerra psicológica hacia las Fuerzas Armadas todas las acciones provocadoras de la ultraizquierda, en particular del MIR, y su fanfarronería sin límites.

La dirección del golpe principal del imperialismo respecto de las FF. AA. estuvo dirigida, como ya se ha señalado, a separarlas del Gobierno Popular y a aislar a sus mandos constitucionalistas y patriotas de sus tropas y de la oficialidad, induciendo a los militares a dar el golpe de Estado.

LA LUCHA DE LOS PUEBLOS CONTRA EL IMPERIALISMO, el conjunto del proceso revolucionario mundial, avanza de modo permanente. El desarrollo de los países socialistas, el incremento de su poderío y la creciente influencia de su política internacional conforman una poderosa fuerza de atracción sobre sectores cada vez más y más amplios de la población de los países capitalistas y de las naciones en vías de desarrollo. No se trata ya tan sólo de la influencia de las ideas del socialismo; sino del ejemplo revolucionador del socialismo real. Y esa fuerza de atracción es mucho mayor si se considera que se presenta en los marcos de una crisis profunda y generalizada de todo el sistema capitalista. En un desesperado y vano afán por salir de esa crisis, por superarla, el imperialismo y los grupos que, en cada país, están al servicio de las empresas transnacionales recurren a una carta desesperada: el fascismo. No es nuestro propósito ahondar en los distintos aspectos de la ideología del fascismo, sino que, en relación a lo que hemos estado analizando, precisar algunas cuestiones que dejó en evidencia en este campo la experiencia chilena.

Toda la manipulación psicológica del imperialismo y sus efectos de masas tuvo, como condición *sine qua non*, distorsionar la realidad para hacer creíbles a algunos sectores sus patrañas. En una palabra, como recomiendan sus expertos en operaciones psicológicas, era indispensable

«crear credibilidad y mantenerla». Credibilidad —en su concepción— no es sinónimo de verdad; no es necesaria ni conveniente —afirman— la verdad completa, es necesario modificar ciertos hechos «según el público objeto». Sin embargo, la guerra psicológica y el terror no fue sólo un problema de manipulación subliminal de los «públicos-objetos», cuyas conciencias ya estaban adecuadas previamente por décadas de inoculación anticomunista. La formación social chilena y la dinámica misma del proceso durante el período 1970–1973 conformó una situación subjetiva que hizo posible que la política del terror (y todo el anticomunismo previo) fuera asumiendo, en un amplio sector de la burguesía y en cierto sector de la pequeña burguesía, paulatinamente, la forma de una ideología hasta cierto punto coherente y sistematizada.

La irracionalidad entró a llenar el vacío ideológico de la casta dominante que no podía tener una posición progresista por razones de clase y que ya no podía acudir como fuente propulsora de la movilización de masas al viejo demoliberalismo obsoleto y en crisis. De esta desnudez y obsolescencia ideológica y su reemplazo por la política de lo irracional como elemento reclutador, organizador y movilizador de masas, surgieron las espúreas formaciones del fascismo en Chile. Esta misma irracionalidad hace que la ideología del fascismo esté altamente contaminada con elementos psicológicos muy dinamizadores: el Estado fascista aparece como la expresión de la «voluntad» de la nación; los conflictos entre clases son reemplazados por el conflicto entre lo nacional y lo extranjero, como un conflicto entre naciones, consideradas éstas como cuerpos orgánicos vivos con sus psicologías y temperamentos propios y con una misión nacional que les viene a cada una desde sus antepasados; la sociedad no se organiza a partir, determinantemente, de la posición objetiva que los hombres ocupan en un sistema social de producción, sino que a través de «estructuras orgánicas vitales» como los gremios, las corporaciones, la familia y el Estado.

Si bien el concepto de raza no aparece claramente en la ideología de los fascistas chilenos (es posible que por su carácter dependiente), sí puede afirmarse objetivamente que todos los elementos ideológicos señalados aparecieron explicitados muchas veces en el discurso teórico y político

de la reacción chilena. La realidad chilena dio las condiciones para el surgimiento de estas especies y fue el imperialismo, a través de sus científicos del terror y la manipulación psicológica, los que catalizaron y condujeron para sus propósitos todo aquello. El imperialismo no sólo puso la parte más determinante en la dirección estratégica y táctica sino además dio los condimentos teóricos de la psicología social del fascismo.

LA EXPERIENCIA CHILENA —a nuestro parecer—, entre otras cosas, pone en un primer plano la importancia del factor subjetivo en los períodos de conmoción social: la importancia estratégica que la reacción le dio al factor «estado de ánimo» como elemento insurgente en sus masas exaltadas. El imperialismo en su guerra de desestabilización eludió como punto de partida los elementos ideológicos de la conciencia social, trabajando directamente en el plano emocional de las masas, bloqueando el conocimiento adecuado (científico) de los intereses objetivos que ubicaban a parte importante de esas masas al lado del Gobierno Popular.

El camino del proletariado revolucionario es inverso; parte de los elementos ideológicos (adecuados a un conocimiento científico de las leyes sociales) de la conciencia social y da un fundamento racional a la psicología social de las masas; a su vez, el fervor revolucionario reafirma los elementos ideológicos de las masas radicalizadas. El imperialismo sólo se queda con los sentimientos irracionales y los toma como fundamento de los elementos de la ideología, que por lo mismo resultan profundamente irracionales, explosivos y antihistóricos.

Sin embargo, para el movimiento popular surge una lección de todo aquello: no supimos dar la pelea al enemigo en el campo de la psicología social y tampoco la utilizamos para la movilización de nuestras propias fuerzas revolucionarias. En el análisis de las situaciones concretas es indispensable tener presente los elementos de la psicología social de las masas. Los clásicos del marxismo-leninismo insistieron permanentemente en estos factores como parte componente de la política científica. En todos sus análisis están presentes los estados anímicos precisos de las masas, como factores determinantes de la correlación de fuer-

zas en un momento dado. Podemos recordar a Lenin: «No habríamos podido retener el poder ni física ni políticamente (de haber lanzado la insurrección.–*R. R.*). No habríamos podido mantenernos físicamente, aunque por momentos teníamos a Petersburgo en nuestras manos, porque en ese entonces nuestros obreros y soldados no habrían *luchado* y *muerto* por Petersburgo: les faltaba todavía ese "furor", ese odio violento *tanto contra* los Kérensky, como contra los Tsereteli y los Chernov. Nuestra gente no estaba todavía templada por la experiencia de las persecuciones a los bolcheviques en las que participaron los eseristas y los mencheviques.»[5]

En nuestra experiencia no supimos tener presente en forma suficiente la energía de las masas, su fervor y el odio sagrado de clase del proletariado contra sus enemigos imperialistas y fascistas.

La dura escuela del combate antifascista está forjando más aún el acero comunista de nuestro Partido, de los revolucionarios en general y de nuestro pueblo. Está influyendo directamente en su psicología social, reforzando su conciencia revolucionaria. Sin embargo, es una escuela que no le deseamos a nadie. El pueblo chileno hubiese anhelado otro camino, pero se está generando en él un odio violento contra la bestia fascista, un odio y fervor de un pueblo dispuesto a pagar con su vida el precio de la libertad.

A los teóricos del terror y de las guerras psicológicas no escapa el hecho de que el pueblo no ha perdido su sensatez política y su espíritu crítico indomable, y que el miedo inicial de algunos se va trasmutando lenta pero inexorablemente en odio y fervor de clases imparables. Por eso el temor de los fascistas al pueblo, sus sanguinarias redadas contra los revolucionarios, su política de exterminio y campos de concentración.

El pueblo no es vengativo, sabrá diferenciar a sus enemigos declarados de los que no lo son. Sabrá diferenciar, por ejemplo, a los que engañados o por cobardía moral no han parado la mano asesina. Para éstos su propia conciencia será el mejor tribunal. Pero, como ha dicho Luis Corvalán, «los asesinos y torturadores de la DINA, Pinochet y su grupo, que tienen sus manos manchadas con sangre de chilenos, deben ser castigados como se merecen».[6]

Nuestra fuerza radica en la organización, inteligencia y combatividad de un pueblo que sabrá estar a la altura de los acontecimientos y que tendrá suficiente decisión y sabrá utilizar todas las armas contra sus enemigos para poner fin a la oscura noche del fascismo y abrir las grandes alamedas de las que habló el Presidente Allende.

1 *El Siglo*, 31 de agosto de 1972, pág. 6.

2 Todas las citas del Manual de Campaña del Departamento del Ejército *Las operaciones psicológicas*, editado por la Oficina Central del Departamento del Ejército en Washington, DC, están tomadas de: Elisabeth Reimann Weigert y Fernando Rivas Sánchez. *Las fuerzas armadas de Chile: un caso de penetración imperialista.* Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1976.

3 Periódico propiedad de uno de los más importantes grupos de la oligarquía financiera chilena, el clan Edwards. La investigación oficial realizada en Estados Unidos acerca de la campaña de «desestabilización» emprendida por el Gobierno y los monopolios norteamericanos contra Chile, con la activa participación de la CIA, muestra que este diario tomó parte en esta acción, recibiendo para ello un copioso financiamiento.—*N. de la Red.*

4 Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Organización de ultraizquierda que se destacó durante la Administración de Salvador Allende por efectuar numerosas acciones, en oposición al Programa de la Unidad Popular, dirigidas contra empresarios no monopólicos y que buscó generar una forma de «poder» paralelo al Gobierno.—*N. de la Red.*

5 V. I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Buenos Aires, Cartago, t. XXVII, pág. 134.

6 *Pravda*, 5 de enero de 1977.

# EL PAPEL Y EL CARACTER DE LOS FACTORES EXTERNOS

**Manuel CANTERO,**
miembro de la Comisión Política del CC del Partido Comunista de Chile

LOS OBJETIVOS QUE SE TRAZO y se esforzó en cumplir el gobierno de la Unidad Popular en política internacional conjugaban nuestras más ricas tradiciones independentistas con los imperativos de los pueblos en la época contemporánea. Por ello fueron, a la vez, profundamente patrióticos y consecuentemente antiimperialistas.

Tales objetivos se encaminaban a conseguir la plena autonomía política y económica de Chile. Para ello, el Gobierno Popular se propuso —y en gran medida logró— reforzar las relaciones, intercambio y amistad con los países de la comunidad socialista. Desarrolló, en general, una activa política de incremento de las relaciones exteriores del país, sobre la base del respeto a la autodeterminación y de acuerdo a los intereses del pueblo de Chile. Promovió un fuerte sentido antiimperialista y americanista de su gestión, fortaleciendo así sus relaciones con los países no alineados, estableciendo vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos dependientes o colonizados y, en especial, con aquellos que desarrollan sus luchas de liberación e independencia. En tal perspectiva, planteó una decidida política de defensa del principio de no intervención y de rechazo de todo intento de discriminación, presión o bloqueo intentado por los países imperialistas. El Gobierno Popular inscribió su acción internacional en la activa y consecuente lucha por la preservación y profundización de la paz.

El Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular supo expresar una plataforma de liberación nacional y social, de lucha contra los monopolios multinacionales y criollos y contra el latifundio, cuyo dominio se traduce en

atraso y miseria para los trabajadores y el pueblo, y en dependencia y subdesarrollo. El Gobierno Popular vinculó orgánicamente a Chile con el torrente de fuerzas que en el plano internacional abren paso a la distensión, a la paz, a la independencia nacional y al progreso social. Esta política fue acogida calurosamente por los pueblos del mundo.

La entrevista sostenida por el Presidente Allende con el Presidente Lanusse de Argentina significó un golpe a la política imperialista de las «fronteras ideológicas». Sus visitas al Perú, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Cuba, Argelia y la Unión Soviética, fueron una expresión de profunda amistad, apertura y colaboración con los países de América Latina, países no alineados y países de la comunidad socialista. La presencia del Presidente Allende en la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1972 y la recepción que allí se le prodigó, así como la profunda repercusión de su intervención, simbolizaron la dimensión y alcance de la política internacional del Gobierno de la Unidad Popular.

De esta forma, el Gobierno de la UP, al recoger las mejores tradiciones de independencia y democracia que se han forjado a lo largo de la historia de Chile como nación, imprimió un nivel cualitativamente superior, de acuerdo a los intereses nacionales, a las relaciones políticas, económicas y culturales de nuestro país con la comunidad internacional. Nunca antes Chile había estado tan conectado con todo el mundo y de una manera tan armónica y activa. Esta política y las importantes iniciativas que se promovieron afirmaron la independencia nacional del país, creando, con ello, un mejor terreno a la realización de las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales.

La victoria de la coalición de fuerzas reunidas en la Unidad Popular y la obra transformadora iniciada por el Gobierno del Presidente Allende, se llevaron a cabo dentro de la nueva situación que vive el mundo, fruto de la actual correlación de fuerzas sociales en su dimensión internacional. La existencia y creciente poderío de la comunidad socialista; la atracción e influencia cada vez mayor que ejercen las ideas del socialismo sobre los pueblos del más diferente nivel de desarrollo y la actividad política internacional de la Unión Soviética, han posibilitado y consolidado decenios de paz a escala mundial. La presen-

cia de Cuba socialista demuestra la posibilidad histórica de tal empresa en el continente; el notorio crecimiento, en amplitud y variedad, del antiimperialismo en América Latina; el auge del movimiento de independencia de las colonias subsistentes; el vigoroso papel de la clase obrera europea y la creciente influencia en su lucha de los comunistas y, en fin, el desarrollo del movimiento democrático en los propios Estados Unidos, son hechos que expresan igualmente esta nueva situación y que influyeron positivamente en el proceso chileno, y que posibilitaron su victoria, profundización y alcance internacional.

El desarrollo del proceso chileno sería impensable en un mundo en que no fueran tan poderosas las fuerzas de la paz y la distensión. Por otro lado, el torrente de simpatía, amistad y esperanza que suscitó en todos los pueblos, sería inconcebible en una etapa de la vida de la humanidad en que fuera el imperialismo quien determinara su destino sin contrapeso.

Consecuentes con los principios del internacionalismo proletario, la URSS y la mayor parte de los países socialistas, prestaron una ayuda decisiva para la realización de las transformaciones en diferentes sectores de la sociedad chilena, fundamentalmente en su economía. La ayuda de los países socialistas fue tangiblemente sentida y apreciada por nuestro pueblo. Los chilenos vieron cómo la flota pesquera soviética multiplicaba la disponibilidad real de proteínas para nuestro pueblo, cómo se empezaban a dominar los procesos tecnológicos de la industria del cobre, cómo se fabricaban casas económicas en serie, cómo surgían agroindustrias en el seno de la Reforma Agraria, cómo se formaban o perfeccionaban profesionales y técnicos. Cuba entregó su fraternal y cálida solidaridad en ayuda económica, en apoyo diplomático, cultural y social. El Gobierno Popular contó, también con la colaboración importante de los países no alineados, como México y muchos otros. Esta situación refleja los comunes intereses objetivos de los pueblos en la lucha antiimperialista, por la paz y el progreso social, que se libra de manera creciente en todos los continentes.

Chile echaba así las bases para una prosperidad cierta para su pueblo, basada en el esfuerzo de su trabajo, en la posibilidad real de ruptura de la dependencia económica y tecnológica del imperialismo, en la ayuda solidaria de las

fuerzas progresistas. Por eso, el imperialismo condenó a muerte a la experiencia chilena.

CADA DIA SE HACE MAS EVIDENTE que fue la interrelación entre la acción del imperialismo y de la reacción interna y los efectos de las insuficiencias del movimiento popular chileno, lo que condujo a la interrupción brutal y abrupta de la experiencia revolucionaria. El imperialismo fue quien ideó, enroló agentes, coordinó y controló la puesta en práctica de la acción contrarrevolucionaria permanente y sistemática en contra del Gobierno de la Unidad Popular. Suyas fueron las elaboraciones estratégicas, la determinación de las etapas y de las formas de lucha. Para ello hizo intervenir en forma permanente a la CIA, brazo ejecutor de los designios terroristas del imperialismo. La acción de éste se desarrolló simultáneamente en varios planos, en los marcos de una estrategia única con una dirección centralizada establecida al más alto nivel, que dispuso de una cantidad prácticamente ilimitada de recursos. Tales hechos han sido corroborados en el Informe elaborado por la Comisión del Senado de Estados Unidos, dirigida por Frank Church, que investigó las actividades de la CIA en Chile durante el Gobierno de la Unidad Popular. En la elaboración y concreción de la política decidida en contra del Gobierno de Allende tomó parte activa el Consejo Nacional de Seguridad y su subcomité, «Comité 40», en el cual se unificó la acción de los departamentos correspondientes de la Casa Blanca, los organismos de inteligencia, el Pentágono, el Departamento de Estado y las Fuerzas Armadas, bajo la presidencia de Henry Kissinger y con el conocimiento y la aprobación directa de los pasos que se daban por parte del Presidente Richard Nixon.

Parte de esta maquinaria de demolición había sido denunciada por el propio Presidente Allende, a propósito de la publicación de los documentos secretos de la ITT, los que contenían planes precisos para impedir su acceso a la Primera Magistratura de la República en 1970.

Su acción en contra del Gobierno Popular fue preparada por una actividad sistemática de años. En 1965, por ejemplo, el país había sido conmovido al denunciarse públicamente por el Partido Comunista un plan de investigación social —el Plan Camelot—, a realizarse en combinación con centros



10 7416-5

universitarios chilenos, por el Pentágono y la American Society University, con el objetivo preciso de determinar las potencialidades revolucionarias existentes y, obviamente, tomar posteriormente las contramedidas correspondientes. La actividad del imperialismo en todos estos años se desarrolló a través de los medios más variados: utilizando los «cuerpos de paz», en función de centro de información y a la vez de penetración en el seno de las masas; a través de las centrales sindicales norteamericanas, intentando penetrar y dividir el movimiento sindical chileno; financiando parte apreciable de las investigaciones que se efectuaban en los centros universitarios del país, etc. En el propio «Comité 40», el tema de Chile se había puesto en tabla con mucha anticipación al triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales, hecho que conviene siempre tener presente porque destruye los esfuerzos permanentes realizados por los propagandistas imperialistas que intentan justificar las medidas adoptadas en supuestas acciones en contra de sus intereses realizadas por el Gobierno Popular. Incluso en el «Comité 303», predecesor del «Comité 40», como constata el citado Informe Church, se había considerado si debía hacerse algo respecto de las elecciones presidenciales en Chile, para impedir un triunfo popular que se veía como posible.

Uno de los mecanismos más graves y que más provecho les ha reportado, es el proceso de penetración en las Fuerzas Armadas, a través de los más diversos y complementarios caminos. Este proceso se ha llevado a cabo en el marco de la reaccionaria estrategia de «seguridad hemisférica» y a través de un sistemático adoctrinamiento anticomunista e instrucción «antisubversiva», encaminados a utilizar a los institutos armados, en última instancia, en la defensa directa de sus intereses.

En 1952, durante el régimen de traición nacional de González Videla, Chile había suscrito con Estados Unidos un pacto bilateral de defensa mutua, pasando así a formar parte del programa de asistencia militar norteamericano. Este programa, a poco andar, y en especial después del triunfo de la Revolución Cubana, destinó la mayor parte de sus recursos a preparar las fuerzas armadas chilenas para enfrentar a su propio pueblo. Chile fue uno de los países latinoamericanos que recibió, tanto en monto globales como

per cápita, mayor cantidad de esta «ayuda». Entre 1950 y 1968, 2.064 militares chilenos fueron entrenados en Estados Unidos y 549 lo fueron en las bases de la zona del Canal de Panamá. En 1968, como lo constatan documentos oficiales norteamericanos, la preparación de militares chilenos en Panamá se intensificó, tendencia que se mantuvo entre 1970 y 1973. En esos mismos años las cantidades de ventas de pertrechos militares también se incrementaron. En julio de 1969, según consta en el Informe Church, «la Estación de la CIA en Santiago requirió y recibió la aprobación del Cuartel General para un programa secreto destinado a establecer una red de agentes de inteligencia en los servicios armados de Chile con el propósito de organizar un complot pro-golpe. El programa duró cuatro años; incluía agentes en las tres ramas de las FF. AA. de Chile e incluía comandantes, tenientes, generales en retiro, oficiales administrativos y tropa... A fines de 1971 y comienzos de 1972, la CIA adoptó una actitud más activa ante su programa de penetración militar... Los informes del Servicio de Inteligencia sobre el planeamiento del golpe tuvieron dos períodos cumbres: uno en la última semana de junio de 1973 (para la sublevación del Regimiento Blindado de tanques de Santiago. *N. del A.*) y el otro a fines de agosto y las dos primeras semanas de septiembre»[1].

El imperialismo realizó, igualmente, una sistemática labor de financiamiento de políticos y medios de prensa de la reacción, institutos de capacitación sindical y estudiantil, en el marco de planes a escala continental.

El «Comité 40» –se dice en el Informe Church– aprobó grandes sumas para sostener a los medios de difusión de la oposición y así mantener una dura campaña propagandística. Esta «ayuda» se entregó bajo el pretexto inconsistente de que en Chile, durante el Gobierno Popular, la libertad de prensa se encontraría amenazada. En la misma dirección se movilizó la Asociación Interamericana de Prensa, en la cual desempeñan un rol dominante los órganos de prensa más reaccionarios del continente. «De acuerdo a los documentos de la CIA –se constata en el Informe–, esos esfuerzos jugaron un rol significativo en la preparación del escenario para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973»[2].

Para el imperialismo la derrota del Gobierno Popular

10*

pasó a ser de primera importancia. Su logro tenía una relevancia que iba mucho más allá de la simple defensa de sus intereses económicos en Chile: el imperialismo perseguía, en primer término, impedir que la experiencia revolucionaria en desarrollo tuviese repercusiones en otros países, en especial que influyese en la evolución futura de América Latina. Esta preocupación del Gobierno y los organismos de inteligencia de Estados Unidos se aprecia claramente en un memorándum preparado, pocos días después del triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales, por la CIA.

«En lo relativo a amenazas para los intereses de los Estados Unidos —se señala en dicha evaluación— concluimos que: 1. Los Estados Unidos no tienen intereses nacionales vitales en Chile. Sin embargo, habría tangibles pérdidas económicas. 2. El equilibrio mundial de poder militar no se vería alterado en medida significativa por un Gobierno de Allende. 3. Una victoria de Allende, sin embargo, provocaría considerables costos políticos y sicológicos: a) La cohesión del hemisferio se vería amenazada por el reto a la OEA que significaría un Gobierno de Allende, y por las reacciones provocadas en otros países... b) Una victoria de Allende representaría un definido revés sicológico para los Estados Unidos, y un definitivo avance sicológico para la ideología marxista»[3]. En ello influía, de otra parte, la repercusión internacional del proceso revolucionario chileno, que mostraba la posibilidad real de la clase obrera de avanzar al poder por la vía pacífica y que se desarrollaba produciendo transformaciones de estructura mediante la profunda modificación del aparato de gobierno que se había dado la burguesía.

A LA FINALIDAD CENTRAL del imperialismo se sumaba, desde luego, además, la defensa de los intereses en Chile de grandes empresas transnacionales. Chile era en 1970 un país dependiente, monoexportador en alto grado. Sus importaciones —particularmente aquellas que tenían una significación más estratégica—, provenían en alto porcentaje de los Estados Unidos; su sistema financiero era un apéndice del sistema financiero norteamericano; su tradicional déficit en las balanzas comercial y de pagos se saldaba con endeudamiento externo y propiciando el ingreso indiscriminado del capital extranjero. El capital imperialista tenía una

presencia decisiva en los renglones económicos básicos. En la década de los años sesenta se habían extendido fuertemente las inversiones norteamericanas a los sectores industriales más dinámicos, manteniendo simultáneamente las importantes posiciones tradicionales de los monopolios yanquis en el sector minero. En 1968, el capital extranjero controlaba más de la sexta parte del capital pagado de todo el sector manufacturero; entre las cien mayores empresas, 61 tenían participación extranjera y en 40 esa participación implicaba su pleno control[4].

El país era una fuente de elevadas utilidades para los capitales foráneos invertidos en él. El Presidente Allende, al intervenir el día en que se nacionalizó los minerales de la Gran Minería del Cobre, destacó que las utilidades obtenidas en ella por las compañías norteamericanas entre 1930 y 1970 alcanzaron a 1.576 millones de dólares, mientras que los valores no retornados en ese mismo período llegaron a 2.673 millones de dólares, con inversiones iniciales que se han estimado en sumas que fluctúan entre los 50 a 80 millones de dólares.[5]

Las utilidades de otros monopolios transnacionales, como la ITT, por ejemplo, que jugó un papel tan activo en las actividades golpistas, eran igualmente crecientes. Y no sólo eso, sino que, además, se preparaban, como lo estableció la Comisión Investigadora formada en la Cámara de Diputados para investigar las actividades de este consorcio norteamericano en Chile al momento de triunfar el Gobierno Popular, para penetrar en numerosas actividades económicas nacionales. Ese era el caso de la propia ITT «en las industrias de la celulosa y del papel, equipos electrónicos y eléctricos, en la manufactura del cobre, en la fabricación de neumáticos, en el negocio del salitre y hasta en la construcción de viviendas económicas y en la industria de la sal»[6].

Iniciado el Gobierno, el imperialismo trató de impedir, utilizando cualquier método, las transformaciones que se realizaban en el país. En particular, intentó evitar las medidas que tenían más posibilidades de difusión a otros países, tal aconteció, por ejemplo, con la «Doctrina Allende».

La repercusión que podía tener para los monopolios transnacionales la divulgación en los países dependientes de los principios aplicados para nacionalizar la Gran Mi-

nería del Cobre —que dio lugar a dicha doctrina— era muy grande. El imperialismo sabía que, de consolidarse su aplicación, sus efectos no sólo los sentiría en Chile. Más todavía, ello era decisivo en momentos que crecía el rechazo entre los pueblos y gobiernos de Asia, Africa y América Latina a las acciones del imperialismo que pretendía impedir la nacionalización de las riquezas básicas en los países dependientes.

Por eso, siendo la nacionalización de sus inversiones en terceros países un golpe que los monopolios transnacionales sienten fuertemente, lo es todavía más cuando dicha nacionalización se efectúa no sólo teniendo en cuenta el presente —el valor de ese momento de las inversiones controladas— sino que además se realiza tomando en consideración las utilidades que se han percibido en el pasado por encima de las tasas que se pueden considerar como normales. La «Doctrina Allende» lesionaba la base de la acción del capital imperialista. En la promulgación de la Reforma Constitucional —aprobada unánimemente en el Parlamento— que hizo posible la nacionalización de la Gran Minería del Cobre se estableció, como facultad privativa del Presidente de la República, la posibilidad de disponer que de los cálculos que debían efectuarse por el Contralor General para determinar el monto de las indemnizaciones a pagar, fuese posible deducir «el todo o parte de las rentabilidades excesivas» que las filiales de los monopolios norteamericanos en Chile «hubiesen devengado anualmente» a partir de mayo de 1955. La determinación, asimismo, del nivel por encima del cual se consideraría como rentabilidad excesiva las utilidades alcanzadas por dichas filiales quedaba también entregada al Presidente Allende. Esto permitía, por lo tanto, que el país recuperase por estas vías parte de los cuantiosos beneficios que los monopolios norteamericanos habían extraído en los últimos 15 años.

Las inversiones realizadas por los monopolios norteamericanos en Chile eran varias veces inferiores a las utilidades remesadas. Pero no sólo eso. Tanto en el caso de The Anaconda Company, como en el de la Kennecott Copper Corporation, que eran los monopolios norteamericanos que explotaban los principales minerales chilenos de cobre, la rentabilidad de sus filiales en Chile era muy superior a la obtenida para el conjunto de sus relaciones internaciona-

les. Una filial de Anaconda, por ejemplo, entre 1955 y 1970, obtuvo en nuestro país una utilidad promedio del 21,5 % anual sobre su valor de libros, mientras las utilidades de Anaconda en otros países alcanzaba a sólo un 3,6 % al año. Mayores eran, todavía, las utilidades de la filial de Kennecott, la cual, en el mismo período, obtuvo una utilidad promedio de 52,8 % anual, llegando en algunos años a utilidades del orden del 100 % e incluso más del 200 % anual, como aconteció en 1969, mientras el promedio de las utilidades que registraba en otros países llegaba a menos del 10 % en doce meses. Por eso, como dijo el Presidente Allende, «las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los últimos quince años algunas de las empresas nacionalizadas eran tan exorbitantes que, al aplicarse como límite de utilidad razonable el 12 % anual, esas empresas fueron afectadas por deducciones de significación»[7]. Anaconda y Kennecott, aplicado el monto a descontar a la indemnización que les correspondía, pasaron a ser deudoras del Gobierno chileno.

Para evitar que estos principios se propagasen en otros países dependientes, las compañías norteamericanas del cobre y el Gobierno de los Estados Unidos desplegaron una gigantesca nueva agresión contra Chile. Anaconda procedió a embargar bienes chilenos en Estados Unidos. Kennecott, por su parte, inició acciones de embargo sobre el cobre físico o los valores que generaba su venta en Francia, Holanda y Suecia. Se trataba de producir el ahogo financiero del país sobre la base de impedir la afluencia de recursos externos que el cobre significa para Chile y lesionar asimismo todo el proceso de comercialización externo de este mineral. «Obviamente —comentaba *Time* en esos días— la ofensiva de Kennecott perjudicará posiblemente las futuras ventas de cobre a los clientes que no deseen arriesgar disputas legales y posiblemente atrasos costosos en las entregas.» La acción fue desplegada como un operativo bélico. «Los ejecutivos de Kennecott —agregaba el mismo *Time*— están decididos a mantener esta situación candente sobre Chile. La Oficina de Manhattan del Consejero General, Pierce McCreary, que está dirigiendo la campaña, tiene el aspecto de una sala de guerra. Su escritorio está sembrado de informes de embarques y sobre una pared cuelga un gran mapa para marcar las rutas de los barcos. Actual-

mente está observando los movimientos de por lo menos seis barcos que se dirigen a Europa cargados con el mineral...; cuando lleguen enviará a sus agentes para allí recibirlos con órdenes judiciales.»[8]

Es claro, la ofensiva no quedó entregada únicamente a lo que realizasen los monopolios directamente afectados. El Gobierno de Estados Unidos intentó condicionar la renegociación de la deuda externa chilena a que se pagase a los monopolios norteamericanos una indemnización violando las disposiciones constitucionales que rigieron al acto de nacionalización. Con el mismo propósito trató de condicionar el otorgamiento de créditos en organismos financieros internacionales como el BIRF y el BID.

Toda esta ofensiva concreta del imperialismo en contra de la nacionalización del cobre y la «Doctrina Allende» no tiene en sí nada de sorprendente. Siempre se va a jugar a fondo en la defensa de sus intereses cuando ellos se encuentren amagados. Hacerle frente, es claro, exigía una política externa de nuevo tipo, tanto desde el punto de vista de las relaciones internacionales a seguir, como en relación a un manejo de acuerdo al interés nacional del comercio exterior y de los recursos con que el país contaba en moneda extranjera. Ello, desde luego, se encontraba directamente vinculado a las transformaciones estructurales que tenían lugar, las cuales posibilitaban la aplicación de una política exterior independiente.

La nacionalización del cobre, hierro y salitre puso en manos de empresas estatales la mayor parte de las exportaciones del país. En 1971 empresas estatales realizaban el 84 % aproximadamente de las exportaciones totales. En el programa de exportaciones que se encontraba en aplicación en 1973 ese porcentaje subía al 93 %. En cuanto a las importaciones, en 1971 el 55 % de ellas eran efectuadas por empresas del Estado, porcentaje que creció en 1973 hasta el 76 %. El peso dominante del Estado en las operaciones de comercio exterior tuvo una gran importancia para avanzar en este sector en formas elementales de planificación, para cambiar la estructura deformada del comercio exterior chileno, disminuyendo el peso total de Estados Unidos en él, desarrollando en cambio el comercio con nuevas áreas y también para enfrentar las acciones agresivas del imperialismo.

La nacionalización del cobre permitió igualmente dar un paso decisivo en el manejo centralizado por el Estado de los recursos que el país generaba en moneda extranjera, ya que hasta entonces una buena parte de dichos fondos circulaba a través de las cuentas en el exterior de Anaconda y Kennecott. Proceso que se completó con la nacionalización del sistema bancario.

De esta manera el país avanzó ampliamente en la dirección centralizada de comercio exterior y del financiamiento externo. De la misma manera se comenzó a crear una estructura estatal para el comercio exterior con la cual hasta entonces el país no contaba. El conjunto de la política del Gobierno de la Unidad Popular permitía, por lo tanto, mantener relaciones internacionales sobre una nueva base.

LA AMPLITUD Y EFICACIA de la acción contrarrevolucionaria orquestada por el imperialismo contra el movimiento popular chileno y su Gobierno se posibilitó, en definitiva, por la insuficiencia de las fuerzas revolucionarias y sus aliados para contrarrestarla. En el fondo había una subvaloración real de enemigo principal, resultante de insuficiencias respecto a la cabal comprensión teórica y práctica del rol y peligrosidad del imperialismo. Esta insuficiencia se vincula con aquella relativa al desconocimiento de las características fundamentales de la estructura de la sociedad chilena. Ello era causado en gran medida por la sobrevaloración unilateral de algunas particularidades de ésta, ya sea asignándole un peso desmedido a la posibilidad de cambios revolucionarios apoyándose en su institucionalidad sofisticada; ya sea, por otro lado, apreciando de manera excluyente la capacidad de la clase obrera de sostener por sí sola el proceso revolucionario en su conjunto. En definitiva, la existencia y papel de estas insuficiencias estuvo determinada por la falta de una mayor decisión de las fuerzas revolucionarias para apoyarse en las masas para su adecuada resolución.

Jugó igualmente un papel negativo la actitud prejuiciada de algunos sectores respecto del rol importante que tiene la solución de los problemas económicos en el camino hacia el poder y sobre el papel que la ayuda de los países de la comunidad socialista podía jugar en ello, lo que en

los hechos creaba un espacio adicional de posibilidades a la acción «desestabilizadora» que el imperialismo y la oligarquía llevaban a cabo especialmente en el plano de la economía, para proyectar sus efectos a todas las esferas de la vida social[9].

La política de «desestabilización» llevada a cabo sistemáticamente por el imperialismo se apoyaba en un conocimiento cabal de la estructura de la economía chilena y de las limitaciones que ella tenía como consecuencia de las fuertes relaciones de dependencia tradicionales. Cuando Richard Nixon señaló que se debía «hacer aullar» la economía chilena no lanzaba una mera frase al aire. Las amarras de la dependencia eran muy firmes y cortarlas implicaba realizar un esfuerzo grande y complejo. En el período 1955–1970, por ejemplo, el 37 % de las importaciones que realizaba el país se efectuaban desde los Estados Unidos, porcentaje que aumentaba en el caso de los bienes de capital a aproximadamente un 50 %. Cifras que no dan todavía una dimensión real del significado que tenía la decisión de «no permitir que ni un tornillo, ni una tuerca llegue a Chile». Para darse cuenta de toda su implicancia hay que analizar cualitativamente estas importaciones y su carácter en muchos casos difícilmente sustituible. Las importaciones para la gran minería cuprífera provenían en más de un 90 % de Estados Unidos, siendo los equipos utilizados para su explotación básicamente norteamericanos. En el caso del petróleo el 87 % de sus repuestos provenían igualmente de EE. UU. Otro tanto acontecía en otros sectores de la minería.

Esta dependencia se daba igualmente en el sector financiero con una gran crudeza. Prácticamente todo el sistema financiero externo de corto plazo del país estaba diseñado como apéndice de las grandes instituciones bancarias norteamericanas. En créditos a largo plazo el país recibía igualmente en lo fundamental su financiamiento tanto del Gobierno de Estados Unidos como de los organismos financieros crediticios internacionales en los cuales la presencia norteamericana es particularmente relevante y, en muchos casos, decisiva. Obviamente que todo este financiamiento se otorgaba condicionado a los objetivos estratégicos que el imperialismo tenía en Chile.

Aplicando la política «desestabilizadora» trazada, el sis-

tema bancario norteamericano procedió a cortar la mayor parte del financiamiento de corto plazo. Se ha calculado que las líneas de crédito de corto plazo descendieron rápidamente, de más de 300 millones de dólares existentes antes del 4 de septiembre de 1970, a apenas 32 millones de dólares. El Gobierno norteamericano y la mayoría de los organismos internacionales de crédito, en los cuales su presencia es determinante, procedieron, en los hechos, a suspender el otorgamiento de cualquier crédito a Chile. En el plano comercial esta política de «desestabilización» se manifestó en crecientes dificultades para importar aquellas mercancías cuya sustitución de otro país resultaba más improbable. A lo que se agregaron los embargos y otras acciones de la misma naturaleza llevadas a cabo contra las exportaciones chilenas, especialmente las de cobre.

El bloqueo económico causó graves daños. A través de estas acciones «desestabilizadoras» y los problemas generados con ellas, no hay duda, se facilitaron las actividades sediciosas fascistas y el trabajo a fin de obtener apoyo de masas para los planes golpistas en sectores importantes de la población. Con todo, el bloqueo como tal, en lo fundamental fue roto. Hecho que es significativo porque revela las posibilidades que tienen en la actualidad, en el contexto internacional existente, países como Chile para marchar en forma independiente, haciendo frente a los planes económicos agresivos del imperialismo. La composición geográfica del comercio exterior se fue modificando radicalmente. El monto de las importaciones efectuadas desde Estados Unidos disminuyó fuertemente. Los suministros de materias primas, repuestos y equipos se aseguraron en otros mercados. Las exportaciones, por su parte, salvo en los períodos que se hicieron efectivos los embargos demandados por la Kennecott, se desarrollaron normalmente. El financiamiento de corto plazo fue reestructurado, en base a acuerdos con la banca de los países socialistas, de diferentes naciones de América Latina y de Europa capitalista.

El quiebre del bloqueo económico demostró —como también lo han probado otros procesos revolucionarios, en especial la experiencia de la revolución cubana— que en nuestro tiempo los monopolios norteamericanos no son omnipotentes. Un país que decida avanzar por un camino independiente, rompiendo las ataduras de la dependencia,

cuenta con múltiples puntos de apoyo, como consecuencia de los cambios acaecidos en la correlación de fuerzas en el mundo. En primer lugar, cuenta con el apoyo de los países socialistas. En la experiencia chilena se evidenciaron, también, las grandes posibilidades existentes en el incremento de las relaciones económicas entre los países latinoamericanos, posibilidades que hasta ahora, en no poca medida, se mantienen ocultas, porque las relaciones económicas de nuestros países se realizan en un alto porcentaje hacia y desde los Estados Unidos. De la misma manera, quedó en claro que el campo imperialista debido a sus propias contradicciones no es homogéneo: las relaciones entre Chile y varios países capitalistas desarrollados evolucionaron en condiciones normales y, en algunos casos, incluso se incrementaron.

DURANTE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR, la solidaridad internacional se expresó de mil formas, yendo desde la derrota de las maniobras imperialistas tales como el embargo de cargamentos de cobre chileno en puertos extranjeros, hasta formas tan variadas como fue, entre otras muchas, la fundación de un «Museo de la Solidaridad» al que donaron obras artistas de renombre universal.

La magnitud que ella ha alcanzado luego del golpe fascista no puede desligarse de la significación internacional que tuvo el Gobierno Popular. Esta repercusión, en sectores muy amplios, se alcanzó sin hacer concesiones en materias de principio. Por el contrario, su logro es un producto de la consecuente política internacional seguida por el Gobierno de Salvador Allende.

La Unidad Popular —amplia alianza política y social— se forjó, ganó el gobierno de Chile y efectuó profundas transformaciones ampliando sus relaciones con la URSS, sin hacer concesiones al antisovietismo. Su existencia y avance eran un ejemplo estimulante para los pueblos que buscan la independencia y progreso social y, a pesar de que su permanencia fue sólo de tres años, sus éxitos ratificaron en forma práctica que, en la época actual, la «desestabilización» imperialista que llega a las formas más brutales de bloqueo y sabotaje, si bien crea indudables problemas no es incontrarrestable al darse la unión dialéctica de la conciencia y esfuerzo de los pueblos y la ayuda solidaria

de las fuerzas progresistas y democráticas del mundo. El contraste entre la política del Gobierno Popular —progresista y renovadora— y la de la Junta fascista —de terror y miseria—, salta a la vista: la Junta fascista ha conducido a Chile al más profundo aislamiento internacional, debilitando incluso elementos esenciales de la defensa nacional, y reforzando la estrecha dependencia respecto del imperialismo norteamericano. En las condiciones de nuestra época se produce así la necesaria relación dialéctica entre el antipatriotismo y el belicismo internacional —como lo demuestra la política del fascismo chileno— y, por el contrario, se produce la relación dialéctica entre el patriotismo y el internacionalismo consecuentes, como lo demuestran las experiencias del Gobierno de la Unidad Popular y de la lucha antifascista del pueblo chileno que recibe el apoyo mayoritario de la humanidad.

[1] Informe de la Comisión Church. *Boletín Informativo*, n.º 84, Comité Chileno de Solidaridad, La Habana, Cuba, febrero de 1976.

[2] Ibid.

[3] Informe de la Comisión Church. *Boletin Informativo*, n.º 85, Comité Chileno de Solidaridad, La Habana, Cuba, febrero-marzo de 1976.

[4] *Boletin Mensual.* Banco Central de Chile, abril de 1971.

[5] Salvador Allende. *Discursos*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pág. 131.

[6] *Principios*, n.º 146, julio-agosto de 1972, pág. 51.

[7] Salvador Allende. *Discursos*, pág. 536.

[8] *Time*, 6 de noviembre de 1972.

[9] Véase al respecto el artículo de Orlando Millas. «La "desestabilización" de la economía, arma táctica del imperialismo», *Revista Internacional*, n.º 11, 1975, pág. 59.

# COMO SE DIO EN CHILE LA VIA NO ARMADA

**Luis CORVALAN,**
Secretario General del Partido Comunista de Chile

ONCE AÑOS DESPUES de la Revolución Cubana, el pueblo chileno conquistó una parte del poder político. En esa posición se mantuvo durante tres años y llevó a cabo las principales transformaciones estructurales de la revolución antiimperialista y antioligárquica con vista al socialismo. Los cambios realizados en ese período despertaron interés en todo el mundo, especialmente por el hecho de que la Revolución Chilena se abrió paso por una vía pacífica que nosotros, comunistas chilenos, preferimos llamar no armada (porque después de todo, en la práctica, no es tan pacífica). Ese interés se acrecentó por una circunstancia adicional, porque el Gobierno que encabezó el Presidente Allende fue generado e integrado por un movimiento popular en el cual participaron varios partidos, diversas corrientes democráticas, unidos en torno a un programa común.

La posibilidad de la revolución pacífica fue vislumbrada por Marx. En 1917, los revolucionarios rusos, dirigidos por Lenin, consideraron dos veces posible el desarrollo pacífico de la revolución y actuaron en tal sentido. Lenin le prestó mucha atención a esta vía, no obstante que, en las condiciones de ese tiempo, calificara su posibilidad de sumamente rara. El movimiento comunista internacional la estima ahora más probable, en virtud de las nuevas condiciones internacionales. Ella se materializó en nuestro país con y a partir del triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales de 1970. Algunas otras revoluciones se habían desarrollado por la vía pacífica, pero fueron de corta duración o transcurrieron en las condiciones específicas creadas por la derrota militar del nazifascismo. En nuestro

país, la tesis sobre dicha vía fue corroborada por la experiencia de tres años.

La Revolución Chilena fue transitoriamente derrotada. Pero, el desenlace que tuvo no desaloja la tesis de que en otros países –y quizás si hasta en Chile– la clase obrera y sus aliados puedan conquistar el poder político y hacer la revolución por una vía no armada.

De ahí que la experiencia chilena sea considerada atentamente por los revolucionarios de muchos países. En lo que respecta a nosotros, consideramos de nuestro deber sacar las conclusiones debidas de todo el proceso revolucionario que impulsáramos con éxito durante un prolongado período y de las causas de su derrota.

*

EL PUEBLO CHILENO puso un pie en el poder del Estado mediante la conquista de la Presidencia de la República y no de «una mayoría estable en el Parlamento», como preveía la Declaración de la Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros de 1960 en su formulación de la tesis sobre la vía pacífica. Recordamos esto, plenamente convencidos de la importancia y validez del contenido de esa Declaración, sólo para subrayar que la realidad presenta más variedad y riqueza que las tesis –aunque éstas sean justas en su esencia–, y para destacar la multiplicidad de formas, procedimientos y métodos de la Revolución de que hablaba Lenin, comentando la amplitud de criterio de Marx.

Lo fundamental de nuestra experiencia reside, sin embargo, en otra cosa: confirma que la clase obrera puede llevar adelante la revolución, cualquiera que sea la vía, si impulsa la lucha de clases, concentra el fuego contra los enemigos principales, promueve los cambios que maduran en la sociedad y, así, une a su alrededor a la mayoría del pueblo, creando una correlación de fuerzas que le permita vencer a la reacción y atarle las manos.

El Pleno de Agosto de 1977 del Comité Central de nuestro Partido llegó a la conclusión que, en especial, *la experiencia chilena demuestra la importancia de resolver ante todo el problema de quién aísla a quién, de quién es, en definitiva, más fuerte, si la clase obrera y sus aliados o la reac-*

ción y los suyos. *Todos los problemas de la Revolución Chilena, los que resolvió y los que no resolvió, estuvieron ligados a esta cuestión.*

El primer pie en el poder, esto es la conquista de la Presidencia de la República, fue puesto por la clase obrera y sus aliados, por la Unidad Popular, luego de ganar las elecciones presidenciales de 1970 sólo por una mayoría relativa. En efecto, Salvador Allende triunfó con el 36,3 % de los votos, que fue el más alto porcentaje de sufragios entre los tres candidatos que se presentaron a esa contienda. Dicho resultado no decidía de por sí la posesión de la Presidencia de la República, porque, al no lograr la mayoria absoluta, la resolución final correspondía al Parlamento y, sobre todo, porque ese 36,3 % demostraba que la clase obrera y sus aliados necesitaban ganar nuevos sectores sociales, ampliar su red de alianzas, a fin de lograr una correlación de fuerzas que permitiera asegurar el acceso a la Presidencia de la República e iniciar las transformaciones contempladas en el programa de la Unidad Popular. Tal necesidad fue tanto o más perentoria cuando se hicieron evidentes los planes del imperialismo y la reacción chilena dirigidos a impedir que Salvador Allende tomara posesión del cargo de Jefe del Estado.

Ello fue comprendido por el conjunto de la Unidad Popular y se actuó en consecuencia. Los trabajadores y las masas populares salieron a la calle y buscaron, en todos los ámbitos, el contacto y el entendimiento con aquellos sectores democráticos que, aunque no votaron por Salvador Allende, eran partidarios de que se reconociera su triunfo. Estos últimos pensaban así por diversas razones: algunos por mantener la tradición nunca alterada de confirmar la primera mayoría, otros por temor al pueblo que no estaba dispuesto a que se escamoteara su victoria y, los más, porque tenían afinidades con el programa de la Unidad Popular y preferían a Salvador Allende antes que al candidato de la derecha que había obtenido la segunda mayoría. De esta manera, la primera mayoría relativa se transformó, en la práctica, en mayoría absoluta, se conformó una correlación de fuerzas a favor de la Unidad Popular, la derecha aislada se vio impedida de ahogar en su cuna a la Revolución. Entonces fracasaron sus iniciativas en el terreno militar, sobre todo porque estaba derrotada políticamente.

En el Informe a nuestro Pleno de agosto se dice: «Los éxitos logrados en los sesenta días cruciales que van desde la elección presidencial hasta la toma de posesión de la Presidencia de la República, y los que se obtuvieron en todo un primer período durante aproximadamente un año, respondieron, por una parte, al vasto apoyo nacional que tenían los objetivos inmediatos que se trazaba el movimiento popular, a la movilización de masas desarrollada para alcanzarlos, a la unidad y cohesión demostrada en lo fundamental y en ese período por la Unidad Popular y, por otra parte, a que ésta buscó y logró con otras fuerzas acuerdos y compromisos que resultaban objetivamente necesarios».[1] Estos se concretaron con la Democracia Cristiana y consistieron, primero, en un pacto de garantías constitucionales y, más tarde, en otro de reforma a la Constitución para nacionalizar el cobre.

Hubo gente de izquierda, dentro y fuera de nuestro país que, desde posiciones dogmáticas y hasta anticomunistas, le negaban al pueblo chileno toda posibilidad de victoria por la vía no armada. Tampoco faltaron aquellos que, una vez obtenida esta victoria, la interpretaron como un error de cálculo de la derecha que en esta ocasión –1970– presentó su propio candidato, a diferencia de lo que había hecho en la elección presidencial de 1964. La verdad sea dicha: la victoria popular de 1970 fue el producto de una larga y sostenida batalla política en favor de la unidad de la clase obrera, del entendimiento socialista-comunista, de la agrupación de los partidos populares y de la acción común de los más amplios sectores democráticos, al mismo tiempo que de la lucha política e ideológica contra posiciones de «izquierda» y de derecha en el seno del movimiento popular, de una justa política en cuanto a definir el carácter de la revolución chilena y sus etapas, de una formulación adecuada de los objetivos programáticos, de una correcta definición de los enemigos fundamentales y de una acertada apreciación de las contradicciones principales y secundarias en la sociedad chilena.

El cambio en la correlación de fuerzas, operado en favor de la Unidad Popular, luego de la elección de Salvador Allende, tuvo mucho que ver con tan larga y sostenida batalla. Esta había logrado no sólo agrupar en torno a la Unidad Popular al más vasto contingente de nuestro

11 7416 - 5

pueblo, sino que también se había proyectado hacia otros sectores sociales y políticos. Durante la campaña presidencial, la Democracia Cristiana coincidió con la Unidad Popular en objetivos tan importantes como la nacionalización del cobre y la culminación de la reforma agraria. Muchos de sus militantes, tomando en cuenta su propia experiencia, consideraban indispensable también la profundización de los cambios y, por boca de su candidato, Radomiro Tomic, hasta proclamaban que el capitalismo era incapaz de resolver los problemas del país. En estas condiciones fue posible que, pasadas las elecciones, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular llegaran a acuerdos, que el entendimiento se abriera camino en los más amplios sectores democráticos, modificándose así la correlación de fuerzas en favor del pueblo.

La clase obrera y el pueblo de Chile pusieron sus fuerzas en tensión, desplegaron sus iniciativas creadoras, lucharon abnegadamente en favor del éxito del Gobierno Popular y de la realización de su programa. Los trabajadores, la juventud, las mujeres, los artistas, escribieron páginas de heroísmo en el trabajo, en la organización del nuevo orden de cosas, en la distribución de los productos que escaseaban, en la batalla contra cada arremetida reaccionaria. Se demostró una vez más que la revolución libera muchas energías, que el pueblo es capaz de las mayores proezas cuando vislumbra un porvenir mejor. Millones de chilenos trabajaron en esa dirección hasta el final.

Bien se sabe que la revolución lleva consigo el peligro de la contrarrevolución. Esta se abre paso cuando los revolucionarios pierden la iniciativa, cuando la revolución se atasca y pasa a la defensiva, en definitiva cuando la correlación de fuerzas cambia en favor de sus enemigos. En Chile, se produjo este fenómeno tras un período de ascenso del movimiento popular, de una etapa de grandes transformaciones democráticas, en la cual primaban los éxitos y aciertos y la política del Gobierno Popular contaba con suficiente apoyo de masas. La situación se invirtió por diversos factores que entraron en juego, algunos de los cuales —como el alza desorbitada del precio de los productos de importación y la baja considerable del precio de los productos de exportación— escapaban al control del Gobierno y de la Unidad Popular. Este tipo de factores y, en especial,

los planes del enemigo, que hacía lo suyo, pesaron objetivamente. Pero, sin duda, los revolucionarios debemos centrar el análisis de las causas profundas y reales de la derrota sufrida por nuestro pueblo, en descubrir y examinar cuáles fueron los errores nuestros que permitieron al imperialismo y a la reacción cumplir sus objetivos.

En la Unidad Popular se agrupaban —y se agrupan— fuerzas de diferente procedencia social y de distintas ideologías, marxistas, racionalistas y cristianos. Este era y es un hecho positivo, reflejo de la amplitud de la alianza construida en torno a la clase obrera. En tal hecho, en la unidad de la coalición, estaba la fuerza del pueblo. Pero dicha unidad, para que sea consistente, debe estar basada en un programa común y en una dirección política también común y acertada, que es más sólida si opera la hegemonía de la clase obrera. Cuando hubo esa dirección y se luchó resueltamente por aplicar el programa, las cosas marcharon bien en términos generales. Cuando tales requisitos se cumplieron a medias, empezaron a descomponerse.

Los integrantes del movimiento popular no concordábamos plenamente en todo. A medida que la revolución entraba en dificultades, era más necesaria la unidad de pensamiento y acción; pero, precisamente entonces las discrepancias se hicieron más agudas. En el interior de la Unidad Popular se ampliaron las posiciones divergentes respecto a una serie de problemas y ello conspiraba contra la política de unir a todo el pueblo alrededor de la clase obrera. De esta manera, se socavaba la fuerza real del proceso. Así, paulatinamente, se iba desdibujando el programa. Ya no se dirigían todos los efectivos del movimiento popular a dar golpes decisivos al imperialismo, a los monopolios, a la oligarquía terrateniente, sino que se establecía también una pugna con los sectores medios que en la primera etapa habían sido en parte ganados y en parte neutralizados.

La reacción pudo pasar a la ofensiva cuando, en buena medida a raíz de nuestros errores en la conducción política, tuvo la posibilidad de salir de su aislamiento conformando un frente con estos sectores medios y extendiendo su influencia incluso a determinados grupos proletarios. No todos comprendieron que la fuerza del Gobierno y de la Unidad Popular radicaba en su programa, en la medida

que ese programa era el fundamento estratégico de la conducción política correcta.

Cuando esta dirección acertada se impuso, el pueblo tuvo fuerzas para aislar y derrotar a sus enemigos. Cuando las transgresiones al programa se transformaron, en los hechos, en un segundo programa, las diferencias de opinión sobre asuntos capitales inmovilizaron en gran parte a la Unidad Popular y al Gobierno. Entonces, la situación empeoró aceleradamente hasta culminar con el golpe.

Así pues, a nuestro juicio, desde el día mismo de la elección presidencial de 1970 hasta el último momento del Gobierno Popular, el combate por la revolución se convirtió en la lucha, entre el pueblo y la reacción, por cambiar la correlación de fuerzas en favor de uno u otro.

Es preciso agregar que el concepto de una correlación de fuerzas favorable no es sinónimo de mayoría y que, en todo caso, hablando de esta última, lo importante es la mayoría activa. La mayoría hay que buscarla siempre, pero ella no basta por sí sola y, en determinados instantes, hasta puede faltar transitoriamente. El concepto de una correlación de fuerzas favorable es, entonces, más rico y complejo. Comprende, entre otros factores, la moral de combate, el nivel de organización, la capacidad de movilización de las masas, la homogeneidad del pensamiento de la coalición y, de una manera relevante, el componente militar.

El desenlace que tuvo nuestra revolución no era, por cierto, fatal. Las discrepancias que, obviamente, se presentan en toda coalición no tienen que primar obligatoriamente. Es posible superarlas. Esto exige, además de un programa y de una conducción política acertados, la presencia permanente de las masas, porque en definitiva la revolución es su obra.

La cuestión capital de toda revolución, la toma de la totalidad del poder, dependía, en las condiciones de Chile, de la capacidad de la Unidad Popular de aislar al enemigo y forjar una superioridad de fuerzas que hiciera posible avanzar de la conquista de la Presidencia de la República al dominio sobre todo el aparato del Estado, comprendida la transformación profunda de todas sus instituciones.

La reacción presenta el objetivo revolucionario de la conquista plena del poder como un fin siniestro, como un propósito totalitario, como la antidemocracia. Y es precisa-

mente lo contrario. Al proponernos tal meta, los revolucionarios perseguimos algo muy noble y democrático. Partes tan fundamentales para la vida de un país, como los tribunales de justicia, las FF. AA., los organismos de fiscalización y los resortes decisivos de la dirección económica, permanecen, en el Estado burgués, al margen de un real control democrático, y en su generación, composición y funcionamiento está ausente el pueblo. Por lo tanto, se trata de que a todos los organismos e instituciones del Estado tengan acceso la clase obrera y el pueblo y que, en definitiva, se encuentren en sus manos. Ello no está vinculado, como la reacción lo presenta, a ningún procedimiento tortuoso, sino a formas, métodos y caminos democráticos decididos y respaldados por el pueblo. Se podría afirmar que la conquista de todo el poder es la única materialización verdadera del concepto de Lincoln sobre la democracia: «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».

En Chile fue posible aislar y superar en fuerzas al enemigo para el cumplimiento de una serie de tareas revolucionarias, como la nacionalización del cobre y de grandes empresas monopólicas, la estatización de la banca, la Reforma Agraria y el control de casi todo el comercio exterior. Pero tal superioridad no se logró para el cumplimiento de las tareas revolucionarias dirigidas a la conquista de la plenitud del poder. Esto se debió, principalmente, al hecho de que la mayoría del pueblo asociaba su destino al problema de quién tiene el gobierno en sus manos antes que a la cuestión de en qué manos está todo el poder.

La necesidad de conquistarlo en su totalidad no estaba en la conciencia de las grandes masas populares debido a una deficiencia de muchos años en la educación política del pueblo, de lo cual los comunistas nos sentimos particularmente responsables. No disponíamos, por lo tanto, de la fuerza activa adecuada y posible de movilizar para resolver integralmente dicha cuestión. De ello es ilustrativo el hecho de que al proponerse la creación de tribunales populares —medida limitada que, en el fondo, consistía en una democratización parcial del aparato judicial—, o al propender a la creación de una escuela nacional unificada, democratizando el sistema educacional, la falta de claridad sobre las transformaciones que eran imprescindibles en el plano

institucional, fue aprovechada por el enemigo, y nos vimos obligados a echar pie atrás y a abandonar estas iniciativas. El propósito que las inspiraba era plausible; pero, no se había formado aún una conciencia mayoritaria que las hiciera realistas. En la situación concreta, era un error proponer tareas que dividieran el frente de apoyo. Más adelante, los propios hechos fueron dejando en claro ante las masas el carácter de clase del Parlamento, del Poder Judicial y de las instituciones armadas. Pero, entonces la correlación de fuerzas ya había sufrido un deterioro, lo que no permitió –aunque más sectores estuviesen conscientes de su necesidad– emprender esfuerzos fructíferos para resolver los problemas pendientes del poder, incluida ciertamente la democratización de las instituciones militares, en cuyo interior los sectores partidarios del proceso de cambios no tenían significativa expresión.

La clase obrera y demás fuerzas avanzades se empeñaron en crear otro tipo de Estado. Surgieron formas de un nuevo poder. En las industrias estatizadas se crearon comités de administración, de producción y de vigilancia. Los sindicatos se agruparon en cordones industriales. Los consumidores crearon juntas de abastecimiento y de control de precios (las JAP). Pero estos embriones del nuevo poder, que constituían una experiencia muy rica, no alcanzaron el desarrollo necesario. A esa altura, la escalada reaccionaria lograba cambiar el curso de la situación. Y la ultraizquierda hacía lo suyo intentando transformar tales organizaciones en una suerte de poder alternativo al Gobierno del Presidente Allende, con lo cual debilitaba el poder popular real y facilitaba las maniobras del enemigo.

En la marcha del proceso revolucionario tenía señalada importancia el éxito del Gobierno Popular. Se requería demostrar que el régimen que despuntaba abría las compuertas al desarrollo de las fuerzas productivas, al incremento económico, a una mejor distribución de la renta nacional, al aumento del nivel de vida del pueblo, en suma al progreso del país y a la justicia social. Ello se demostró mientras se pudo aprovechar la capacidad instalada de la industria y, sobre esta base, producir más y mejorar los ingresos de los trabajadores y de los pequeños y medianos industriales y comerciantes. Pero llegó el momento en que lo decisivo era el aumento de la productividad. Una gran

parte de los trabajadores se guió por la orientación de nuestro Partido y realizó múltiples y valiosos esfuerzos, en las industrias estatizadas y en el campo, para ganar la batalla de la producción. El triunfo pleno del Gobierno de la Unidad Popular en la solución de los problemas económicos le habría permitido consolidar y desarrollar lo que al comienzo había conseguido en cuanto a volcar a su lado a la mayoría del país. Esto habría facilitado enormemente el avance hacia el cumplimiento de las tareas relativas a la conquista del poder. Pero el sabotaje reaccionario en la producción, la política de desestabilización puesta en práctica por el imperialismo norteamericano y, de otra parte, el desprecio por las tareas económicas y la falta de una verdadera dirección en la economía, terminaron por pesar más.

Fue así como se presentó en Chile la cuestión del poder.

*

LA REVOLUCION CHILENA demuestra que, cualquiera sea la vía que se abra, la hegemonía de la clase obrera y el papel que desempeña su vanguardia son factores decisivos.

La hegemonía de la clase obrera se conquista en la lucha, y su reconocimiento por otras clases y capas sociales se produce sólo cuando ella existe en los hechos. Tal hegemonía se logra si la clase obrera lleva a cabo una consecuente política de alianzas y tiene éxito en este terreno.

Pues bien, en la lucha por forjar una correlación de fuerzas favorable a la revolución, uno de los campos de disputa principales pasaron a ser la pequeña burguesía, los demás sectores de capas medias e incluso el semiproletariado. Su número y significación, en un país como Chile, es grande. Dichos grupos sociales son numerosos. No constituyen un todo homogéneo ni mucho menos. Entre ellos se encuentran, en primer término, los campesinos y, además, los sectores empobrecidos de la población, los pequeños comerciantes e industriales, los artesanos, así como también los profesionales libres, los intelectuales, los estudiantes, etc. y asalariados que no pertenecen al proletariado. La tendencia en estos sectores a vacilar entre las posiciones del proletariado y las de la reacción se pone al rojo en un período de cambios revolucionarios. En la experiencia chilena, una parte de estas fuerzas marchó durante todo el

proceso revolucionario junto al movimiento popular. Pero, su número mayor estuvo en una disputa permanente, pasando, de un cierto apoyo al Gobierno o una actitud neutral en el comienzo, a colocarse en gran número, en el último período, al lado de la contrarrevolución. De tal hecho se ha querido sacar la conclusión general que este desplazamiento negativo era inevitable. Se ha sostenido que la mayoría de los sectores intermedios en cuanto vislumbran la posibilidad de cambios de fondo se pasan al lado de la reacción, como una forma de proteger sus «privilegios relativos». De acuerdo con estas opiniones, la Unidad Popular no habría podido aspirar a más de lo que alcanzó, al apoyo de una parte minoritaria de estos sectores.

Esta conclusión no es correcta. Desde luego, un número apreciable de personas de las capas intermedias tienen condiciones de vida inferiores o similares a las del proletariado. Entre ellas se encuentra una parte importante de las masas campesinas y un número considerable de personas que se han visto obligadas a emigrar del campo hacia la ciudad y que subsisten realizando funciones auxiliares en la esfera de los servicios o trabajando algunas pocas horas en el día, proceso que en Chile se ha dado con particular intensidad. Todos estos sectores sólo pueden encontrar un lugar adecuado en la sociedad y mejores perspectivas junto a la clase obrera. La solución definitiva de sus problemas únicamente es posible de triunfar ésta. Por lo tanto, las posibilidades de alianza y de entendimiento con ellos son permanentes.

La pequeña burguesía tiene determinadas contradicciones con la clase obrera. Pero, no hay la menor duda que, a la vez, es víctima de la política de los monopolios, de la concentración del capital en manos de la oligarquía financiera, con la característica que es esta contradicción la que se va profundizando, lo que aumenta las posibilidades de su acuerdo con el proletariado. De lo que se trata es, precisamente, de producir dicho entendimiento. Ello, en el caso del proceso revolucionario chileno, se alcanzaba mediante la sujeción estricta al Programa, el cual contemplaba también los intereses de los sectores intermedios y dirigía los golpes en contra del imperialismo y de la oligarquía. De allí que, en el primer período del Gobierno,

cuando se actuó de acuerdo con el Programa, se dio una tendencia positiva entre estas capas. En lo político, la solución acertada de este entendimiento hacía necesario buscar el acuerdo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, que nutre sus filas en estos sectores en forma significativa. De paso, esta política facilitaba, también, la cohesión de la propia clase obrera, en la cual la Democracia Cristiana tenía y tiene una fuerza no despreciable. La línea proletaria de amplias alianzas no ayuda a fortalecer la influencia burguesa en el interior de la clase obrera, sino a liberar a ésta de tal influencia.

El éxito de esta línea requiere de una labor paciente por parte del proletariado y sus organizaciones, que tenga en cuenta la complejidad del problema y la capacidad del imperialismo y la reacción de influir sobre estos sectores.

De otra parte, las acciones de la ultraizquierda contra propietarios pequeños y medianos, que no fueron combatidas por toda la Unidad Popular, tuvieron una repercusión negativa superior al número de esas acciones y al peso real de sus promotores. En esto influyó el hecho de que, en la Unidad Popular no existía plena coincidencia respecto al carácter de la etapa de la revolución. Alguna gente de la Unidad Popular pensaba que ya se trataba de una revolución socialista y no entendía, en lo referente a los sectores medios, que, incluso cuando se plantea dicha alternativa, debe seguirse en relación con ellos una política que permita su aporte al proceso. Esta política debe ser amplia y flexible y, a la vez, firme, conjugando el interés material de dichos sectores con la persuasión y la presión de la lucha de las masas, dirigida ésta a vencer las vacilaciones de la pequeña burguesía.

El hecho de que proclamemos abiertamente nuestros objetivos socialistas, no restringe de por sí las posibilidades de alianzas de la clase obrera. En la época actual, en las condiciones del capitalismo monopolista de Estado, que llega incluso a países no desarrollados, las contradicciones entre el imperialismo y dichos países y entre las oligarquías financieras y los pueblos, se acentúan. En este terreno, el problema consiste en descubrir y trabajar con tales contradicciones, a la manera que lo hizo Lenin en la sociedad rusa de su tiempo. Ello significa encontrar las fórmulas de los amplios entendimientos, tratar de ganar, incluso para

el socialismo, a las capas medias, atender sus reivindicaciones legítimas, y asegurarles un nivel de ingreso y formas de participación en la nueva sociedad, que las induzcan a optar por ésta.

En la gestación de la victoria de 1970 y en las realizaciones del Gobierno del Presidente Allende entregaron su contribución todos los partidos de la Unidad Popular. Eso está fuera de discusión. Pero lo está también el hecho de que el Partido Comunista de Chile fue el principal artífice de la Revolución Chilena. Tuvo el mérito de vislumbrar la posibilidad de conquistar el Gobierno por la vía no armada, e indicó el camino para materializar esta alternativa. Luchó incansablemente, durante años y años, por la unidad de las fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas alrededor de la clase obrera y en función de las transformaciones que maduraban en la sociedad chilena. Definió acertadamente el carácter de la revolución y la política de alianzas. El Partido llegó a la conclusión de que la vía pacífica no excluía algunas formas de violencia, como la toma de tierras por los campesinos y de terrenos por los pobladores de la periferia urbana, y que requiere ante todo de la unidad y de la movilización activa y constante de las masas. En la lucha por esta línea, cuya justeza demostró la práctica, libró un combate permanente contra las posiciones erróneas, contra el sectarismo de izquierda que cuestionaba su política y se oponía a las amplias alianzas y contra las tendencias derechistas de conciliación con el enemigo.

El Partido Comunista había alcanzado una influencia muy fuerte en amplios sectores de la clase obrera, en especial en su proletariado industrial y minero, así como entre los obreros de la construcción. En los últimos años, la había extendido rápidamente al campo, particularmente hacia los trabajadores agrícolas. Contaba con una presencia muy grande en el seno de la juventud. Las Juventudes Comunistas eran la mayor organización juvenil política del país. La gravitación del Partido era muy considerable en los medios universitarios y en la esfera de la cultura. Su peso en otros sectores medios era bastante menor. Desde el punto de vista orgánico, el Partido Comunista llegó a ser el más numeroso. En sus filas, con diversos grados de formación política, militaban al momento del golpe 195 mil compañeros y en las Juventudes Comunistas

87 mil. Constituíamos una fuerza poderosa que, cuando se daba el acuerdo con los aliados, era capaz de poner en movimiento a grandes masas, entendiendo que en un proceso revolucionario el concepto de masas ya no sólo se refiere a centenares de miles de personas, sino que a millones de seres humanos. Ello era posible en particular frente a grandes problemas nacionales cuya solución desde el punto de vista de la conciencia de las masas, se encontraba madura. Sin embargo, en los casos y en los asuntos en que el entendimiento con otras fuerzas no se producía, su capacidad de movilizar al pueblo se restringía y se limitaba a los sectores que estaban bajo su influencia más directa. En el período del Gobierno Popular imperó una fuerte estratificación política. El peso en la vida nacional de los partidos políticos era muy grande y sus resoluciones no sólo guiaban la conducta de sus militantes, sino también la del grueso de los sectores sobre los que influían. No deja de ser ilustrativo, para apreciar nuestras posibilidades, el hecho que, desde el punto de vista electoral, el Partido Comunista era el que sacaba una cantidad menor de votos por militante, poco más de dos votos por cada miembro del Partido o de su organización juvenil.

Por eso, el Partido Comunista consideraba que cumplía su misión de vanguardia no sólo buscando el fortalecimiento de sus filas y más influencia directa sobre las masas, sino, al mismo tiempo, el entendimiento con el Partido Socialista y el acuerdo con todos los partidos de la Unidad Popular. Nuestro Partido continúa y continuará buscando la unidad con todas las fuerzas democráticas y antifascistas, incluso las no fascistas, más allá de las modificaciones previsibles o ya producidas. Esto implica, en primer término, el acuerdo con el Partido Socialista y con todos los partidos de la Unidad Popular.

LO CONCRETO ERA QUE, en la situación existente, no todo dependía de nosotros. La posibilidad de cumplir con nuestro rol dirigente tenía limitaciones objetivas. No en todos los momentos podíamos convertirnos en vanguardia reconocida de la clase obrera y el pueblo en general.

Como enseña el leninismo, la línea firme del Partido, su decisión inflexible es, también, un factor del estado de ánimo de las masas, sobre todo en los momentos decisivos. Tuvimos algunas debilidades en este terreno. Por ejemplo,

no nos jugamos enteros en defensa del gabinete encabezado por el General Prats, cuya renuncia fue provocada en marzo de 1973, precisamente cuando la reacción enfiló directamente la proa hacia el golpe de Estado y el Gobierno Popular necesitaba seguir contando con el sector de las Fuerzas Armadas dispuesto, en ese entonces, a continuar colaborando con él. Sin embargo, en lo específico de la situación prevaleciente en el curso del proceso revolucionario chileno, no bastaba con la decisión inflexible del Partido para salir adelante en los momentos críticos. La iniciativa y la decisión revolucionaria tienen marcada importancia, en ocasiones una importancia vital. Pero, en su aplicación no se puede prescindir de las condiciones objetivas, concretas, so peligro de caer en el voluntarismo, en el «deseoísmo» y hasta en la aventura.

Por mucho que haya habido –y obviamente hubo– de específico en la Revolución Chilena, como en toda revolución, ninguna tesis del marxismo-leninismo podría ser cuestionada a la luz de esta experiencia. Al contrario, las confirma. De un análisis profundo y pormenorizado de todo el proceso chileno, se desprende la validez de las leyes generales de la Revolución. Los éxitos que logramos están estrechamente vinculados a su aplicación, y los reveses a su no aplicación, antes que a aciertos y a fallas en la consideración de lo específico, de lo cual tampoco se puede prescindir. Esto es claro. Pero no resultaría serio decir, por ejemplo, que la caída del Gobierno de la Unidad Popular se debió simplemente a que no se aplicaron tales o cuales leyes. La mera constatación de que no resolvimos la cuestión de la conquista de la totalidad del poder, y que no cambiamos oportunamente de vía y otras semejantes, no constituyen ninguna explicación científica si esas afirmaciones se hacen sin tener en cuenta la situación que se daba, los impedimentos y las dificultades reales, es decir sin el examen objetivo del proceso. Una vez más recordemos a Lenin: la verdad es siempre concreta.

El Pleno de Agosto de nuestro Comité Central puso de relieve nuestros errores y deficiencias efectivos. Dos de ellos tienen particular relevancia. Nuestro Partido hizo una buena elaboración de su línea política para todo el período que condujo a la conquista de una parte del poder y para los primeros tiempos del Gobierno Popular; pero, hoy es

claro que fue insuficiente la elaboración de su línea en relación a la conquista de todo el poder y del tránsito de una etapa a otra de la Revolución para llegar efectivamente al socialismo. Y, por otra parte, careció de una adecuada política militar. Desde 1963 entró en la preparación militar de militantes suyos y se esforzó por contar con algún armamento para defender el Gobierno Popular que, estábamos seguros, el pueblo conquistaría. Pero esto fue insuficiente y no estuvo acompañado de lo principal, de un trabajo sostenido, de larga data, dirigido a divulgar la verdadera posición del movimiento popular ante los militares, para desvanecer la imagen calumniosa que se propaga sobre la clase obrera y la Unidad Popular y para que las ideas del marxismo sean conocidas sin tergiversaciones. Hay que reconocer, en cambio, que el enemigo siempre actuó en el interior de las Fuerzas Armadas.

Los golpes enseñan. Nuestro Partido, así como los otros partidos de la Unidad Popular, han aprendido ya muchas lecciones. El análisis no está agotado, sigue abierto y habrá que continuar extrayendo experiencias y sistematizándolas. De esto y de la asimilación de la experiencia de otros partidos y de otros pueblos, de la lucha y del estudio de la teoría revolucionaria, la clase obrera y el pueblo de Chile aprenden y aprenderán.

Ya hay algunas cosas claras. En la Unidad Popular –que, entre otros méritos, tiene el de haber soportado sin quiebre la prueba de la derrota– existe hoy un pensamiento más nítido y arraigado sobre el carácter de la revolución, sobre la necesidad de distinguir etapas sin separarlas por muralla alguna, de desarrollar una amplia política de alianza, de reunir a todas las fuerzas antifascistas y no fascistas, comprendida la Democracia Cristiana y los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, para echar abajo la dictadura, crear una nueva democracia, generar un gobierno popular cívico-militar y reemprender la marcha por el camino de las transformaciones, con vista al socialismo.

Para el pueblo chileno se hace hoy más evidente que la libertad en sus expresiones concretas no está por encima de las clases. Desde las guerras de Arauco contra el conquistador español, ha luchado por ella. La clase obrera, al proponerse no sólo su emancipación sino también la de toda la sociedad, lucha consecuentemente por la libertad

para la inmensa mayoría y, en definitiva, para todos. En los tres años del Gobierno Popular, este problema capital no fue abordado en forma correcta. Nuestro Gobierno significó un gran paso en la democratización del país, amplió las libertades del pueblo, dio a los trabajadores derechos y posibilidades que nunca habían tenido, como la de dirigir las empresas en las que trabajaban. Todo esto forma parte de sus grandes méritos. Cometió, sin embargo, un grave error. Permitió que la contrarrevolución usara casi ilimitadamente de la libertad para terminar con la libertad.

La Unidad Popular en su totalidad era y es partidaria de un régimen pluralista, que comprende incluso el reconocimiento de garantías para la oposición, siempre que ésta se encuadre en los marcos de la ley que dicte soberanamente el pueblo, conforme a los mecanismos de un Estado de Derecho. Nuestro pensamiento –el de los comunistas chilenos– es rotundo a este respecto. Somos partidarios del pluralismo político así descrito, sin darle cabida al fascismo que es sinónimo de crímenes y es contrario a la libertad. Para reiterar lo que dijo nuestro Pleno, pensamos que la revolución debe darle mayor libertad al pueblo y no a sus enemigos. Esto es lo que nos dicta nuestro dolorosa experiencia.

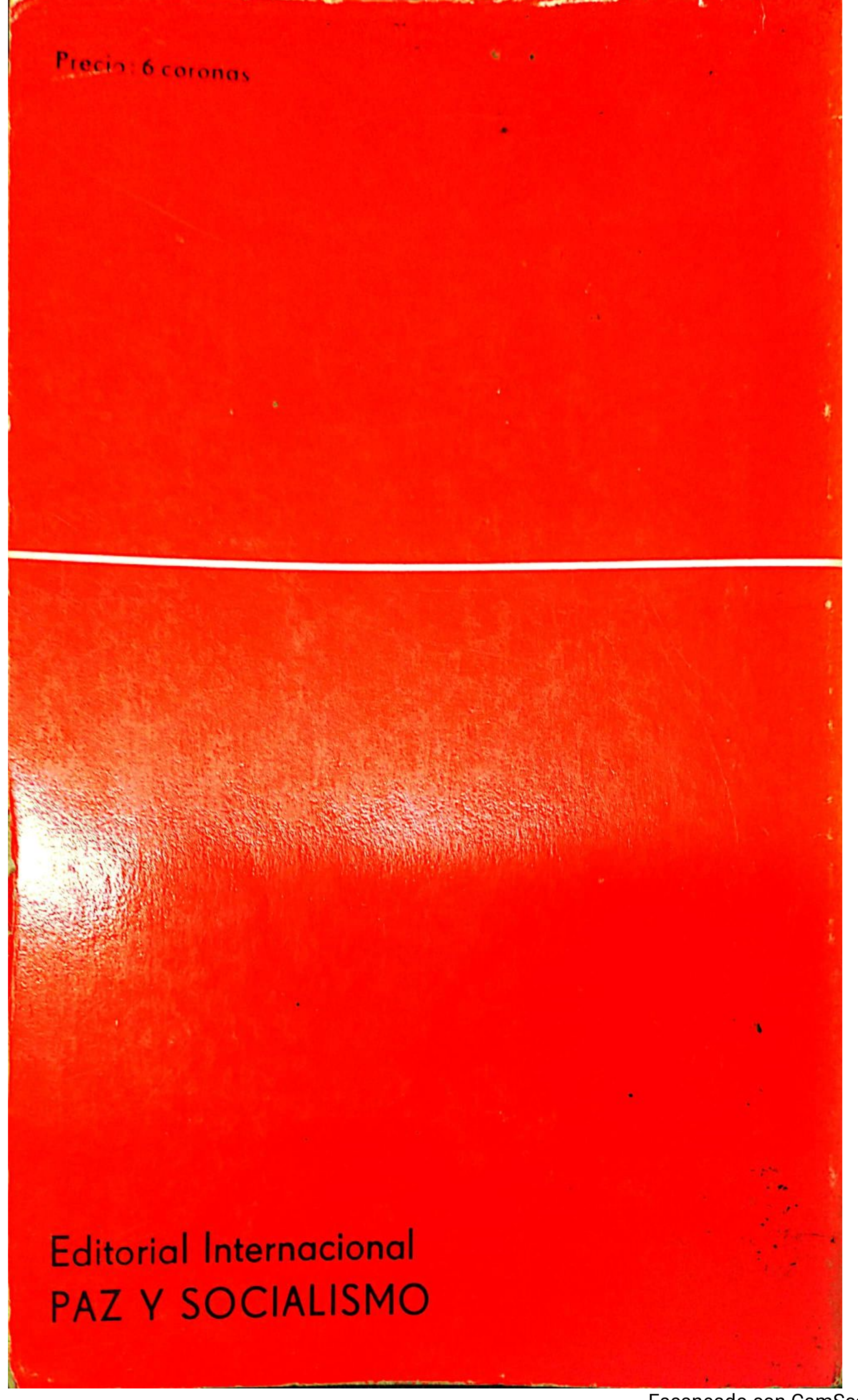
Una última cuestión. La Revolución Chilena se abrió paso por una vía no armada por un período prolongado, no sólo por el esfuerzo de nuestro pueblo, sino también en razón de las nuevas condiciones internacionales, del cambio en la correlación de fuerzas en el mundo. No todos apreciaban bien hasta ayer el significado histórico de la Revolución de Octubre, el rol de la URSS y del campo socialista y su política en favor de la coexistencia pacífica. Entre los revolucionarios solían aparecer algunos atisbos antisoviéticos y concepciones falsas. La política de distensión, por ejemplo, para ciertas personas frenaba la lucha de los pueblos. En este terreno, se ha producido una importante evolución. Los hechos han sido elocuentes. No sólo contamos ayer con el valioso apoyo de la URSS y del mundo socialista, sino que seguimos contando hoy con él. El movimiento de solidaridad con la causa de Chile está en todos los continentes y en él participan las más amplias fuerzas democráticas; pero, no hay duda que los más consecuentes son los países socialistas, con la triste excepción de China. Por otro lado, du-

rante estos años de brutal represión en Chile han ocurrido acontecimientos tan trascendentales como las victorias de Vietnam y de Angola, la caída de la dictadura fascista de Portugal y el derrumbe del imperio colonial lusitano, el fin de la dictadura en Grecia y el desmoronamiento del franquismo en España. Todo esto le ha hecho comprender, ya no sólo a una parte sino al conjunto del pueblo de Chile, lo que significa la Unión Soviética y el campo socialista, la importancia del internacionalismo proletario y de la solidaridad internacional y el hecho de que el mundo marcha hacia adelante y no hacia atrás.

En esto y, ciertamente, en primer término, en su propia lucha basa la seguridad en su victoria. Nuestro pueblo derrotará al fascismo, creará un nuevo régimen democrático y volverá a tomar el camino hacia el socialismo, a cuyo umbral alcanzó a llegar con el Presidente Allende.

[1] Partido Comunista de Chile. Boletín del Exterior. n.º 26. noviembre-diciembre, 1977, págs. 20–21.

Cierre de la edición: 22 de diciembre de 1977


Precio: 6 coronas
Editorial Internacional
PAZ Y SOCIALISMO